# CAMBIAR EL MUNDO DESDE ARRIBA

Los límites del progresismo

Decio Machado
Raúl Zibechi

*Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo* — Decio Machado y Raúl Zibechi, autores — México: Bajo Tierra A.C., Comunidad Autonomía y Libertad (Comunal), 2017
176 pp: 21 cm x 14 cm
Incluye referencias bibliográficas

Comité editorial: Mina Lorena Navarro Trujillo, César Enrique Pineda Ramírez, Gizella Garciarena Hugyecz
Diseño de portada: Nayeli Martínez González
Cuidado de la edición y corrección de estilo: Gizella Garciarena Hugyecz
Diseño de interiores: Argel Gómez Concheiro
Administración: Ramón Enrique Mejía Galicia

Primera edición 2017

D.R. © Decio Machado, Raúl Zibechi, Autores.
D.R. © Bajo Tierra A.C./ Comunidad Autonomía y Libertad (Comunal)
Necaxa 72 apto. 11, Col. Portales Sur, CP 03300, Ciudad de México
bajotierraediciones@gmail.com

ISBN:

© Bajo Tierra A.C. en armonía con la presente obra registran: *Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*. Bajo licencia legal de Creative Commons.
Atribución - no derivadas 2.5 México.
Eres libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las siguientes condiciones:
► Al reutilizar o distribuir la obra, tienes que dejar bien claro los términos de la licencia de la misma.
► Algunas de estas condiciones pueden no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
► Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales de los autores.

Impreso y hecho en México

# CAMBIAR EL MUNDO DESDE ARRIBA

Los límites del progresismo

Decio Machado
Raúl Zibechi

# Índice

**Presentación** 9

**Introducción** 13

**Capítulo I.** Los gestores/administradores. ¿Una nueva burguesía? 37

**Capítulo II.** Élites o nuevas clases dominantes en los procesos de cambio 57

**Capítulo III.** Nuevas élites bajo el progresismo 79

**Capítulo IV.** Fin de ciclo: desigualdad y represión para sostener los privilegios 121

**Epílogo.** Encrucijada del pensamiento crítico y crisis de los intelectuales 155

**Bibliografía** 163

# Presentación

El fin del ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina ha modificado por completo la región. Las esperanzas puestas en ellos, las expectativas, la disputa con las derechas latinoamericanas, el imaginario de lo que es la izquierda; todo ha sido arrastrado por su repliegue. En el continente entero ha llegado una hora oscura.

En una mirada de largo aliento, sin embargo, el imperialismo, las fuerzas neoliberales y los límites de economías estructuradas dependientes de manera histórica son sólo algunos de los factores que no alcanzan a explicar por completo esta abrupta caída en cadena. Desde una mirada crítica, claramente de izquierda antisistémica, el sociólogo ecuatoriano Decio Machado haciendo mancuerna con el reconocido periodista uruguayo Raúl Zibechi, realizan una minuciosa evaluación de la década del progresismo.

Desde Venezuela hasta Argentina, pasando por Brasil, Bolivia y Ecuador, Machado y Zibechi desbrozan lo que quizás es el núcleo de debilidad, contradicción y límite de aquellos gobiernos: su concepción sobre el cambio social, su horizonte de transformación, en especial, su ejercicio del poder estatal. Los autores quieren mostrarnos una tesis que ha significado un intenso debate en las últimas décadas: el  Estado y sus límites emancipatorios.

Con un arsenal de cifras pero sobre todo contrastando los procesos sociales recientes con ideas de los movimientos y personajes revolucionarios desde Marx, Lenin, Mao y el Ché hasta la intelectualidad de Sweezy, Immanuel Wallerstein, Fernand Braudel, Antonio Negri o Agamben, este breve pero muy intenso y profundo análisis de los gobiernos progresistas lleva al lector hacia una crítica radical del poder, aunque éste se haya nombrado de izquierda, radical o incluso socialista. Con el conocimiento panorámico y extenso sobre los movimientos sociales que caracteriza el trabajo de Zibechi y la mirada societal del que fuera asesor en su momento del presidente de Ecuador Rafael Correa, la América Latina gobernada desde el progresismo muestra su rostro oculto.

El eje por el que se despliega su crítica es arrasador: las luchas, levantamientos, movimientos y rebeldías que cimbraron al continente en las calles y montañas provocaron el debilitamiento de las élites neoliberales, emergiendo gobiernos que muy pronto se convirtieron en nuevas élites dominantes. Estos grupos y nuevas burocracias domesticaron y estabilizaron la rebeldía social que había quebrado al neoliberalismo. Atados al extractivismo y a una visión estatal-conservadora, se impusieron, trasmutando en oligarquías, es decir separados de las clases populares, sin control ni mandato de ellas, privilegiando un modo y gestión de la economía que repartía beneficios pero fortalecía al capital: gobernaron desde arriba.

Bajo Tierra Ediciones presentamos *Cambiar al mundo desde arriba. Los límites del progresismo*, porque nuestra línea editorial es muy definida: criticar al poder, conocer y aprender de las luchas y resistencias, pensar y repensar la emancipación. Bajo Tierra Ediciones publica este trabajo siguiendo la divulgación de los trabajos de Raúl Zibechi, quien ha confiado en nuestra independencia y autogestión a pesar de ser sólo un pequeño proyecto editorial, no movido por la máxima ganancia. *Autonomías y emancipaciones* (2008), *Brasil potencia* (2013) y *Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías* (2015) son las investigaciones que Zibechi ha difundido a través de nuestro sello, pensando, creemos, también, en nuestros vínculos y trabajos con los movimientos sociales en nuestro país, como ha decidido hacerlo a lo largo del continente, enlazándose a través sólo de editoriales y proyectos autogestivos.

Esta publicación, junto a Machado, finalmente, es una crítica corrosiva y devastadora. Sólo de ella puede germinar un nuevo tipo de mirada, una que aprende de los errores históricos, de las dominaciones envueltas en discursos de izquierda y progresismo. Evaluar los límites no significa hacerle el juego a la derecha. Defender y justificar las contradicciones del poder ha sido muy peligroso en el pasado. Nunca más debe repetirse esa práctica.

Alguien había escrito hace mucho que "lo que nos toca hacer actualmente es criticar sin contemplaciones todo lo existente; sin contemplaciones en el sentido de que la crítica no se asuste ni de sus consecuencias ni de entrar en conflicto con los poderes establecidos". Son palabras de Marx. En "Gobernar el Mundo desde arriba", se hace esa crítica implacable en esa tradición, quizá porque como el intelectual y militante de Tréveris decía, *queremos encontrar el mundo nuevo a partir de la crítica del viejo*. Miremos entonces los límites del progresismo, para ayudar a parir nuevos mundos, que crecen ya en los intersticios de lo dominante, y son la única ventana hacia el mañana.

**Bajo Tierra Ediciones 2017**

# Introducción

La mañana del 27 de febrero de 1989 "bajaron los cerros" y tomaron Caracas. La irrupción espontánea, caótica y violenta de los pobres de la ciudad modificó para siempre la realidad del país y, de algún modo, del continente. El gobierno de Carlos Andrés Pérez había impuesto un paquete de medidas económicas, financieras y fiscales en el marco de los ajustes estructurales impulsados por el FMI para reducir el déficit fiscal. El 26 de febrero se anunció un alza de 30% en los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte, también en un 30%, con la perspectiva de elevarlos luego de tres meses hasta 100%.

Las protestas se iniciaron en los alrededores de las terminales de autobuses ante el abuso de los transportistas que subieron los precios por encima de lo acordado. Durante el día 27, la población empobrecida levantó barricadas, incendió autobuses y saqueó comercios con una furia incontenible, que hablaba por décadas de injusticias. Como señala el informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la poblada penetró en abastos y supermercados "encontrando en sus depósitos los productos de la dieta básica que durante semanas habían sido acaparados a la espera de la liberación de precios anunciada por el gobierno

nacional" (Provea, 1989: 8). En las acciones "espontáneas" participaron vecinos de los barrios populares que habitan los cerros de la capital, estudiantes y sectores de la clase media descontentos con las políticas de los sucesivos gobiernos.

Al día siguiente el gobierno impuso el toque de queda con la suspensión de las garantías constitucionales, sacando el ejército a las calles. En los días que siguieron al estallido, la represión militar, incluyendo ejecuciones, se convirtió en nueva rutina contra quienes desafiaron el orden impuesto. El 28 fue el día de mayor represión militar. Según cifras oficiales, durante el Caracazo hubo 276 muertos, pero los parlamentarios de Causa R elevaron la cifra a 379, mientras fuentes estudiantiles y corresponsales internacionales hablaron de un millar (*ibid.*). El activista Roland Denis eleva la cifra de muertos hasta cinco mil personas, aunque no cita fuentes, y destaca que la rebelión del día 27 "dejó sembrado un código subterráneo de lucha", ya que en los años sucesivos "a pesar de la represión, la violencia colectiva y 'espontánea' se convirtió en una forma recurrente de lucha entre las comunidades, más que todo periféricas de las grandes ciudades, y grupos protestatarios, preferentemente estudiantiles" (Denis, 2001: 18).

Lo cierto es que el Caracazo o Sacudón abrió un nuevo periodo en la historia reciente de Venezuela. Es importante detenerse en este proceso, pues no difiere mucho del seguido por otros países y las más diversas fuerzas sociales y políticas. Con algunas particularidades no extrapolables, el caso del movimiento popular venezolano se asemeja bastante al proceso seguido por movimientos en principio muy diferentes de Ecuador, Bolivia y Argentina, los países donde se produjeron los mayores levantamientos populares.

En primer lugar, tenemos una multiplicación de las protestas que arrancó a mediados de la década de 1985, creciendo luego del Caracazo hasta los primeros años 2000. Pero, además del aumento de las protestas, se evidenciaron cambios cualitativos: después del predominio inicial de marchas y paros, se registró un rápido deslizamiento hacia formas más contundentes, que incluyeron cierres de vías, tomas de edificios, invasiones, quemas y saqueos (López Maya, 2002).

El vasto y profundo activismo popular enraizado en los territorios de las periferias urbanas, jugó un papel determinante en los

años que siguieron al Caracazo, siendo "el punto de partida de una revolución político-cultural cuyo eco recorre toda la década de los noventa hasta llegar a nuestros días con una fuerza muy particular" (Denis, 2001: 19). En palabras de Denis, apareció el pueblo-masa-nación como nuevo sujeto político que ejercía la democracia de calle a través de la movilización permanente de estudiantes y barrios populares, subvirtiendo y desfondando el régimen de Punto Fijo,[1] al cual identifica como una partidocracia corrupta y represiva. Con los años, las resistencias locales y sectoriales se entrelazaron creando la Asamblea de Barrios —"centro de inauguración del poder social en el país y agente articulador de las luchas populares" (*ibid.*: 22)—, redes culturales y de educación popular, cooperativas, medios de comunicación comunitarios, militancia estudiantil secundaria y universitaria, que crecieron de modo exponencial entre 1991 y 1993.

Se trataba de una nueva camada de movimientos autónomos y horizontales que cuestionaban la lógica de la representación y las burocracias políticas y sindicales, formas comunitarias de organizarse y luchar que articulaban una suerte de nueva hegemonía en el campo popular, definidas por Denis como "colectividades autocentradas", territoriales o no. Un tipo de acción colectiva que veremos desplegarse, con modos apenas diferentes y actores distintos, a lo largo de la década de 1990 en toda la región.

El 4 de febrero de 1992, apenas tres años después del Caracazo, la rebelión de un grupo de militares modificó el escenario e incidió de modo muy potente en la cultura política de la rebelión. En realidad fue una rebelión cívico-militar, una alianza que venía incubándose desde los años ochenta, en la que las organizaciones populares revolucionarias participaban de forma directa o indirecta. "Dicha insurrección se presenta como un hecho clave para entender los perfiles organizacionales, políticos y hasta culturales que irá adoptando el desarrollo extensivo de la subversión social que seguirá su curso luego del fracaso de la rebelión, hasta llegar a nuestros días" (*ibid.*: 30). El hecho de sentir que parte de la fuerza armada respaldaba el odio popular contra las cúpulas ("estaban de nuestro lado", dice Denis),

1 El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo establecido entre los dos principales partidos venezolanos (AD y COPEI) luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, en marzo de 1958, para turnarse en el poder.

fortaleció el sentimiento antisistema y la autoestima del movimiento que, de ahora en adelante, contaba con un hombre fuerte que lo respaldaba e interpretaba. Los militares presos se convirtieron en símbolo del odio al sistema de partidos corruptos.

En marzo y abril de ese año se convocaron cacerolazos con características insurreccionales, escuchándose por primera vez gritos de "Chávez, Chávez", en lo que sin dudas fue la construcción popular de un liderazgo. Lo que interesa resaltar es cómo en muy pocos años (de hecho, desde 1989 hasta 1992) la autonomía de los procesos populares en desarrollo sufrió cambios importantes, incluyendo la relación con el componente militar. En la larga fragua de la alianza cívico-militar, el papel de los militares consistía en acompañar la insurrección popular, pero luego del 4 de febrero esa tarea "fue sustituida por la versión golpista de la insurgencia", a partir de la cual los uniformados pasaron a ocupar el lugar central y dirigente (*ibid.*: 37). Las mutaciones en la cultura política insurrecta, o si se prefiere el rescate de la vieja cultura caudillista por el pueblo en lucha, se vio reforzada por los alzamientos militares que desplazaron el protagonismo del pueblo en la calle:

> Toda la racionalidad de la nueva cultura política en nacimiento interrumpe así su desarrollo al encajonarse dentro de los círculos conspirativos que monopoliza el chavismo o en general el partido de la supuesta alianza cívico-militar.
>
> Este quebrantamiento de la ética de la resistencia comienza a hacerse patente con el alzamiento del 27 de noviembre del 92, acontecimiento donde se intensifica la participación insurgente del pueblo, pero atrapada en las decisiones que tomarán los '*petit comité*' antes y durante el golpe […] Más tarde, una vez que Chávez sale de la cárcel y se abre el MBR 200 hacia los grupos civiles, la lógica del cogollo se impondrá con mayor fuerza y apoyo, lo que indujo directa o indirectamente a un profundo empobrecimiento de las luchas de masas entre los 94 y 97 (*ibid.*: 45).

En adelante, el centro del escenario fue ocupado por Hugo Chávez, un líder que representaba la rabia y la pasión de los pobres. Congelado ese liderazgo, en cuya configuración no sólo se registró una participación plebeya en sus modos y contenidos, sino también

de los grupos militantes organizados que confluyeron detrás del líder-guerrero al que unos investían de rasgos místicos y otros del carácter del jefe revolucionario, en las protestas nada volvió a ser igual. "Se produce la ilusión —destaca la percepción fina de Denis— de que ya no sería necesaria la acción en sí, esa acción en principio violenta y callejera (…) podía ser sustituida por la convocatoria a oír al líder" (*ibid.*: 47).

En torno a la figura de Chávez se generó un proceso que, en el fondo, no difiere demasiado de aquellos que dieron nacimiento a otros liderazgos caudillistas latinoamericanos del siglo XX, como es el caso de Perón y el peronismo en Argentina. Nos interesa reflexionar sobre aquellos procesos de insurgencia popular ocurridos en varios países de la región que, aunque produjeron hechos de enorme importancia, caminaron hacia la institucionalización de los movimientos que habían protagonizado el conflicto social y político. Con la excepción de la revuelta zapatista a partir de 1994, todas las grandes acciones populares desembocaron en procesos electorales que llevaron al poder a dirigentes que habían participado de forma algo lateral en las revueltas (caso de Evo Morales), o que incluso habían actuado en el campo opuesto al de los alzados (caso de Néstor Kirchner), siendo la excepción en este sentido Ecuador, en gran medida debido al fracaso o la traición del líder designado para encarnar las aspiraciones de los rebeldes (caso de Lucio Gutiérrez).

Los tres casos, a los que podría sumarse el de Luiz Inácio Lula da Silva, hablan de las debilidades de los movimientos desplazados por proyectos políticos enarbolados por partidos como el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil. Si en algún lugar resulta sorprendente el encauzamiento e institucionalización de la rebelión es precisamente en Venezuela, el país donde la revuelta popular llegó más lejos y tuvo el carácter de insurrección armada popular masiva, que fue lo que en realidad hundió al sistema político bipartidista, abriendo un vacío que fue ocupado, muy pronto por cierto, por el chavismo como fenómeno popular, mucho antes de que se convirtiera en gobierno.

Sin embargo, el caso venezolano fue, en realidad, la norma. En Bolivia, la principal diferencia es que la propuesta de transformar la rebelión en organización política electoral para ingresar al Estado

partió del seno mismo de los movimientos, punto en que todos los integrantes del Pacto de Unidad[2] estuvieron de acuerdo. Incluso quienes apostaron a la otra vertiente, la liderada por Felipe Quispe, también construyeron su fuerza político-electoral, aunque nunca tuvieron ni el alcance ni el éxito logrado por el MAS y Evo Morales.

Algo similar sucedió en Ecuador, donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) apoyó la formación del movimiento político Pachakutik para competir en el terreno electoral. Su posterior crisis interna, tras la alianza y posterior ruptura con el gobierno de Lucio Gutiérrez, dejó el campo abierto para la construcción de herramientas electorales alternativas, como fue el caso de Alianza PAÍS.

**LEVANTAMIENTOS POPULARES Y GRANDES MOVILIZACIONES EN AMÉRICA LATINA 1989-2013**

| SUCESO | PAÍS | AÑO | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|
| **Caracazo** | Venezuela | 1989 | Pueblada espontánea |
| **Inty Raymi** | Ecuador | 1990 | Levantamiento indígena |
| **Ya Basta!!** | México | 1994 | Alzamiento zapatista |
| **Caída A. Bucaram** | Ecuador | 1997 | Levantamiento popular |
| **Marzo Paraguayo** | Paraguay | 1999 | Pueblada semiespontánea |
| **Guerra del Agua** | Cochabamba-Bolivia | 2000 | Levantamiento popular |
| **Caída J. Mahuad** | Ecuador | 2000 | Levantamiento popular |
| **Cuatro Suyos** | Perú | 2000 | Gran marcha organizada |
| **Caída de la Rúa** | Argentina | 2001 | Pueblada popular urbana |
| **Cortes rutas** | Paraguay | 2002 | Movilización campesina |
| **No privatizaciones** | Arequipa-Perú | 2002 | Levantamiento popular |
| **Antigolpe Estado** | Caracas-Venezuela | 2002 | Levantamiento popular |
| **I Guerra Gas** | Bolivia | 2003 | Levantamiento indígena |
| **II Guerra Gas** | Bolivia | 2005 | Levantamiento popular |
| **Forajidos** | Ecuador | 2005 | Levantamiento popular |
| **Comuna Oaxaca** | México | 2006 | Levantamiento indígena |
| **Baguazo** | Perú | 2009 | Levantamiento indígena |
| **Marcha TIPNIS** | Bolivia | 2011 | Movilización popular |
| **Jornadas de junio** | Brasil | 2013 | Movilización popular |

2 Alianza de las principales organizaciones sociales bolivianas que llevó al gobierno a Evo Morales y tuvo un papel destacado en el proceso de la Asamblea Constituyente.

Como se desprende del cuadro anterior, que no pretende reflejar todas las acciones populares, entre 1989 y 2005 se produjo un apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que provocaron, de forma directa e indirecta, la caída de una decena de gobiernos sudamericanos: tres presidentes derrocados en Ecuador (Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005); dos en Argentina (Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá en 2001); dos en Bolivia (Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en 2005); uno en Paraguay (Raúl Cubas en 1999); uno en Perú (Albert Fujimori en 2000), uno en Brasil (Fernando Collor de Melo en 1993) y uno en Venezuela (Carlos Andrés Pérez en 1993).[3]

Con la excepción de Perú, en todos los países sudamericanos donde hubo grandes movilizaciones y levantamientos, las izquierdas y los progresismos llegaron al gobierno por la vía electoral. Una vez en la cúspide del poder estatal, aunque tuvieran mayorías suficientes para gobernar en solitario, tomaron el camino del fortalecimiento del aparato estatal, convencidas de que ésa era la herramienta adecuada para impulsar los cambios que deseaban. Aquí confluyen dos problemas mayores: los cambios que necesita y desea buena parte de los sectores populares no pueden procesarse a través del sistema electoral ni del aparato estatal.

Nos guste o no, la democracia electoral ha sido creada para blindar los intereses de los grandes propietarios y garantizar la centralidad del Estado ante la sociedad, no para dar cauce a las necesidades de los oprimidos. Pero lo que parece necesario desentrañar son las razones de fondo que determinaron que potentes rebeliones terminaran siendo reconducidas hacia la gestión de lo estatal en sus diversos escalones, sin que existiera una oposición mínimamente estructurada, como si la participación electoral fuera la salida natural y necesaria para recomponer las crisis en curso. Este tema lo veremos luego de repasar brevemente las gestiones progresistas y el final del ciclo de estos gobiernos.

3 Algunos presidentes fueron destituidos por el parlamento, pero en el marco de agudas protestas callejeras.

## La estabilización: los gobiernos progresistas

A una década de convulsiones prosiguió otra de estabilizaciones. Mediante elecciones llegaron al gobierno fuerzas progresistas en Venezuela (1999), Brasil (2003), Argentina (2003), Bolivia y Uruguay (2005), Ecuador (2007) y Paraguay (2008), siendo discutible si la Concertación chilena puede ser incluida como parte de estas fuerzas. En tres de esos países se aprobaron nuevas constituciones (Venezuela, Bolivia y Ecuador) que encarnaron los procesos que siguieron al hundimiento del viejo sistema de partidos, en gran medida por el empuje de la protesta. En los otros países se registró el ascenso electoral de fuerzas políticas que se presentaron como antineoliberales, sin que se produjeran rupturas drásticas ni dramáticas en el sistema político, salvo en Argentina, donde la renuncia de Fernando de la Rúa abrió un tiempo de incertidumbres que se cerró a mediados de 2002 con la convocatoria de elecciones por parte del entonces presidente Eduardo Duhalde.

Los diversos gobiernos progresistas tuvieron por lo menos cuatro cuestiones en común y algunas diferencias. Esas lógicas comunes fueron: el fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados, la aplicación de políticas sociales compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, el modelo extractivo de producción y exportación de *commodities* como base de la economía y la realización de grandes obras de infraestructura. A nuestro modo de ver, el modelo extractivo anclado en los hidrocarburos, la minería a cielo abierto y los monocultivos como la soja, han sido la clave del éxito económico, mientras que las políticas sociales ancladas en transferencias monetarias fueron el eje de la legitimidad de los progresismos.

El proceso que atraviesa todos los gobiernos mencionados, y el decisivo en los gobiernos que nacen de procesos destituyentes, tiene que ver con el papel central asignado al Estado por las fuerzas del cambio y los gobiernos electos. Las llamadas "revoluciones" (bolivariana, ciudadana…) son los nombres con los que, desde el poder, se identifica a los procesos instaurados con los triunfos electorales que comenzaron a administrar la herencia estatal de modos distintos a los que habían caracterizado al periodo neoliberal.

Venezuela aprobó su Constitución vigente en 1999, Ecuador lo hizo en 2008 y Bolivia en 2009. Ni los procesos constituyentes que prometieron iban a "refundar el Estado" ni los gobiernos que estuvieron al frente de ellos impulsaron cambios de fondo en la estructura estatal. La burocracia militar no fue tocada ni sus jerarquías trastocadas; su cultura vertical no sufrió el menor menoscabo, de modo que las "revoluciones" se frenaron en la puerta de los cuarteles y las jefaturas policiales. Lo mismo puede decirse de la burocracia civil, más allá de algunos cambios cosméticos (como colocarle el nombre "plurinacional" a las viejas instituciones heredadas de la colonia o crear nuevas reparticiones dentro de la misma lógica estatista) todo quedó en su lugar, aunque en despachos ministeriales y parlamentos aparecieron ponchos y polleras y se pronunciaron lenguas originarias.

El concepto de "socialismo del siglo XXI" fue tan vaciado y viciado como el de "revolución". Las confusiones fueron múltiples, entre ellas la disolución de las diferencias entre poder y gobierno, completamente desdibujadas por discursos pomposos pero cortos de contenido. La definición de socialismo en la Ley de Comunas de la República Bolivariana de Venezuela muestra esas limitaciones cuando en su artículo 4 vincula la nueva sociedad con la economía y no con el tipo de poder en que se sustenta:

> Socialismo: modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales (AVN, 2010: 10).

Debe recordarse que en la teoría crítica no existe un tal "modo de producción socialista", ya que por socialismo se entiende el periodo

de transición entre capitalismo y comunismo, en el cual los trabajadores están en el poder y luchan contra su enemigo de clase. En la definición citada, no aparece el concepto de lucha o conflicto como eje en torno al que se organiza el poder popular. Algo similar sucede con las "comunas", organismos locales que sustentan el poder popular pero que en realidad no tienen poder, pues no cuentan con un aparato de coerción capaz de hacer realidad las decisiones que toman. El poder popular no se funda en la "propiedad social" ni en la "participación protagónica", no se basa en una economía aunque debe tener una base económica; el poder nace del fusil, del pueblo reunido y armado. Sin embargo, todas las instancias del "poder popular" venezolano están sometidas a la Constitución, al poder público y a las leyes existentes como surge nítidamente de la Ley de Comunas, donde las formas de autogobierno funcionan "en el marco del Estado democrático", según el artículo 1 (*ibid.:* 3). No es, por lo tanto, un contrapoder, sino un engranaje más de los poderes existentes.

Un análisis de la Ley de Comunas permite ubicarla en el marco de los procesos de descentralización propuestos por el Banco Mundial en la década de 1990, pero en absoluto como un contrapoder o un nuevo tipo de Estado. El artículo 6 detalla los propósitos de las comunas, que consisten en "la planificación del desarrollo social y económico, la formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos" (*ibid.*: 12). Lo que indica claramente que son dependientes de las instancias centrales que les transfieren esas competencias.

Pueden participar, como señala el artículo 7, en "la formulación, ejecución y control de la gestión pública", o sea, funcionan como organismos dependientes pero realizando control y ejecutando a escala local lo que se decide en otros ámbitos, o sea en el Estado/gobierno. Por definición, un poder autónomo no tiene límites, se autolimita cuando lo cree conveniente. En el caso venezolano, a diferencia de los sóviets en Rusia, las comunas han sido creaciones desde arriba, lo que significa que están sometidas a ese arriba que las creó.

Más transparente es la propuesta del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Éste entiende que en Bolivia se atraviesa una "transición estatal" desde que el MAS ocupa el gobierno. Analiza el Estado con base en tres ejes: como correlación política de fuerzas sociales, como materialidad institucional e idea colectiva "que garantiza el consentimiento moral entre gobernantes y gobernados" (García Linera, 2014: 82). Este político, que se reivindica como marxista, considera que la coerción está en el mismo nivel que la legitimidad del Estado como institución, por lo que cree que es una herramienta neutra que puede utilizarse con diversos objetivos.

Contrariamente a las ideas de Marx, quien propuso la destrucción del aparato estatal, el vicepresidente boliviano afirma que la llegada del MAS al gobierno del Estado por la vía electoral y la derrota de las antiguas clases dominantes producida en las movilizaciones de 2008, "cierran el ciclo de la transición estatal y dan inicio a la construcción del nuevo Estado" (*ibid*.: 88). Reconoce que no hubo el menor cambio al interior de las fuerzas armadas y la policía, que ahora serían fieles al gobierno, y que incluso en la burocracia civil hay cambios parciales, ya que la nueva burocracia estatal es una suerte de síntesis entre los viejos y los nuevos funcionarios. Pero, lo dramático es que considera que la clave de la transición de un Estado a otro tipo de Estado ("refundación" o "descolonización" le llaman) consiste en la llegada de nuevo personal político a los cargos más altos de la administración:

> Hay nuevas clases sociales políticamente visibilizadas a partir de nuevas identidades étnicas-culturales-regionales, en el control de los principales mecanismos de decisión estatal, y hay una sustitución y ampliación de las élites administrativas del Estado. Lo relevante de este proceso de modificación de la composición social del bloque en el poder del Estado y de los niveles superiores de la administración pública, radica en que étnica y clasistamente las distancias sociales con el antiguo bloque de poder estatal son enormes (*ibid*.: 93).

La sustitución del personal político en la alta jerarquía de la burocracia civil es suficiente para asegurar que Bolivia se encuentra ante un nuevo sistema político. También hubo cambios en el papel económico del Estado, cuyo peso se duplicó ya en 2009, alcanzando

31% del PIB. Estamos entonces ante un nuevo grupo de personas al frente del Estado, que controlan ahora parcelas importantes y decisivas de la economía ("el Estado es hoy el principal empresario colectivo", asegura García). Afirmar que esos altos cargos están procesando la transición hacia un nuevo Estado, sin tomar en cuenta que muy probablemente sean los núcleos de una nueva clase en el poder (o una nueva burocracia), es tirar por la borda toda la experiencia histórica de las revoluciones del siglo XX; pero, además, es poner sus conocimientos y capacidades al servicio de ese proceso de gestación de una nueva élite desde el seno del poder estatal.

Lejos del relato simplista y autojustificativo, la realidad indica que el gobierno del MAS (núcleo del bloque en el poder) pretende monopolizar las decisiones políticas, mientras desplaza y anula a los movimientos, grupos y personas que se le oponen, sobre todo si pertenecen al campo popular. Fue durante el largo proceso de debates de la Asamblea Constituyente cuando el gobierno del MAS —actuando como mediador entre la oligarquía y el Pacto de Unidad en el que se agrupaban los movimientos que lo habían ungido al poder— consiguió cerrar el ciclo de luchas abierto en 2000 con la Guerra del Agua. En ese proceso, el gobierno de Evo recuperó el papel central del Estado, actuando como mediador entre los dos bandos enfrentados, y produciendo "una síntesis social totalmente estadocéntrica y que, a su vez, implicaría la profundización de una estrategia política de desarticulación y neutralización del movimiento indígena originario campesino" (Salazar, 2015: 206).

A partir de la aprobación de una Constitución restringida, de acuerdo a lo que eran las aspiraciones iniciales de los movimientos, se reconstruye la centralidad del poder estatal en contra de las organizaciones indígenas, campesinas y populares. El gobierno, según el dirigente de la Coordinadora del Agua Óscar Olivera, expropió la fuerza y la voz de los movimientos, y "ahora habla a nombre de nosotros, dice: 'somos el gobierno de ustedes por lo tanto no tienen por qué hablar, porque estamos hablando a nombre de ustedes'" (*ibid.*: 223-224).

De ese modo, el MAS-gobierno-Estado consolida un proyecto que, según el politólogo Luis Tapia, combina un núcleo capitalista, con el que establece una sólida alianza, con el monopolio

gubernamental de la vida política. Se trata de "un proyecto de reconstitución del Estado-nación en Bolivia, que está reacoplando las estructuras de poder y dominación patrimonialistas con una nueva dirigencia de origen popular, que a su vez está organizando un régimen de tiranía política sobre el mismo pueblo del cual ha salido" (Tapia, 2011: 125).

El problema que tiene el MAS para estabilizar su proyecto, no muy diferente al de los demás procesos de la región, es que la sociedad y la izquierda son plurales, diversas; y esa diversidad es estructural, no ideológica sino anclada en el carácter de las relaciones sociales. Esa característica de la sociedad boliviana, que podemos denominar como pluralidad/diversidad/heterogeneidad radicales, ha creado enormes dificultades a las élites que no han podido gobernar por consenso, sino imponiendo una dominación que ya dura más de cinco siglos. Pero esta diversidad radical es, también, lo que ha hecho posible las resistencias y las revoluciones/levantamientos de los indígenas y los sectores populares andinos. Por lo tanto, en lugar de una "sociedad" tenemos, como señala Aníbal Quijano, un campo complejo de relaciones sociales heterogéneas, no orgánico ni sistémico, cuyos vínculos son discontinuos, inconsistentes y conflictivos (Quijano, 2000).

Ese conjunto o totalidad, en el que las partes tienen autonomía relativa, juega en un doble sentido: dificulta la opresión pero a la vez traba los intentos de producir cambios, como si se tratara de una totalidad orgánica que funciona como una máquina homogénea. Los intentos del MAS de modernizar Bolivia sólo podrían ser exitosos en un largo proceso de debates democráticos entre todos los pueblos indígenas, entre todos los sectores económicos y sociales que conforman el ancho y abigarrado abajo, pero están destinados al fracaso si se pretenden imponer violentando tiempos y espacios en la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.

Por eso Tapia sostiene que el MAS se ha convertido en "una fuerza contrainsurgente", porque está reduciendo, cerrando y reprimiendo la política autónoma y el pluralismo existentes en las organizaciones. "El núcleo central del MAS es el monopolio de la vida política", algo que considera insensato "en un territorio como el boliviano, caracterizado precisamente por la capacidad de generación de democracia

directa desde varios núcleos" (Tapia, 2011: 115). El empeño en controlar la vida colectiva desde arriba lo ha convertido en un partido de Estado dedicado a la vigilancia de aquellas organizaciones que mantienen su autonomía, a través del amedrentamiento y la judicialización de los dirigentes críticos.

La conclusión es que "el MAS opera como una fuerza desorganizadora del pueblo, como un modo de organizar un monopolio" (*ibid*.: 118). Es el precio que paga una fuerza política estatista para imponer un proyecto de desarrollo/modernización basado en el extractivismo que, para hacerlo, necesita eliminar la democracia y la pluralidad a través de la cooptación, la represión o la concentración de poder, y en los hechos en la combinación de todos esos mecanismos. Para el MAS es imposible construir hegemonía desde el Estado. Para hacerlo, según Tapia, debería ser una fuerza capaz de articular y potenciar "aquello que están desplegando sujetos y bloques ya en desarrollo", pero lo que hace es lo contrario, "está jalando hacia abajo y hacia atrás, es decir está reduciendo el horizonte histórico, político y cultural" (*ibid*.: 132). Porque el horizonte popular-comunitario en Bolivia ha ido más allá del Estado, poniendo en cuestión la obediencia entre gobernantes y gobernados (Gutiérrez, 2008).

En todo caso, Bolivia (y en menor medida Ecuador) nos ponen ante un dilema mayor, que el pensamiento crítico está lejos de haber comenzado a indagar. Es el tema de Silvia Rivera Cusicanqui, cuando nos dice que la nación es una camisa de fuerza que "bloquea la emergencia liberadora, el cambio, el pachakuti, esto es, la revuelta profunda" (Rivera, 2006: 98). En este texto, la socióloga boliviana coloca al Estado-nación como límite del pensamiento y las prácticas emancipatorias, pues considera que violenta los tejidos sociales básicos de los mundos indios y que desde esas estructuras no puede hacerse algo diferente.

En eso consistió la estabilización progresista: en el reposicionamiento del Estado y el cierre de los ciclos de lucha. Si algo así sucedió en Bolivia, donde el ciclo de luchas fue tan lejos, cuestionando y desbordando los marcos estatales, puede imaginarse que en el resto de la región —donde los ciclos de protesta no llegaron siquiera a poner en cuestión las formas institucionales ancestrales de dominación—, la recomposición estatista fue más rápida y tuvo menores problemas, salvo quizás en el caso de Ecuador.

Entre mayo y junio de 1990 se produjo el primer levantamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Sus demandas, 16 puntos, recogían la defensa y la reivindicación de sus derechos, territorios, la justicia y la libertad. El alzamiento tomó desprevenido al gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja, y significó el inicio de la crisis que sufrió el proyecto neoliberal ecuatoriano.

El "levantamiento del Inti Raymi" consolidó al movimiento indígena como un sujeto social protagónico en las luchas sociales de Ecuador durante el periodo 1990 a 2005, pasando de la resistencia popular al cogobierno durante una breve etapa con Lucio Gutiérrez. Convertido el movimiento político Pachakutik en la principal fuerza de oposición al ajuste estructural, su participación en la gestión gubernamental —lo que inicialmente se consideró un triunfo— generaría una crisis interna de la cual el movimiento indígena en su conjunto aún no se ha recuperado. Ello hace que el escenario político cambie y tomen fuerza las demandas ciudadanas en torno a las cuales se aglutinan las clases y capas medias urbanas. Ello propicia la "revuelta de los forajidos" y la caída del gobierno gutierrista en abril de 2005.

Es desde ese preámbulo que se hace factible la construcción, apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, de un fenómeno político nuevo pero electoralmente eficaz: Rafael Correa y Alianza PAÍS. No hubo grandes debates programáticos ni trayectorias de lucha conjunta que generasen espacios de confianza mutua entre quienes apostaron inicialmente por el proyecto. Había tan sólo un nombre, Rafael Correa, un académico carente de compromiso militante anterior que, tras cuatro meses como titular de la cartera de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, había dejado su cargo, generando gran simpatía social y demostrado carisma.

El objetivo de su gobierno, aunque inicialmente confuso, fue rápidamente evidente: sacar al país del ostracismo a través de un profundo proceso de modernización que implicaba también pasar página al deslegitimado periodo neoliberal. Modernización de la economía mediante la intervención del Estado y modernización del Estado mediante la recuperación de la institucionalidad pública y la relegitimación del sistema de representación política. En pocas palabras: el retorno del Estado y su institucionalidad.

Correa demostró lo que significa el retorno del Estado, pero no de cualquier Estado, sino de un Estado fuerte en un país pequeño. Para construir esa realidad no requirió el impulso popular ni la complicidad de organizaciones sociales fuertes. Demostró que las concesiones pueden ser escasas y no afectar aspectos estructurales del sistema, y enseñó cómo hacerlo renovando cargos de gestión institucional con una nueva generación tecnocrática en gran parte formada en el exterior, mostrando que para ello no es necesario cortar los hilos fundamentales que vinculan al poder político con el poder económico. Quizá fue Rafael Correa quien mejor demostró que los ajustes técnicos al modelo de gestión no tienen que implicar reformas sociales y mucho menos transformaciones. El presidente Correa lo dijo con sus propias palabras: "Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa".[4]

## Nuevos tiempos: giro a la derecha

Cuando los grandes procesos históricos llegan a su fin y sobrevienen, con ellos, derrotas políticas de envergadura, se instalan la confusión y el desánimo, se mezcla la realidad con los deseos y se difuminan los marcos analíticos más consistentes, dando paso a interpretaciones a menudo caprichosas y unilaterales. Algo de lo anterior está sucediendo en Sudamérica luego de una larga década, en la que confluyeron movimientos sociales transformadores con gobiernos que pretendieron superar la histórica dependencia a través de una integración regional novedosa, anclada en una autonomía que superaría el estatus de "patio trasero" al que fue condenada en virtud de la división internacional del trabajo.

Con el advenimiento de la crisis económica acelerada por la abrupta caída de los precios de los *commodities* —cuyos altos precios crearon la ilusión de que podía mejorarse la situación de los pobres sin tocar los privilegios—, quedó en evidencia que lo construido a lo largo de una década resultó demasiado frágil.

4 Entrevista en el diario *El Telégrafo*, 15 de enero de 2012.

Las economías latinoamericanas cerraron 2015 con un retroceso importante y se prevé que para 2016 el crecimiento sea insignificante. El segundo elemento decisivo que configura la nueva coyuntura consiste en la recomposición de los movimientos sociales, como síntoma de las grietas que se abrieron entre gobiernos y sociedades.

El aumento especulativo de los precios internacionales de los c*ommodities* desde 2003, fue enormemente perjudicial para el continente, aunque ni sus líderes ni la población lo consideraron de esa manera durante el ciclo alcista. Los enormes superávits comerciales obtenidos por todos los países de la región legitimaron a los gobiernos, pero sus políticas no fueron suficientes para modificar la estructura productiva, única forma de sostener el crecimiento en el largo plazo.

Por el contrario, al final del ciclo chavista en Venezuela, la dependencia de las exportaciones de petróleo se ha profundizado, alcanzando 95% de las exportaciones totales. En Brasil, que era el país más industrializado de la región, la masiva exportación de soja y mineral de hierro a China provocó un retroceso de las exportaciones manufacturadas —que arrastró hacia abajo la producción industrial—, que fueron sustituidas en parte por importaciones de bienes de consumo desde Asia.

El único caso relativamente exitoso de aumento del producto industrial fue el de Argentina, gracias a acuerdos comerciales con Brasil para la exportación de autopartes y la importación de electrodomésticos. Se trató de acuerdos políticos para impulsar cierta complementación productiva, pero no fueron lo suficientemente intensivos como para producir un cambio en la matriz productiva.

Aunque China se convirtió en el primer socio comercial de varios países de la región, el recambio de la potencia hegemónica no está afectando las relaciones de intercambio establecidas desde la colonia. Según la CEPAL, en 2013 los productos primarios representaron 73% de las exportaciones de la región hacia China. Por el contrario, las manufacturas representaron apenas 6% de las ventas a China frente a 42% del total mundial. Todos los países de la región exportan menos variedad de productos a China que hacia los demás destinos (CEPAL, 2015).

Las consecuencias de este modelo son tremendas para las poblaciones locales. En Perú, casi la mitad de la superficie de varias provincias andinas ha sido concesionada a la minería, incluyendo la mitad de la región hidrográfica del Pacífico, donde vive 65% de la población que cuenta con apenas 1.8% del volumen de agua del país (Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, 2012: 30). Los conflictos mineros también son graves y no tienden a disminuir en Chile, Perú, Argentina y Colombia.

En Argentina, los 28 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón) son regados cada año con 300 millones de litros de glifosato, con consecuencias nefastas para la salud de los pobladores, ya que en los pueblos fumigados las tasas de cáncer y de abortos espontáneos son entre cinco y siete veces mayores que el promedio nacional, según los estudios divulgados por varias universidades (Lavaca, 2015).

Incluso en los países en que se propuso cambiar la matriz productiva no se consiguió avanzar en esa senda. Los economistas Carlos Arze y Javier Gómez, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, concluyen que "los datos relativos al uso del excedente muestran que se priorizó el gasto en detrimento del uso productivo o la acumulación del capital productivo en forma de inversión" y concluyen que "la incorporación de la noción del Vivir Bien en el discurso gubernamental tiene únicamente un propósito político electoral" (Arze y Gómez, 2013: 127).

En el caso del Ecuador, el sociólogo Pablo Ospina destaca que el gobierno de Rafael Correa "se ha planteado como propósito el cambio del modelo de acumulación pero no ha avanzado en esa dirección", mientras la necesidad de fondos inmediatos para financiar políticas sociales "lo arroja en manos de la minería en gran escala con lo que arriesga reforzar aquello que se propone superar". Sostiene que se trata de un gobierno cuya prioridad "es el reforzamiento del Estado y no su democratización", considerando que la revolución ciudadana se reduce a un "régimen disciplinario" que está construyendo una suerte de "capitalismo paternal" (Ospina, 2013: 209).

Lo cierto es que ninguno de los procesos ha dado pasos sólidos para salir del modelo extractivo, profundizando por el contrario

la dependencia de las exportaciones de bienes primarios. Con los años ha quedado claro que este modelo presenta graves problemas ambientales y serias consecuencias sobre la salud, que han sido oportunamente denunciados por ONG y movimientos sociales. Sin embargo, las consecuencias sociales han sido poco consideradas. El extractivismo genera fuerte polarización social, concentra renta y excluye a una parte de la población, por lo que las políticas sociales se han hecho imprescindibles para sostenerlo, cuando se pensaba que eran apenas un paso para superar la pobreza, ya que un modelo productivo integrador y relativamente igualador podría sustituirlo.

En el terreno de los movimientos y las organizaciones sociales se registra una profunda inflexión de la porción de las sociedades que, con el despliegue de su activismo, hicieron posibles los gobiernos progresistas. Aún es demasiado pronto para marcar un punto de inflexión, pero probablemente podamos situarlo entre diciembre de 2010 (conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en Buenos Aires por miles de familias sin techo) y junio de 2013 (masivas manifestaciones en Brasil). En Ecuador, la grieta creció exponencialmente en 2015 con el levantamiento indígena y popular de agosto, y la dura represión sobre los movimientos. En Uruguay, docentes y estudiantes protagonizaron las mayores manifestaciones y huelgas en más de una década. En Bolivia, la población rechazó la propuesta oficialista sobre las autonomías y, en Venezuela, dos millones de personas dieron la espalda al gobierno de Nicolás Maduro el 6 de diciembre de 2015.

Luego de un periodo de debilitamiento de los movimientos —en gran medida por la integración de dirigentes y cuadros en el aparato estatal y, en otra buena medida, por el apaciguamiento provocado por las políticas sociales— el conflicto social reaparece, re-articulándose bajo nuevas formas y formatos. En casi todos los países surgieron nuevos movimientos cuya existencia no estaba en el libreto progresista, pero también hubo una notable resistencia a la cooptación por parte de viejos movimientos, como la Conaie en Ecuador y, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas (CIDOB) en Bolivia.

Lo sucedido en Bolivia debe ser fuente de reflexiones profundas. Los golpes de(l) Estado contra dos organizaciones históricas

como Conamaq y CIDOB, marcan los límites del progresismo y representan un dato duro —mucho más importante que los económicos— sobre la incapacidad del MAS de orientar democráticamente el mundo popular boliviano.

En cuanto a los nuevos movimientos, los primeros pasos sucedieron en los márgenes. La Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina reúne a más de cien colectivos locales contra el extractivismo sojero y minero, habiendo conseguido frenar el proyecto de Monsanto de instalar una "fábrica" de semillas en Malvinas Argentinas, cerca de Córdoba, y varios proyectos mineros en los Andes. La resistencia a la soja ha conseguido anudar la militancia universitaria y urbana con pequeños grupos de los pueblos más afectados por las fumigaciones, que son la cara más agresiva del modelo sojero.

Entre los nuevos movimientos, el caso más notable es el del Movimento Passe Livre (MPL) de Brasil, que protagonizó las Jornadas de Junio de 2013 (Maricato, 2013). Tres consideraciones al respecto: a) el movimiento que llevó a millones de personas a las calles en 353 ciudades representaba las demandas incumplidas de los gobiernos del PT, en particular aquellas vinculadas a los servicios de transporte, educación, salud y vivienda, o sea la calidad de vida estrechamente ligada a la desigualdad; b) fue un parteaguas que destrozó el llamado "consenso lulista",[5] que durante una década hizo creer que era posible combatir la pobreza sin tocar los privilegios y sin movilizar a la población; y, c) el movimiento no se agotó en junio de aquel año, sino que mostró el nacimiento de cientos de pequeños colectivos que trabajan con base en autonomía, horizontalidad, consenso para la toma de decisiones, rechazando la creación de grandes estructuras burocráticas. Estas nuevas formas de organización y protesta se reprodujeron dos años más tarde en la ocupación de casi 200 colegios secundarios en São Paulo, en rechazo a la reestructura del sistema educativo impulsada por el gobierno del estado, pero también en el nacimiento de decenas de grupos en las favelas, donde vive la población negra, pobre y joven de Brasil.

5 Concepto acuñado por el sociólogo André Singer para describir los gobiernos de Lula, que produjeron cambios dentro del orden y que refuerzan el orden, donde no hay movilizaciones y por lo tanto el conflicto deja de tener expresión en la política partidaria e institucional.

Por debajo de los nuevos movimientos está naciendo una nueva cultura política —que además se define como apartidista pero no antipartidista, que decide por consenso y no funciona con base en la representación—, que existe en todo el continente con diferentes grados de desarrollo, y jugará un papel decisivo en el futuro de los procesos de cambio. Estos nuevos movimientos ya están jugando un papel en la deslegitimación del modelo extractivo, como lo muestra la pertinaz resistencia comunitaria a la megaminería en Perú, Chile, Ecuador y Argentina. En paralelo, los nuevos movimientos pueden abrir espacios para formas de acción colectivas menos dependientes de los tiempos electorales, los partidos y los caudillos, como viene sucediendo en Brasil y México.

Estamos atravesando un cambio de época mucho más profundo del que insinuaron los gobiernos progresistas que, en el fondo, apenas intentaron conducir la notable energía popular hacia las aguas estancas de la representación, o sea, de la política estatal. Los momentos álgidos de las luchas sociales (los parlamentos indígenas-populares de 2000 en Ecuador, los cuarteles aymaras en el altiplano boliviano en 2000 y 2001, las asambleas populares en Argentina en 2001 y 2002) fueron momentos antiestatales pero también antipartidos, dos modos organizativos que responden a la misma lógica.[6]

Respecto a esos momentos, la recomposición estatista progresista fue un paso atrás. Un retroceso. Para quienes apostamos a la emancipación colectiva, el punto de referencia debe ser siempre el grado más alto alcanzado por la lucha social y nunca aquello que es posible conseguir. Lo posible es siempre el Estado, el partido, las instituciones existentes. Pero la emancipación no puede detenerse allí.

El análisis del sociólogo brasileño Francisco de Oliveira apunta en esa dirección. Luego de considerar el mandato "intensamente reformista" que recibió el ex presidente Lula, y ante gestiones que hicieron justo lo opuesto de aquel mandato anclado en un crudo pragmatismo, concluye que "el lulismo es una regresión política, la vanguardia del atraso y el atraso de la vanguardia" (De Oliveira,

6 Sobre estas formas no estatales de poder véase Pablo Mamani, *Whipalas y fusiles. Poder comunal y el levantamiento aymara de Achakahi-Omasuyus (2000-2001)*, La Paz, Sol de Paz Pachakuti, 2012 y Fundación José Peralta, *La rebelión del arco iris*, Tafalla, Txalaparta, 2001.

2009). Seis años después, en plena bancarrota moral del lulismo y el conjunto del progresismo, debemos contemplarla como una de las más brillantes anticipaciones políticas sobre el progresismo sudamericano.

Finalmente, queda por responder por qué las potentes luchas sociales de nuestro continente se canalizaron hacia la política electoral e institucional, confiando en que la conquista del Estado es la llave maestra para abrir las puertas del paraíso. No hay una respuesta unívoca ni sencilla a este problema. Lo que parece evidente es que la cultura política o, quizá mejor, el sentido común en las izquierdas y los movimientos, no puede pensar en un nuevo mundo que no se referencie en el Estado, el gobierno y los partidos políticos. Esta cultura no parece haber sido erosionada por una década de levantamientos populares e indígenas, ni por el sonoro fracaso de otra década de gestiones estatales que poco han cambiado. Lo que pervive es una creencia que no puede mirar la historia de frente y sacar consecuencias.

Confiamos en que las generaciones más jóvenes y sobre todo las mujeres y los indígenas, puedan repensar esta historia con menos prejuicios y sin la carga de los varones adultos. Ellas han cambiado su lugar en el mundo desde la cotidianeidad, interpelando a las instituciones pero no dependiendo de ellas ni esperando que sean las encargadas de procesar esos cambios. Cada vez más los pueblos originarios y los jóvenes tienden a tomar su vida en sus manos sin importarles quiénes están en el gobierno, ni dejándose marear por discursos que hablan de revolución e imponen lo contrario de lo que proclaman.

Son las grietas que ha sido posible infligir a esa cultura política estadocéntrica. Tal vez deberíamos alegrarnos de que haya miles de mujeres y jóvenes que han sido capaces de poner en pie movimientos como Yasunidos, la defensa del TIPNIS, las luchas estudiantiles por otra educación, las marchas del "Ni una menos", y así en todos y cada uno de los países latinoamericanos. Tal vez deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos a potenciar esa cultura naciente y dejar de atender los esperpentos de la vieja y decadente clase política travestida en progresismo.

* * *

Éste es un libro urgente que pretende intervenir, desde el análisis crítico, en una de las coyunturas más complejas y trascendentes que vive nuestra región. Quiere ser una herramienta de comprensión y análisis para aquellos y aquellas que están involucrados en las luchas sociales. Quiere ser, a la vez, un homenaje a quienes resistieron estos años de aislamiento y represión sin doblegarse a las mieles del poder, sin plegarse a las derechas ni a los progresismos y que, por lo tanto, desafiaron la soledad y en no pocas ocasiones la estrechez material, para mantener en alto sus principios.

Un trabajo a cuatro manos siempre es un desafío mayor. Supone dejar de lado algunas ideas para permitir que otras se desplieguen, en un ejercicio de confianza mutua y en un esfuerzo por aliviar los egos de cada quien para fecundar la tarea colectiva. Ha sido estimulante hacer un libro entre dos personas que pertenecemos a generaciones diferentes, con trayectorias militantes distintas aunque ambas dentro del campo revolucionario, con ocupaciones e intereses parcialmente diferentes, aunque siempre críticos con la realidad que nos rodea.

El trabajo contiene cuatro capítulos. El primero y el segundo intentan actualizar temas que nos desvelan, como el carácter de los administradores del aparato estatal en las revoluciones del siglo XX, sean burocracias estatales o posibles nuevas burguesías.

El tercero aborda la emergencia de nuevas élites bajo los gobiernos progresistas y el cuarto ingresa de lleno en la decadencia del periodo progresista, que algunos han dado en llamar "fin de ciclo", haciendo hincapié en el mantenimiento de las desigualdades, el aumento de la represión y el fortalecimiento del capital financiero.

Somos conscientes de que algunos de los temas que traemos al debate ha sido dejados de lado por la mayor parte del movimiento revolucionario del mundo, quizá por el crudo pragmatismo que impera en las izquierdas institucionales. Sin embargo, nos pareció necesario replantearnos el carácter de los gobernantes y las nuevas élites que se proclaman progresistas y hasta "revolucionarias".

# CAPÍTULO I

## Los gestores/administradores. ¿Una nueva burguesía?

"El motor de este proceso son los trabajos colectivos", explica un militante zapatista a las dos docenas de alumnos formados en la cancha de basquetbol de la comunidad 8 de Marzo, municipio 23 de noviembre, perteneciente a la región del caracol Morelia. Las bases de apoyo que conforman la comunidad participan en los trabajos colectivos, que son el núcleo de la organización comunitaria y el proceso zapatista de construcción de nuevas relaciones sociales.

Las mujeres tienen sus propios trabajos colectivos: gallineros, cafetales, producción de dulces, entre otros, con los que juntan fondos para sus actividades de modo de no depender de los varones. Gracias a los trabajos colectivos las comunidades pueden sostener la educación y la salud, y de ellos salen todos los recursos para la vida colectiva, desde los filtros para el agua hasta el transporte para llevar los productos a los mercados y trasladar a los comuneros a los caracoles, desde las clínicas y hospitales hasta las escuelas primarias y secundarias.

Las tierras de la comunidad, que antes pertenecían a un terrateniente, incluyen terrenos para usos colectivos y de las familias. En las primeras realizan los cultivos comunitarios de café, maíz o frijol, y en ellas mantienen el ganado. En los terrenos familiares, sus integrantes cultivan su milpa para autoconsumo. La tierra no es

propiedad de nadie. Cuando una familia abandona el movimiento, la tierra que usufructuaba retorna a la comunidad. Formalmente no existe propiedad, la tierra es un valor de uso, no se puede vender ni heredar y sólo la asamblea puede decidir qué hacer con ella.

Si hubiera que referirse a la propiedad en sentido estricto, legal, de las tierras de los zapatistas, habría que decir que no tienen titulación, o sea no están registradas como propiedad ante las instituciones del Estado. La tierra no es propiedad, tampoco, de las familias zapatistas ni de las comunidades. La tierra, como las clínicas, las escuelas y los cultivos colectivos, es poseída como bienes colectivos pero no en relación de propiedad. Lo que manda no es la titulación de una propiedad sino su uso. Las cosas son de quien las usa, pero cuando dejan de usarlas, porque ya no pertenecen al movimiento o porque fallecieron o por las razones que sean, la comunidad decide qué uso le van a dar.

En las comunidades zapatistas no existe diferencia entre propietarios y gestores. Las comunidades son las dueñas reales de las tierras, aunque no estén tituladas, es decir: son dueñas en la medida en que las usan para fines comunes o para las familias del movimiento. Lo que sostiene esta "irregularidad", desde el punto de vista administrativo, es la organización de la comunidad para la lucha, que impide a los propietarios legales usarlas para ellos. El día que la organización se debilite o desfallezca, el uso de la tierra se pierde.

El punto central es la disolución real de la diferencia entre propiedad y gestión, porque la comunidad entera es la que posee la tierra como bien común o valor de uso, y es la misma comunidad entera la que gestiona esos bienes de todos y todas. Una de las claves de esa no diferencia son los trabajos colectivos. Veamos cómo sucede.

La comunidad decide en asamblea qué tierras ocuparán las familias, donde cada una tendrá su vivienda y su milpa. Y decide también qué tierras serán para uso colectivo. Aquí aparece una cuestión básica: se decide en asamblea, y esa asamblea, que se reúne con frecuencia, es la que da seguimiento al uso de los bienes comunes por la comunidad.

No hay un equipo que gestione o administre, separado del resto. Es la misma lógica de las Juntas de Buen Gobierno, encargadas

de gestionar toda una región, cuyos integrantes rotan para evitar que se consolide una capa o camada de administradores que con el tiempo se separan del conjunto, especializándose en gobernar a los demás. Los cuatro niveles de la organización zapatista (pueblo o comunidad, región, municipios autónomos y zona) también son cuatro niveles de asambleas, ya que en ellas se decide todo.

La asamblea de la comunidad decide cuántos días se trabaja para la familia y cuántos días se destinan a trabajos colectivos. Esos trabajos colectivos no son sólo en la tierra; pueden ser para la venta de cosechas, el apoyo a la construcción de escuelas, hospitales o panaderías; para apoyar a las familias de los promotores de salud y educación, pues a menudo la asamblea decide que el colectivo les cuidará la milpa porque el hijo o la hija está trabajando para el movimiento. Porque, como dice el subcomandante Moisés, "no dependemos del gobierno", sino que se autogobiernan y eso supone hacerse cargo de la vida en todas sus facetas (Subcomandante Insurgente Moisés, 2015a: 96).

Como cada comunidad, cada municipio y zona, deciden por su cuenta cada tarea, no hay un patrón común a todos los niveles. Hay pueblos donde se dedican cinco días a los trabajos colectivos, en otros diez, y en otros menos. No hay un mando central que dicte órdenes fijas que todos acatan y que, por lo tanto, son iguales para todos. Cada familia es diferente, algunas tienen pocos hijos y otras muchos; diferentes son los cultivos en cada región, y se manejan de manera diferente que el ganado; a fin de juntar fondos para el movimiento, en algunas zonas las bases de apoyo contribuyen con dinero, en otras aportan kilos de maíz o frijol o café, y en otras hacen trabajo colectivo; por eso, dice Moisés, "todas estas cosas nos hizo reflexionar de que entonces es mejor que los pueblos, las regiones, los municipios autónomos y la zona se ponga de acuerdo cómo quieren trabajar" (*ibid.*: 101). Está diciendo que ni el EZLN ni la Junta de Buen Gobierno deciden lo que hace un municipio ni éste decide lo que hace la comunidad. Cada instancia es autónoma para la toma de decisiones.

Del mismo modo, la asamblea de cada lugar decide cuánto se cobra por la atención médica a los que no son zapatistas, a los llamados "partidistas" o "priístas". También hay una vigilancia de las

autoridades, ya sean las Juntas de Buen Gobierno o los municipios, tareas que son rotativas:

> Esos trabajos colectivos que hablamos nos han servido mucho como para entenderlo verdaderamente el vigilar al gobierno, porque son los que administran, el gobierno, la Junta de Buen Gobierno, o los MAREZ. Y como es trabajo, es sudor del pueblo entonces los compas exigen a sus autoridades que tienen que rendir la cuenta, cuánto en total hubo de ingreso, cuánto en total el gasto, en qué se gasto y cuánto es lo que queda (*ibid*.: 106).

El concepto de trabajo colectivo no se reduce al cultivo de la tierra ni a la economía; implica a toda la dinámica del proceso, incluyendo las asambleas y las tomas de decisiones, las tareas de los formadores y de representación. De ese modo impiden que nazca una burocracia. La gestión o administración es parte de los trabajos colectivos, y quienes administran no sólo rotan cada muy poco tiempo, sino que además son vigilados de cerca por el colectivo.

La diferencia y distancia entre gestión y propiedad es una de las razones que ha posibilitado, en las revoluciones triunfantes, el nacimiento de una nueva burguesía. En los países llamados socialistas, la propiedad de los medios de producción es de todo el pueblo, porque es propiedad del Estado. Pero éste es controlado por un pequeño grupo que, con el tiempo, se convierte en una élite o una nueva burguesía.

Este trabajo está dedicado a comprender un proceso poco visible, al que en el marxismo, concentrado más en el crecimiento de las fuerzas productivas que en el nacimiento de nuevas relaciones sociales, se le ha dado escasa atención.

En 1919, Lenin se mostraba eufórico ante el hecho de que grupos de obreros del ferrocarril de Moscú hubieran establecido los "sábados comunistas", trabajo voluntario organizado por iniciativa propia destinado a realizar las tareas productivas necesarias para sostener el poder soviético en plena guerra civil. En opinión del dirigente bolchevique, esos trabajos eran trascendentales, ya que "es el comienzo de una revolución más difícil, más tangible, más radical y más decisiva que el derrocamiento de la burguesía, pues es una victoria sobre nuestro propio espíritu conservador, sobre la

indisciplina, sobre el egoísmo pequeñoburgués". Cuando esa cultura se consolide, decía en este texto denominado *Una gran iniciativa*, "entonces y sólo entonces será imposible retroceder hacia el capitalismo" (Lenin, 1978: 279).

Véase que para Lenin la clave del socialismo no tiene relación con la propiedad sino con las relaciones sociales. El entusiasmo de Lenin con los "sábados comunistas" estaba plenamente justificado, en tanto eran "un germen de la nueva sociedad". Aunque nunca abandonó la concepción tradicional marxista de que el crecimiento de la economía y la superación del trabajo y la producción en pequeña escala eran rémoras a dejar atrás, fue también capaz de destacar la importancia del trabajo voluntario, al que concedió la mayor importancia, posiblemente porque había nacido entre los obreros comunes no calificados. Poco después, ya en 1921, y tras finalizar la guerra civil, los "sábados comunistas", que habían nacido de modo espontáneo, se convirtieron en política de partido y de Estado. Según el economista marxista francés Charles Bettelheim, las nuevas relaciones sociales naufragaron con "el desarrollo del centralismo administrativo, la multiplicación de las reglamentaciones y de las coerciones estatales (poco propicias a las iniciativas de base), así como [por] la penetración de 'especialistas burgueses' en el aparato de Estado y la burocratización que de ello resulta" (Bettelheim, 1976: 184).

Incluso en vida de Lenin, los "sábados comunistas" se volvieron obligatorios, convirtiéndose en una disciplina impuesta por un aparato centralizado que practicaba la coerción sobre los trabajadores. Por el contrario, se reforzó la división capitalista del trabajo (taylorismo y fordismo) y se practicaron nuevas formas de explotación como el estajanovismo. Aunque los "sábados comunistas" perduraron muchos años, se trataba de "un rito impuesto que permite arrancar trabajo suplementario a los trabajadores" (*ibid.*: 185).

Lo importante en este punto es constatar cómo una misma práctica, que en un principio encarnaba nuevas relaciones sociales, puede invertirse y servir a la acumulación de un pequeño grupo que controla el aparato estatal. De ahí que sea necesario adentrarse en la comprensión de los hechos reales y no dejarse engañar por discursos emitidos a menudo por la burocracia/burguesía que los utiliza para legitimarse.

Estos debates son importantes, pues a casi cien años del triunfo de la primera revolución socialista, no podemos hacernos los distraídos y creer que el fracaso de la experiencia soviética y la República Popular China —fracaso que debe sintetizarse en la opción por el camino capitalista a partir de la reconstrucción de una nueva clase dominante, una clase de Estado—, no supone un legado con el que debamos lidiar. El fracaso del socialismo, incluso en Cuba, es algo que requiere de un serio análisis, porque en la lucha por una nueva sociedad han dado su vida millones de personas. Es por ello que no parece aceptable que vuelva a hablarse de socialismo —ahora del siglo XXI— sin haber hecho balance y autocrítica de lo hecho durante un largo y tremendo siglo.

* * *

Según el marxista heterodoxo portugués João Bernardo hay dos marxismos: el de las fuerzas productivas y el de las relaciones sociales de producción. Ambos modos de ver el mundo atraviesan la obra de Marx, así como la de otros revolucionarios. Con el tiempo, el marxismo fue popularizado como una ideología y una práctica política evolucionista y defensora del progreso, centrada en la economía, que defiende el crecimiento económico ilimitado. Los marxistas adoptaron la perspectiva de construir el "socialismo a través del Estado" (Del Río, 1993: 339) y pasaron de colocar la lucha de clases como motor de la historia a apostar por el desarrollo técnico como clave del progreso hacia un mundo mejor, alentando el conformismo por creer que la clase obrera navegaba a favor de la corriente, como sostuvo Walter Benjamin en sus *Tesis sobre la historia*.

Este marxismo centrado en el desarrollo de las fuerzas productivas conecta con el capitalismo, en tanto considera que las potencias económicas heredadas del mismo son el fundamento y la base de la nueva sociedad socialista y el nuevo modo de producción. No cuestiona la organización del trabajo capitalista ni su disciplina ni el tipo de maquinaria que utiliza, pues las considera neutras. Por lo tanto, este marxismo es "ajeno a la cuestión de la plusvalía" (Bernardo, 2009: 409). Olvida que las fuerzas productivas creadas por la

sociedad capitalista han sido modeladas para y por la explotación y que, por ende, no pueden ser el fundamento de una sociedad en la que desaparezca la explotación.

El economismo es una de las principales derivaciones de la centralidad atribuida a las fuerzas productivas, ya que hace aparecer la lucha de las clases sociales como producto de los vaivenes de la economía y, en segundo lugar, identifica las fuerzas productivas con los medios materiales de producción. De esta manera pierde de vista que "la principal fuerza productiva está constituida por los propios productores" (Bettelheim, 1976: 27). Tal es así, que en la Unión Soviética se consideraba que el éxito del socialismo consistía en superar los niveles de producción de Estados Unidos. Incluso marxistas críticos con el régimen soviético, como George Novack, cuestionarían el hecho de que los Estados "poscapitalistas" no hubieran desarrollado su economía hasta tales niveles de productividad, demandando a la "casta burocrática" por ser la que "deciden quiénes serán los beneficiados en la distribución y en qué cantidad" (Novack, 1979: 58), sin olvidarse nunca de situarse en la cabecera de la mesa.

Ese marxismo ortodoxo coloca en lugar destacado la propiedad de los medios de producción. Se trata de desarrollar las fuerzas productivas, liberadas de la prisión de la propiedad privada, para construir primero las bases materiales de la nueva sociedad y, más tarde, sobre esa expansión de la producción —empujada por el desarrollo técnico— transformar las relaciones sociales. La producción en gran escala, en grandes fábricas, con la tecnología más avanzada, es la clave de bóveda de la emancipación: de los campesinos que deben desaparecer para dar lugar a la agricultura extensiva e intensiva; de las mujeres, atadas al trabajo doméstico; de artesanos y pequeños productores, sin acceso a las tecnologías de punta; todas las opresiones serían barridas con el desarrollo de la gran producción fabril. Una larga cita de Lenin sobre la emancipación de la mujer ilustra este reduccionismo:

> A pesar de todas las leyes de emancipación femenina, la mujer sigue siendo una esclava doméstica, porque las pequeñas tareas domésticas la agobian, la asfixian, la embrutecen y la rebajan, la atan a la cocina y a

> los hijos, y malgasta sus esfuerzos en tareas terriblemente improductivas, mezquinas, que desgastan los nervios, embrutecedoras y agotadoras. La verdadera emancipación de la mujer, el verdadero comunismo, sólo comenzarán donde y cuando comience una lucha total contra esa pequeña economía doméstica o, más exactamente, cuando comience su transformación general en una gran economía socialista.
> [...] Los comedores públicos, las casas cuna, los jardines de infantes; he aquí unos ejemplos de esos brotes, he aquí los medios sencillos, ordinarios, sin pompa, sin elocuencia ni solemnidad, que realmente pueden emancipar a la mujer, disminuir y suprimir su desigualdad respecto al hombre, en lo que se refiere a su papel en la producción y la vida social. Estos medios no son nuevos. Fueron creados (como todas las premisas materiales del socialismo) por el capitalismo (Lenin, 1978: 298).

Esta idea de que el capitalismo, incluyendo los monopolios, deja el camino pavimentado para el socialismo, comenzó a desvanecerse recién en la década de 1960. Es a partir de entonces que fueron evidentes los límites del modelo soviético, a la par de que se vio desacreditado al revelarse los crímenes del periodo de Stalin en el XX Congreso del PCUS (1956). Pero sobre todo al comenzar la revolución cultural en China (1966). Ésta cuestionó el poder adquirido por la burocracia y movilizó ampliamente a trabajadores y campesinos, proponiéndose desarrollar nuevas relaciones sociales.

La confianza en el crecimiento económico, como señala João Bernardo, es en los hechos una apuesta a la hegemonía de los gestores. En efecto, si el modelo de la nueva sociedad es el sistema fabril del capital, es porque asimilan el socialismo al triunfo de los gestores al interior del capitalismo. Es en ese sentido que considera que el marxismo de las fuerzas productivas —al que denomina marxismo ortodoxo— no es capaz de superar el capitalismo, ya que no puede ir más allá de las fuerzas productivas legadas, en particular en cuanto a la organización del trabajo. Lo define como "una ideología del poder o, más exactamente, una de las ideologías de la reorganización y del desarrollo del poder capitalista" (Bernardo, 2009: 413).

En Marx, incluso en el marxismo, además de la corriente ortodoxa hay otra que fija su atención en las relaciones sociales y la explotación, y por lo tanto en el conflicto como clave de interpretación

de la realidad. Si en la otra corriente la clave que explica el tránsito de una sociedad a otra es el desarrollo técnico-científico, en ésta el eje gira en torno al conflicto social, la lucha de clases y la desalienación como agentes de la transformación social.

"Concentrar la atención en las relaciones de producción —destaca João Bernardo— significa averiguar, en cada caso, si existe explotación y las formas que asume. Esta corriente no identifica el socialismo con sistemas de organización y planificación que impidan a los trabajadores controlar los procesos de trabajo" (*ibid.*: 415). Mucho más allá de la propiedad formal de los medios de producción, la disciplina y la organización del proceso de trabajo, y las decisiones sobre el mismo, son los que definen el tipo de régimen existente.

El economista francés Bernard Chavance, especializado en la economía de los países socialistas, traza un perfil del sistema fabril soviético en la segunda parte del siglo xx. Las 50 mil empresas industriales soviéticas "descansan en una fuerte división del trabajo y una estructura jerárquica desprovista de contrapoderes formales para los trabajadores. La separación entre trabajo manual e intelectual, y entre trabajo de dirección y de ejecución, es muy profunda" (Chavance, 1987: 16).

En la cúspide de cada empresa figura un director nombrado por el ministerio del que depende su unidad de producción y sólo es responsable ante la autoridad superior y no ante los trabajadores. Este sistema de dirección única, "despotismo de fábrica" según Chavance, centraliza el poder en manos del director, que siempre pertenece a la nomenclatura, puestos de responsabilidad controlados por el Partido Comunista. Los sindicatos se limitan a promover la productividad y la disciplina. La organización del trabajo tiene "sorprendentes analogías con las formas de organización de la producción que le son familiares al obrero occidental y que han sido teorizadas por Fayol, Taylor o Ford" (*ibid.*: 18).

A la hora de sintetizar los diferentes niveles en la jerarquía del poder fabril, Chavance reflexiona:

> Así como el director es, al mismo tiempo, el empresario, el jefe y, en determinados aspectos, el representante ante el ministerio de los intereses colectivos de la empresa, el ministro es un "super jefe" del sector, la

> autoridad jerárquica a la que están sometidas las empresas, y la cabeza del *lobby* sectorial en la competencia por las asignaturas del Centro y los conflictos con los demás ministerios y organismos del Estado (*ibid.*: 38).

En el terreno teórico, durante el periodo de la Nueva Política Económica (NEP), en su texto *Las tareas inmediatas del poder de los Sóviets* (1918) Lenin había defendido la enseñanza del taylorismo para "aumentar la productividad del trabajo". En este mismo trabajo defendió la sustitución de la dirección colectiva en las fábricas por un director único, porque consideraba que la gran industria, que es "la base del socialismo, exige una unidad de voluntad estricta y absoluta", lo que suponía "la sumisión de la voluntad de millares de personas a la de una sola persona". El líder bolchevique pensaba que "*la sumisión sin reservas* a una voluntad única es absolutamente indispensable para el éxito de un trabajo organizado según el modelo de la gran industria mecánica" (Lenin, 1976: 476, énfasis en el original).

En cambio, durante la revolución cultural china las cosas marcharon —durante un tiempo— por caminos distintos. Bettelheim estuvo por lo menos cuatro veces en China, donde pasó largas temporadas durante las que pudo visitar fábricas de la región de Shanghai y Pekín, comprobando cómo las tareas de planificación y la división del trabajo fabril estaban sufriendo modificaciones por impulso de los trabajadores. En 1971 visitó varias fábricas en las que observó el tipo de planificación que realizaban y los cambios en la división del trabajo.

En ese momento había un combate contra "la dictadura de la gestión central" y se defendía la descentralización de la gestión y la planificación, que impulsaban no sólo las grandes empresas sino también las medianas y pequeñas. Entre ellas, las "fábricas de calle", empresas ancladas en los barrios que contaban con gran participación de mujeres (Bettelheim, 1974: 54-57). Las autoridades locales jugaban un papel destacado en la planificación, se consultaba a las bases que emitían sus opiniones y no sólo a los expertos. Al igual que en la Unión Soviética, las fábricas fueron dirigidas por un director único, pero durante la revolución cultural se crearon "grupos de triple unión" (integrados por obreros, técnicos y cuadros

del partido) que se encargaban de la transformación técnica de las fábricas, de las innovaciones y los reglamentos.

Los ingenieros y los técnicos participaban en el trabajo manual, de modo que su dominación sobre los obreros comenzó a modificarse, mientras se impulsaban cambios en la enseñanza a partir de los cuales se promovía que los ingenieros y técnicos provinieran del proceso productivo (*ibid*.: 95). Tanto para el autor como para la corriente centrada en las relaciones sociales, la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre ciudad y campo, son aspectos centrales de una sociedad dividida en clases, y trabajar por superarlas es síntoma de que los procesos de cambio van por buen camino, más allá de los resultados concretos obtenidos en cada momento.

La otra contradicción trabajada por la revolución cultural es la que opone ciudad y campo. Desde los comienzos de la revolución se fomentó la formación de comunas rurales, y más adelante, de miles de pequeñas y medianas empresas con especialización diversa, desde tejidos y abonos hasta electricidad y acero. La industria dejó de estar centrada en las ciudades; aunque desde el punto de vista de la racionalidad económica la opción parece haber arrojado resultados mediocres, o aun negativos, si se considera el desarrollo de nuevas relaciones sociales la industrialización rural fue exitosa. Cientos de miles de jóvenes urbanos se fueron a vivir al campo al terminar sus estudios secundarios o universitarios, enriqueciéndose con los saberes apropiados por ellos y aportando sus conocimientos a los campesinos.

Tenemos entonces tres aspectos centrales de las relaciones sociales: gestión individual desde arriba o gestión colectiva desde abajo; consolidación o intento de superación de la oposición entre trabajo manual e intelectual; profundización o intento de superación de la oposición entre ciudad y campo. Pero estas relaciones sociales no llegan a modificarse mecánicamente con el "desarrollo de las fuerzas productivas", entendidas como el crecimiento ilimitado de la economía, sino a través del conflicto y la lucha social. Por ese motivo, "aun cuando se haya puesto fin al dominio político de la burguesía, las relaciones capitalistas pueden continuar reproduciéndose, ya que su existencia se inscribe en un proceso de producción que no es transformado inmediatamente" (*ibid*.: 110).

Estas diferentes formas de construcción quedan plasmadas en dos concepciones teóricas diferentes. En la década de 1960, Mao Tse Tung polemiza con dos textos de Stalin: *Problemas económicos del socialismo en la URSS* (1952) y *Manual de economía política* (1954). Las diferencias entre ambos procesos y las teorizaciones de Mao, quien incluso se permite criticar a Lenin, juegan un papel destacado en la polémica ruso-china y en la revolución cultural.

Frente a la hegemonía de la problemática de las fuerzas productivas en el movimiento socialista, en su crítica al libro de Stalin *Problemas económicos del socialismo en la URSS,* Mao enfatiza que el dirigente bolchevique "sólo pone de relieve la tecnología y los cuadros" y que "ignora la política y las masas" (Mao, 1976: 3). Más adelante destaca que en China los cuadros participan en el trabajo manual y los obreros en la gestión de las empresas; que envían a los cuadros del partido al campo y a las fábricas "con el fin de formarlos"; y que es la movilización social la que permite modificar los hábitos y costumbres, la ideología burguesa y el estilo burocrático.

Critica a Stalin porque sólo habla de economía, "ve las cosas pero no al hombre" (*ibid.*: 10). Entiende que atacar las jerarquías es importante, pues considera que reproducen el capitalismo y cree que las comunas son la base de la nueva sociedad. Los soviéticos, dice Mao, sostienen que la técnica y los especialistas lo deciden todo, y confían en los cuadros pero no en las masas. Más aún, según los soviéticos la base de la transformación de la sociedad es la industria pesada, mientras Mao asegura que no es necesario un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas para transformar las relaciones de producción.

El socialismo no puede consistir en desarrollar lo que existe en el capitalismo y no es su prolongación natural. Más crecimiento, más producción con mayor reparto de bienes, no conduce nada más que a la reproducción de la sociedad opresora que conocemos. "La construcción sin destrucción no existe" (*ibid.*: 55). En ese sentido, la guerra, con todo el dolor que comporta, tiene aspectos positivos, señala el dirigente chino. Quiere decir que no se llega a la nueva sociedad produciendo más en una economía centralizada en el Estado sino destruyendo las relaciones de explotación y opresión existentes, algo que sólo puede conseguirse a través de la

movilización social, para modificar las relaciones jerárquicas en la producción, la familia o el conjunto social.

Según esta forma de ver, la propiedad no es el único aspecto a tener en cuenta. En la concepción soviética y el marxismo ortodoxo, la propiedad estatal de los medios de producción y el crecimiento de la economía son los dos factores decisivos para transitar hacia una sociedad de otro tipo, sin explotadores, sin burguesía. Como lo muestra la experiencia histórica, las relaciones sociales juegan un papel relevante, ya que si no se transforman puede reproducirse una burguesía adosada al Estado, desde la esfera de la producción a través del mando centralizado y el control de la fuerza de trabajo.

Por eso la gestión de las unidades productivas es un terreno decisivo de la lucha social. Pero el control colectivo desde abajo no viene dado, hay que crearlo y para eso no hay otro modo que el conflicto social, la disputa política y de ideas, el despliegue de las iniciativas de base, sobre todo en aquellos sectores de la sociedad en que no hay experiencia histórica ni memoria de control colectivo, como sucede entre los pueblos indios de América Latina. En este caso se trata de crear una tradición comunal o comunitaria, con base en el apoyo mutuo, la minga y el tequio, instituciones que, aunque trascendentales, son muy minoritarias en las grandes ciudades donde está concentrada la mayor parte de la población.

En su crítica al manual de Stalin, Mao sintetiza la línea política que estamos analizando:

> El problema de la gestión de las empresas colectivas también es el de las relaciones humanas en un sistema de propiedad determinado. A este respecto, hay muchas cosas que decir. En el curso de un periodo dado, las transformaciones de los sistemas de propiedad siempre tienen un límite. Pero durante ese mismo periodo, las relaciones humanas en la producción y en el trabajo pueden modificarse sin cesar. Con respecto a la gestión de las empresas que pertenecen a todo el pueblo, somos partidarios de una política que combine la dirección centralizada y los movimiento de masas, que imponga el liderazgo del Partido, que mezcle a los obreros y al personal técnico, que haga participar a los cuadros del trabajo manual, que modifica continuamente los reglamentos y los sistemas irracionales, etcétera (*ibid*.: 106).

Esta orientación alcanzó connotaciones interesantes en la segunda mitad del siglo pasado, cuando debido a cambios en los métodos y ritmos de producción, la lucha sindical llevada a cabo por organizaciones obreras durante las décadas de 1960 y 1970 en los países centrales —especialmente en Gran Bretaña e Italia—, defendieron la rotación del personal como forma de lucha contra la rutina y la alienación en el trabajo devenido del modelo de producción en cadena. Lo que *a priori* parece carecer de importancia, en el fondo significaba un cuestionamiento a la división técnica del trabajo que, a la postre, debería conducir a reivindicaciones de control obrero sobre la administración de la empresa, así como a "la impugnación de la división social del trabajo" (Gorz, 1972: 115). Estamos ante lo que el trotskismo definió como "reivindicaciones transitorias", pues el marxismo revolucionario europeo concibió teóricamente el control obrero "como la preparación de situaciones de 'dualidad de poder', con vistas a una conquista total del poder político" (Panzieri, 1974: 403).

Pero volviendo a la narrativa histórica revolucionaria, es evidente que la revolución cultural no consiguió sus objetivos, que buena parte del partido y los cuadros que apoyaban a Mao actuaron de forma despótica y violentaron la voluntad de parte de la población, cometiendo incluso crímenes. El avance de China por la senda del capitalismo y el neoliberalismo, empero, no invalidan los amplios debates y la movilización social para transformar las relaciones sociales. Nunca antes se habían planteado objetivos como reducir la distancia entre trabajo intelectual y manual, ciudad y campo, ni se habían ensayado formas de gestión colectiva. Tampoco se había discutido sobre los problemas de la gestión, ni sobre aquellos que subsisten luego de la expropiación de la burguesía y la eliminación de la propiedad privada.

Nada de esto está en debate en los procesos que dicen estar construyendo el "socialismo del siglo XXI". La revolución cultural permitió iluminar, precisamente, el papel de los gestores estatales como nueva clase burguesa. Amparadas en un discurso revolucionario están naciendo nuevas burguesías en los países con gobiernos de izquierda (Venezuela y Bolivia, en particular, pero también en los demás países con gobiernos progresistas), a través de la ocupación

de cargos en las instituciones estatales desde los cuales toman decisiones y tienden vínculos con otros gestores, ya sea estatales, de empresas privadas o de otros países como China.

En los fundadores del socialismo existía una inclinación hacia el evolucionismo, que en los últimos años aparece de forma mucho más simplificada y sin contrapesos, como aquel que enfatizaba la lucha de clases como eje en torno al cual gira la transformación de la sociedad. En efecto, en *Miseria de la filosofía* (1847) Marx había escrito que "el molino a brazo os dará la sociedad con el señor feudal; el molino de vapor, la sociedad con el capitalismo industrial". Lenin, por su parte, acuñó la célebre frase de que el socialismo es sinónimo de "sóviets más electrificación". Esa tendencia a reducir la revolución a un evolucionismo economicista se profundiza y empobrece en América Latina —casi hasta el ridículo— a partir de dos temas que dominan el debate: la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones estatales.

* * *

En el capitalismo actual, los gestores de fondos de pensiones y fondos de inversiones ocupan un lugar especial en el seno de la burguesía, pero se diferencian de ella en que no son propietarios de medios de producción y cambio. En algunos países de la región latinoamericana, en particular en Brasil, los nuevos gestores estatales parecen estar confluyendo con los gestores ligados al capital a través de los fondos de pensiones.[1]

La crisis de 2008 fue un claro revelador de este sector ligado al capital financiero. En esas empresas,

> muy pocos propietarios y los gestores empresariales controlan la gestión de las empresas que se desvinculan de los demás propietarios, cada vez más atomizados, que van perdiendo el control empresarial, mientras se potencia el poder de unos equipos gestores que tienen sus propios objetivos como la rentabilidad financiera a corto plazo, el incremento de la cotización de la acción de la empresa o la expansión de la misma (Ferrer, 2009: 29).

1 Véase Raúl Zibechi, "La construcción de una estrategia", en *Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo*, México, Bajo Tierra Ediciones, pp. 73-104.

Estos gestores tienen sus propios intereses volcados en la obtención de ganancias rápidas, en vez de priorizar la rentabilidad a largo plazo como suelen hacer los propietarios. Tal contradicción parece haber jugado un papel destacado en la crisis de 2008, pero no fue su causa.

La cuestión de fondo radica en la privatización de los fondos de pensiones. Es lo que Robin Blackburn llama "capitalismo gris", entendiendo por este término un nuevo complejo financiero y un nuevo régimen de acumulación basados en la importancia de estos fondos (Blackburn, 2005). En 2003, los mismos acumulaban un capital equivalente a 25% del PIB mundial, y los sindicatos tenían un peso determinante en su seno. Actualmente se estima que 70% del capital financiero global está constituido por fondos de pensiones. En Brasil, éstos concentran un capital equivalente a 18% del PIB. Pero la cuestión central es el papel decisivo que juegan en ellos los sindicatos, al punto que João Bernardo sostiene la existencia de un "capitalismo sindical" (Bernardo y Pereira, 2008). Más adelante veremos algunos detalles de esta realidad, que lleva a los altos mandos sindicales a practicar una lógica muy similar a la de los gestores de las empresas multinacionales y la banca.

Dichos gestores se han multiplicado de forma alarmante, toda vez que el capital ya no pertenece sólo a grandes familias sino a una multitud de pequeños inversores (en realidad, todos los trabajadores que aportan a los fondos de pensiones) que hacen imposible su administración directa, tarea asumida entonces por los gestores.

Cuando los gestores de Goldman Sachs crearon instrumentos financieros como las CDO (Collateralized Debt Obligation),[2] recibieron de 1 a 10 millones de dólares entre honorarios y comisiones, ya que posibilitaron que la banca conseguiera ganancias extraordinarias. Entre 2006 y 2007, los tres principales ejecutivos de Goldman Sachs recibieron bonos por 52 millones de dólares (Bulhões,

2 Los CDO son algunos de los productos situados en el epicentro de la burbuja crediticia que derivó en la crisis *subprime*. Se trata de instrumentos financieros que incluyen bajo un solo paraguas varias emisiones de deuda distinta, pero que pueden comercializarse por tramos o bien como un solo producto de renta fija. Durante la última crisis financiera, los bancos de inversión los utilizaron para combinar emisiones de deuda de distinta calidad, desde hipotecas sin riesgo (lo que les permitió obtener calificaciones crediticias por parte de las agencias de *rating*) hasta productos *subprime* de la peor calidad crediticia.

2012). En el periodo 1930-1980 el sector financiero de Estados Unidos tuvo ganancias que representaban 15% de las ganancias totales del capital. En 2001, éstas habían trepado alcanzando hasta 50%, en gran medida gracias al intenso trabajo de los gestores, que empezaron a recibir acciones de las empresas en las que trabajaban a manera de remuneración.

Un estudio sobre los salarios de altos ejecutivos con más de 12 años de experiencia en seis ciudades del mundo reveló que un director financiero (CFO) percibía 330 mil dólares anuales en Shanghai, apenas por encima de sus pares en Londres y Nueva York, las principales plazas financieras del mundo. En Brasil, ese mismo cargo ejecutivo ganaba 230 mil dólares anuales, mientras los salarios de los gerentes de contabilidad oscilaban entre 80 y 100 mil dólares (Valor, 2014).

Aunque formalmente son asalariados, sus intereses están claramente alineados con el capital y en contra de los trabajadores. Diversos estudios confirman que aun en los periodos de crisis y caída de las bolsas los ingresos de los gestores siguen creciendo. "En el caso del sistema financiero actual, los mayores ganadores serían la élite de la clase dirigente y no los accionistas" (Bulhões, 2012: 106). La división de la clase dominante entre propietarios y gestores puede haber sido un factor que agravara las recientes crisis económicas, al introducir factores de caos en el sistema financiero. Para este trabajo interesa destacar lo que hay de común entre los gestores incrustados en los Estados y aquellos que se desempeñan en la empresa privada.

Unos y otros presentan genealogías distintas y puntos en común. Los gestores estatales tienen en sus manos la posibilidad de orientar las inversiones de las grandes empresas con apoyo de la banca pública, ocupando un lugar estratégico desde el que pueden vincularse con el capital multinacional y entrar en negociaciones y acuerdos. Los gestores de empresas privadas actúan en representación de los grandes propietarios, el 1% más rico y poderoso del mundo, ocupando lugares claves en la arquitectura del poder global, sobre todo si están en el sector financiero, es el que más riquezas ha acumulado en las últimas décadas.

Ambos tipos de gestores tienen en común el hecho de no ser

propietarios. Aquellos que se encuentran al frente de empresas petroleras estatales (hoy las más importantes del mundo) y de la banca estatal acumulan cuotas de poder muy importantes, contando con la posibilidad de tomar decisiones que impactan sobre los grandes países. Como señala el historiador Fernand Braudel, reúnen características propias de las clases capitalistas: se mueven en las alturas, manejan información privilegiada que les permite tener ventaja sobre sus competidores, pueden "falsear el juego a su favor" y manipular el crédito y las monedas (Braudel, 1985: 60). En este punto, poco importa si son gestores estatales o de empresas privadas, ya que su comportamiento es idéntico, enfrentan a los mismos enemigos y, cuando las cosas se les complican, pueden contar con cierta neutralidad del Estado.

En el caso de los gobiernos progresistas latinoamericanos, los gestores estatales han jugado un papel decisivo en el reposicionamiento del Estado en la economía, la sociedad y las relaciones internacionales; ello habría sido imposible sin su capacidad como administradores institucionales. El desarrollo de planes estratégicos, las millonarias inversiones en infraestructuras o la recuperación del papel del Estado en las grandes empresas hidrocarburíferas (PDVSA, YPF, YPFB, Petrobras y Petroecuador) no habrían sido posibles sin la orientación de estos gestores; a la vez, el control de esas parcelas de poder refuerza su posición social.

Lo anteriormente señalado no es baladí, teniendo en cuenta que las empresas estatales de petróleo (NOC, por sus siglas en inglés, National Oil Companies) concentran hoy la propiedad de la mayoría de las reservas vírgenes de petróleo del mundo (Viola, 2014: 31), superando su rol histórico en las operaciones "río arriba" —extracción en la fuente— y compitiendo activamente en las operaciones "río abajo" —refinamiento, transporte y comercionalización—, históricamente monopolio de los gigantes occidentales productores de petróleo (Klare, 2008). Según un estudio del James Baker Institute for Public Policy, mientras en 1998 nueve de las diez primeras empresas petroleras del mundo eran empresas privadas occidentales, en la actualidad tan sólo cuatro o cinco de las primeras veinte petroleras del mundo pertenecen al grupo de las *majors*, lo que Erico Mattei —presidente de Ente Nazionale Indrocarburi

(ENI)— llamaría las "siete hermanas", refiriéndose al grupo de compañías privadas que dominaban el negocio global del petróleo. Las 15 o 16 empresas petroleras restantes son públicas, en su mayoría propiedad de los países productores.

# CAPÍTULO II

## Élites o nuevas clases dominantes en los procesos de cambio

El modo en que surgen nuevas clases dominantes en los procesos de cambio ha sido motivo de extensos debates entre pensadores de izquierda de todo el mundo en la década de 1960; éstos fueron tomando partido a raíz de la división del movimiento comunista internacional con la ruptura entre la URSS y China. En América Latina hubo debates interesantes en el seno de la revolución cubana, focalizados en los incentivos materiales o morales, que mostraron matices importantes respecto a cómo se venía construyendo el socialismo en la URSS. Finalmente, en la Venezuela bolivariana también tuvieron lugar debates sobre el control obrero y el papel de las comunas en el diseño de una nueva sociedad poscapitalista. Desde una mirada centrada en la necesidad de transformar las relaciones sociales, abordaremos estos tres debates de forma sucinta, con el objetivo de dejar planteada la problemática de la transición, aunque sin la menor pretensión de agotarlas.

Haciendo historia, tiene sentido rescatar a Piort Kropotkin, quien junto a Mijaíl Bakunin es uno de los representantes de la rebelión intelectual de la vieja Rusia de los *mujiks* contra sus burocracias. En su texto *Las raíces de la burocracia,* Isaac Deutscher cuenta que "cuando Kropotkin deseaba mostrar la profundidad de la corrupción moral de la revolución francesa, explicaba cómo

Robespierre, Danton, los jacobinos, y los hebertistas se pasaron de revolucionarios a hombres de Estado" (Deutscher, 1970: 25). A los ojos de este anarcocomunista ruso, lo que viciaba a la revolución eran la burocracia y el Estado.

La cita de Kropotkin destapa una realidad: aunque las burocracias han acompañado la historia de la humanidad y su fuerza es el reflejo de la fragilidad de la sociedad, que reside en la separación existente entre la gran masa y un aparato gestor y controlador que se sitúa por encima de ella, es en las postrimerías de la revolución burguesa donde observamos la aparición de una nueva burocracia, adaptada a las necesidades del capitalismo.

En el campo socialista, y a pesar de su extensa literatura respecto a la burocracia, muchos de sus teóricos se las prometían muy felices. El mismo Engels, en el *Anti-Dühring*, desarrolla la idea de la autodestrucción de la burocracia en el socialismo: "El proletario se hace con el poder del Estado y en primer lugar transforma los medios de producción en propiedad del Estado. Pero al proceder así se pone fin a sí mismo en cuanto proletario, y pone fin a todos los antagonismos de clase" (Engels, 2012: 306). Este planteamiento sostenía que en una sociedad en la que fue suprimida la supremacía de clase, el papel de burocracia quedaría reducido a la administración de las cosas. No se trataba de eliminar todas las funciones administrativas —según Deutscher esto sería absurdo en una sociedad industrial en desarrollo—, sino de abolir los privilegios que podrían conformarla en una nueva clase. En la Comuna de París se estableció un cuerpo de funcionarios electos, cuyos miembros podían ser depuestos en cualquier momento a petición del electorado y en el que ningún funcionario ganaría más que un obrero corriente.

Años después Lenin rescataría ese tipo de enseñanzas semiolvidadas por el marxismo, expresando una idea del Estado lejana de lo que fue su verdadero desarrollo: bajo el socialismo, o incluso en una dictadura proletaria, la administración habría de llegar a ser tan simplificada que cualquier cocinero sería capaz de conducir los asuntos del Estado (Deutscher, 1970). Podemos así afirmar que los fundadores de la escuela marxista realmente menospreciaron los peligros de la burocracia en la sociedad posrevolucionaria y hubo mucha más clarividencia en el ámbito anarcocomunista

a la hora de sentenciar que todas las revoluciones se frustran en el momento en que no se deshacen del Estado. El análisis es sencillo: si los medios de producción pasan —como dice la teoría marxista— de la propiedad privada a la pública, la responsabilidad de la administración pasará ahora a descansar sobre sus organizadores y administradores, es decir, en una nueva casta. Basta un análisis de las revoluciones desarrolladas en el transcurso de la historia para entender que el predominio de la burocracia siempre ha sido inmediato tras el agotamiento de las luchas sociales y políticas y ante el estancamiento de lo que clásicamente se ha definido como lucha de clases.

Uno de los primeros pensadores que trató de comprender el sistema burocrático soviético —una burocracia convertida en la directora de la totalidad de los recursos de la nación y claramente separada y colocada por encima de la sociedad— fue León Trotsky, en su obra *La revolución traicionada* (1936). Alexei Goussev sintetizó las ideas de Trotsky (las citas del revolucionario ruso entre comillas simples) respecto a la burocracia soviética en las siguientes líneas:

> El nivel superior de la pirámide social en la URSS está ocupado por la única capa social privilegiada y dominante, en pleno sentido de estas palabras, en la sociedad soviética, capa que no hace directamente un trabajo productivo, sino [que] dirige, ordena, manda, hace favores y castiga, […] que está fuera de cualquier control por parte de las masas que producen los bienes sociales. La burocracia domina, las masas trabajadoras que 'obedecen y guardan silencio' […] En general, las condiciones de vida de la clase dirigente son análogas a las de la burguesía: 'Comprende todas las gradaciones: de la pequeña burguesía provincial a la gran burguesía de las capitales'. Esta capa es dirigente no sólo objetivamente; subjetivamente se considera el amo único de la sociedad […] tiene 'una conciencia específica de clase dirigente'. La dominación de esta capa se mantiene por medio de la represión. Su prosperidad se basa en 'la apropiación enmascarada de los productos del trabajo ajeno' […] vive a la sombra de la mayoría desposeída (Goussev, 1998: 1).

La polémica sostenida por Paul Sweezy —fundador de la revista teórica *Monthly Review*— y Charles Bettelheim desde 1968, poco después de la invasión soviética a Checoslovaquia, continuada hasta los años ochenta en las páginas de la revista fundada por el primero, es

quizás una buena muestra de un debate de alto nivel y rigurosidad respecto al tema. El debate político y conceptual se explaya a través de siete textos recogidos en el libro *Algunos problemas actuales del socialismo*, publicado en 1973. El argumento soviético, que ambos cuestionaban, consistía en justificar la invasión porque Checoslovaquia estaba en camino de restaurar el capitalismo.

El primer texto fue escrito por Sweezy poco después de la invasión. Toma distancia de la postura de la IV Internacional, que dijo que mientras no se restableciera el sistema de propiedad privada capitalista no podría hablarse de restauración del capitalismo, a pesar de lo cual también rechazaba la invasión. Sweezy señala que "se confunden los conceptos jurídicos y las verdaderas relaciones de producción" (Sweezy y Bettleheim, 1973: 3). Separar la propiedad jurídica del tipo de relaciones sociales era un paso importante, ya que puede haber propiedad estatal y, sin embargo, existir capitalismo.

No obstante, Sweezy argumentaba que la tendencia al capitalismo en los países socialistas se apoyaba en tres hechos: el control de la gestión de la empresa desde la propia empresa, la coordinación entre las unidades productivas a través del mercado y el recurso a los incentivos materiales. De algún modo destacaba la contradicción entre plan y mercado, concluyendo que las "reformas liberalizantes" puestas en práctica (como la centralidad del beneficio y la eficacia en las empresas) se encaminaban hacia un "socialismo de mercado", concepto que rechazaba.

En su primera respuesta, Bettelheim, alineado con las tesis de la revolución cultural china, destacaba que "el factor decisivo, es decir dominante, no es de naturaleza económica, sino política" (*ibid.*: 22). En los países aliados a la URSS, afirmaba, el proletariado "ha perdido el poder político en provecho de una nueva burguesía". En este punto surge una divergencia importante, ya que en opinión de Bettelheim, "lo que caracteriza al socialismo en oposición al capitalismo no es la inexistencia de relaciones mercantiles, de dinero y de precios, sino la existencia de la dominación del proletariado".

Aparecen aquí esbozadas dos tesis centrales de aquel periodo: la de quienes sostienen que el punto clave está en quién manda, cómo lo hace, si hay un poder centralizado en un grupo dirigente que se coloca por encima del pueblo; y por otro lado, la de si el socialismo

consiste en una cierta forma jurídica de propiedad, estatal o de "todo el pueblo". Interesante porque va ganando espacio la idea de que las transformaciones no están circunscritas a la cuestión de la propiedad, cuestión sin duda importante pero no única en la construcción de un mundo nuevo.

En los trabajos siguientes cada uno va puliendo argumentos y alimentando el debate con nuevos aportes. Así, Sweezy critica la idea de quienes piensan que surgió una clase dominante en la Unión Soviética y que ésta parece haber comenzado abruptamente luego de la muerte de Stalin, mientras sostiene que existe una "relación dialéctica de recíproca interacción" entre la extensión del mercado y el desarrollo de una nueva burguesía. Pero asegura que, para que exista una nueva burguesía, tiene que legitimarse en algún momento con formas de propiedad privada de empresas.

Dando un paso más en el debate, Bettelheim sostiene que "el avance hacia el socialismo no es más que la creciente dominación por parte de los productores inmediatos sobre sus condiciones de existencia y, por consiguiente y en primer lugar, sobre sus medios de producción y sobre sus productos" (***ibid***.: 54). Si esas relaciones de producción están dominadas por otros que no sean los mismos productores en forma colectiva, quienes las controlen/dominen serán la clase dominante. La centralidad del plan es, en su opinión, una representación ideológica que oculta las relaciones sociales concretas y reales. Formulado en términos más clásicos, aparece la centralidad del economicismo (contradicciones económicas) frente a la centralidad de la lucha de clases, que se expresa en el combate por el dominio/control de las relaciones de producción.

Es necesario definir qué se entiende por relaciones sociales o de producción, o "el dominio por los productores de las condiciones y resultados de su actividad", en el caso concreto de una sociedad poscapitalista. Aquí aparecen dos cuestiones decisivas. Una de ellas es mencionada por Bettelheim: si la dominación política, y de las relaciones sociales, se ejerce a través del Estado, estamos ante relaciones burguesas porque "la separación entre el aparato del Estado y las masas es el rasgo esencial del Estado burgués" (*ibid*.: 71). Por el contrario, un Estado como la Comuna de París, los sóviets o los comités revolucionarios, que es un instrumento de los trabajadores,

ya no es un Estado propiamente porque está sujeto y por debajo de la población. Este "mandar obedeciendo" es, según Marx, un Estado en extinción. Pero si aquel aparato estatal se mantiene "por encima" de la gente común, que la domina y controla, entonces quien está al frente de ese Estado es una nueva burguesía.

La segunda cuestión la va desarrollando lentamente a lo largo del debate, y está centrada en las modalidades y formas en que puede crecer una nueva burguesía de Estado en un régimen posrevolucionario. Si el poder es el punto primero, se propone definir qué características debe tener para ser un poder revolucionario.

+ Un poder que sea capaz de crear las condiciones para que los productores directos controlen y dirijan de modo colectivo sus medios de producción y sus condiciones de existencia, apoyados en la previa expropiación de la burguesía y la existencia de un plan de conjunto acordado por todos y todas.

+ La desaparición del aparato estatal y que los poderes emergentes estén controlados y subordinados a la clase trabajadora ("mandar obedeciendo"). De ese modo podrán controlar la utilización del trabajo excedente y sus productos, sin que exista separación entre los productores directos y sus medios de producción.

+ Si los productores directos no controlan el producto de su trabajo y los medios de producción, éstos serán controlarán por otros, que serán un poder por encima o, si se prefiere, una nueva clase dominante o burguesía.

+ Pero el control de los medios de producción no puede ejercerse de arriba abajo, sino revolucionando las relaciones sociales a la vez que se revolucionan las personas que participan en ese proceso. El control de los medios de producción supone transformar la división del trabajo heredada para que "progresivamente se suprima la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual, la distinción entre las tareas de ejecución y las tareas de dirección, y que, por tanto, también se reduzca, y se elimine posteriormente, el papel de los técnicos situados por encima de los trabajadores" (*ibid*.: 108). Esas separaciones/contradicciones producen formas de representación concretas, una de las cuales es la forma valor, que permite que una minoría de no productores explote a la mayoría de productores, arrebatándoles el poder. Por eso la propiedad formal o jurídica no

es el elemento único a considerar a la hora de hablar de la nueva burguesía, sino de modo creciente el control o la gestión sobre los medios de producción.

+ Para transformar la sociedad en un sentido emancipatorio, "un partido dirigente sólo puede ser un partido proletario si no pretende *dirigir* a las masas, sino que, por el contrario, continúa siendo el *instrumento de sus iniciativas*" (*ibid*.: 101, énfasis en el original). Ésta es una excelente formulación. Dice además que debe "ayudar a las masas a que se realicen *ellas mismas* (...) *sin recurrir nunca a la constricción*" (*ibid*.: 101-102). Como dijo en alguna ocasión César Enrique Pineda, "nosotros no queremos gobernar a nadie, aspiramos a que los demás se autogobiernen".[1]

+ Para contribuir a este tipo de transformaciones el control del aparato estatal tiene escasa utilidad; los discursos "revolucionarios" a menudo inducen a confusión; la propiedad privada puede ser abolida, pero las relaciones sociales no se anulan por decreto, sólo pueden transformarse en un largo proceso de experimentación y movilización sin constricciones.

Una década después, Sweezy y Bettelheim coincidían en por lo menos tres puntos: que las revoluciones del siglo XX instalaron en el poder a partidos revolucionarios altamente organizados que gobernaron en nombre de los trabajadores; que una vez en el poder eliminaron los derechos democráticos y prohibieron las organizaciones no controladas por ellos, siendo la beneficiaria de este nuevo sistema "una clase dominante que controlaba el aparato del Estado y se apropiaba colectivamente del producto laboral de la masa de productores directos"; y que ninguna revolución había abolido la relación salarial, por lo que puede considerarse que seguían siendo capitalistas (Bettelheim, 1987: 69).

En relación a lo anterior, el militante comunista español Grandizo Munis, aludiendo al proceso soviético afirmaría que "la burocracia técnica y política está interesada en desarrollar la estatización y planificación de la economía, se funde con ellas y saca de ellas las características de una clase" (Munis, 1999: 44).

Como puede constatarse, este tipo de debates ha estado ausente no sólo en las revoluciones inspiradas en el modelo soviético sino

1 Sociólogo, militante de Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA) y ahora de Comunidad, Autonomía y Libertad (Comunal), México.

también en los procesos de cambio más recientes. Además ha sido ***rara avis*** en los movimientos sociales. Apenas un puñado de experiencias (como el zapatismo, Cecosesola en Venezuela, algunos asentamientos sin tierra en Brasil, comunidades mapuche y otras) trabajan para superar la división burguesa del trabajo y por el control de los productores de sus medios y condiciones de reproducción.

* * *

El caso de Cuba es bien diferente. Desde los comienzos la revolución tomó rumbos originales y promovió actitudes solidarias por parte de los militantes y cuadros, que fueron a trabajar en las cosechas de caña o a colaborar con causas revolucionarias en otros países. La importancia que adquirió el trabajo voluntario no puede ser soslayada, ya que es una muestra de conciencia de una parte del pueblo cubano. Como señalara el Che, la importancia del trabajo voluntario no se relaciona con la economía sino que se refleja "en la conciencia que se adquiere frente al trabajo y en el estímulo y ejemplo que significa esa actitud para todos los compañeros de las distintas unidades de trabajo" (Guevara, 1976: 241).

Más importante aún porque en el trabajo voluntario estuvieron involucrados no sólo militantes del partido y cuadros, sino también administrativos y técnicos que en el trabajo establecieron, como señala el Che, lazos horizontales de camaradería allí donde la organización capitalista del trabajo los mantenía separados. En este punto el Che manifiesta una posición que lo entronca con lo mejor del pensamiento crítico y las experiencias emancipatorias:

> El trabajo voluntario se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales, para preparar el camino hacia una nueva etapa de la sociedad [...] donde no existirán las clases y, por lo tanto, no podrá haber diferencia alguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino (*ibid*.: 334).

Sería ocioso enfatizar sobre la coherencia entre palabra y acción en militantes como el Che Guevara. La dirección cubana, por lo

menos en la década de 1960, no escatimaba el debate sobre la burocratización del Estado, ni sobre los principales problemas que enfrentaba la sociedad posrevolucionaria. Fueron años luminosos de amplios debates en los que intervinieron el Che, Charles Bettelheim y Ernest Mandel, entre otros, cuyas posiciones fueron publicadas en Cuba entre 1963 y 1964, y debatidas abiertamente. No es el objetivo de este libro reproducir aquellos debates, sino apenas usarlos como espejo en el que observar nuestros debates actuales sobre la transición a un mundo nuevo, para comprobar el terreno perdido por la rigurosidad y la profundidad en aras de análisis de escaso vuelo político y teórico.

Mandel hizo una buena síntesis de los debates. En su opinión había cuatro cuestiones. Dos de ellas se relacionaban con la política del gobierno revolucionario: la organización de las empresas industriales y el papel de los estímulos materiales en la construcción del socialismo. Las otras dos son de orden teórico: si la ley valor opera en la transición y el carácter de los medios de producción estatizados, si eran mercancías, propiedad social o tenían otra naturaleza (Mandel, 1969: 12). Una parte sustancial del debate se centraba en la sobrevivencia de las categorías mercantiles en la nueva sociedad, cosa que el Che tendía a negar, preocupado por las consecuencias en la subjetividad de los trabajadores.

El Che defendió la planificación centralizada frente a quienes promovían la autonomía financiera de las empresas, que argumentaban que favorecía la eficiencia y la rentabilidad. En cuanto a los estímulos materiales no los rechazaba de plano, pero creía que podían atentar contra la cohesión de la clase trabajadora y fomentar el enriquecimiento individual. Era consciente de que el estímulo material sólo podía morir gradualmente y, contra quienes apostaban a que era la palanca para el crecimiento económico, sostuvo que "en tiempo relativamente corto el desarrollo de la conciencia hace más por el desarrollo de la producción que el estímulo material" (Guevara, 1969: 46). Respecto a la organización de las empresas, el proceso cubano fue atravesando varias etapas que modificaron la realidad de las mismas.

A grandes rasgos, el intenso debate de los años sesenta y las experiencias de los años 1967-1970 tuvieron un final abrupto al fracasar la zafra de las 10 millones de toneladas, en la que el partido y

el gobierno habían empeñado al país aun al costo de desorganizar la producción. A partir de ese momento, Cuba adoptó los criterios económicos de la Unión Soviética. Pero antes de esa coyuntura crítica se tomaron decisiones realmente interesantes, aunque algunas de ellas puedan considerarse utópicas y hasta aventureras.

El Che y sus aliados en el gobierno eran partidarios de limitar las relaciones mercantiles. Una de esas expresiones era la prioridad otorgada al trabajo voluntario; además se negaba a considerar que las empresas estatales fueran mercancías y sostenía que la ley del valor no regula la economía cubana sino el plan, mostrando la contradicción existente entre plan y mercado (*ibid.*). En ese sentido, las empresas no debían tener autonomía pues eso alentaría las relaciones mercantiles. En realidad era un debate de hondo contenido político bajo formas económicas, debate en el que se ponía el acento en la educación, la "eliminación de las taras de la vieja sociedad" y el avance de la conciencia de los trabajadores (Habel, 1989: 106).

Sin embargo, la ofensiva de este sector contra esas "taras" llegó, en opinión de muchos analistas y más adelante de la propia dirección cubana, a tomar medidas ilusorias que naturalmente fracasaron: supresión de las primas y las horas extraordinarias, supresión total de los alquileres (que al comienzo de la revolución habían sido reducidos a 10% del salario del arrendatario), gratuidad del teléfono y otros servicios. Pero además desapareció la contabilidad financiera y el cálculo de rentabilidad de las empresas, con lo cual "había desaparecido el método para saber si los obreros, empleados y directivos trabajaban poco o mucho, bien o mal, si se producía a bajo o alto coste, si merecía la pena producir un bien o importarlo" (Recarte, 1980: 51). El salario se desvinculó de cualquier norma de rendimiento y en 1966 se suprimieron los sindicatos y las organizaciones de masas con excepción de los Comités de Defensa de la Revolución. Parte de la ofensiva contra las relaciones mercantiles se concretó en el cierre masivo de tiendas, almacenes y talleres, convirtiendo a los artesanos y comerciantes en proletarios. Sólo en La Habana se nacionalizaron 13 mil establecimientos privados (unos 55 mil en todo el país); en 1968 el sector privado había dejado de existir y medio millón de habitantes de la capital se disponían a trasladarse al campo para participar en la zafra.

Pero las propuestas del Che, expresadas en su rechazo a las categorías mercantiles y a la burocracia, mostraban una seria preocupación por la posible constitución de una capa privilegiada de tecnócratas y burócratas, como los que había conocido en sus viajes a Polonia, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana, donde "encontraba al hombre soviético muy parecido al yanqui", ya que se afanaba en producir más para ganar más (*ibid*.: 53).

El fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas en 1970 generó enormes tensiones sociales y económicas, así como una gran desorganización de la producción, pues se habían abandonado sectores enteros en aras de tal propósito. En ese momento se registró un profundo viraje hacia la Unión Soviética que implicó consecuencias de largo plazo para la revolución. Nació una Nueva Política Económica, los salarios quedaron vinculados a la productividad, la política de gratuidades se vio limitada, se redujeron jubilaciones y pensiones y algunos precios sufrieron incrementos. Se reinstalaron los controles contables y financieros sobre la actividad de las empresas, mejorándose la información estadística, al tiempo que se retornó al sistema de presupuesto estatal.

En 1975, el primer congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) oficializó el viraje: "El sistema de dirección de la economía debe fundamentarse en las leyes económicas objetivas que actúan en la etapa de construcción del socialismo, y dentro de éstas, tener en cuenta la vigencia de la ley del valor, y de las relaciones monetario-mercantiles que existen" (*ibid*.: 65). En adelante, las empresas mantendrán relaciones mercantiles, tienen un director como autoridad máxima designada por el órgano superior, asesorado por un consejo de dirección en el que están representados los sindicatos, y el trabajo voluntario es regulado por ley. En 1971 se había promulgado una ley de trabajo obligatorio.

Aunque se mantuvo la espectacular reducción de las desigualdades sociales en beneficio de los más pobres, el pleno empleo y el carácter gratuito de servicios como salud, vivienda y educación, la cantidad de burócratas aumentó dos veces y media entre 1973 y 1984; en una década los empleados administrativos pasaron de 90 mil a 248 mil y el personal directivo de 180 mil a 250 mil, distorsiones que tuvieron consecuencias en la producción y la sociedad (Habel, 1994:

89). Hubo empresas en las que la mitad de los empleados eran obreros y la otra mitad administrativos y técnicos debido a la ampliación del abanico salarial a favor de los más capacitados, lugar que todos querían ocupar aunque no lo merecieran o no estuvieran preparados. En paralelo, aumentó el ausentismo, cayó la productividad en el trabajo y se expandió el mercado negro. Algo común a todos los países socialistas.

El péndulo de la historia llevó a la revolución desde los experimentos igualitarios hasta la instauración de jerarquías, en cuya cúspide aparecen los altos funcionarios del partido y el Estado, que cuentan con privilegios a los que no accede la mayor parte de la población. Desde una mirada centrada en las relaciones sociales puede concluirse que hubo un reforzamiento de la división del trabajo, que aumentaron las desigualdades y disminuyó el contrapoder de los trabajadores. En 1965, en las empresas se habían creado consejos de trabajadores para juzgar los problemas de disciplina y dar seguimiento a la legislación laboral, pero fueron gradualmente limitados al tiempo que se reforzaron los poderes disciplinarios de los administradores aunque, todo debe decirse, en 1977 la mayoría de los trabajadores participaba en las asambleas mensuales de producción en las grandes empresas (*ibid.*: 146-149).

En el caso de Cuba, al igual que en los países orientados en torno a la Unión Soviética, llama la atención que no haya habido debates sobre el carácter de clase del poder. Sorprende porque en Cuba, a diferencia de lo que sucedía en otros países socialistas, la posibilidad de opinar y disentir no había sido completamente coartada. No existe y nunca existió un debate sobre si la burocracia estatal, que nadie niega su existencia, es una clase o el germen de una clase opresora. La ideología soviética siempre excluyó esta eventualidad, de modo que las movilizaciones sociales y la crítica que sobreviven bajo el régimen posrevolucionario, se identifican siempre con los enemigos de la revolución y el imperialismo. Es una experiencia distinta de la que vivieron los comunistas chinos bajo la revolución cultural, donde los enemigos de clase y las fuerzas sociales en pugna eran producto del periodo de transición.

La revolución cubana ha sido muy importante para la región

latinoamericana, contribuyendo como ningún otro proceso al fortalecimiento y la autoestima de los sectores populares organizados: mostró que es posible derrotar a las oligarquías locales y resistir exitosamente al imperialismo; enseñó que en el acierto o el error, aun los pequeños países pueden tomar sus propias decisiones de forma independiente respecto a los poderosos del mundo. Sin embargo, también dejó una simiente problemática: la negación de las contradicciones bajo el nuevo régimen casi siempre supone la acusación a los disidentes de hacerle el juego al enemigo. En este sentido, se actualiza una de las peores tradiciones del movimiento comunista internacional, la que llevó a Stalin a imponer un poder omnímodo acusando de agentes del enemigo a todos los disidentes, diferencias que se saldaron en prolongadas estancias en los campos de trabajos forzados (gulag) o frente al paredón, práctica que en Cuba, por fortuna, ha sido excepcional.

* * *

En Venezuela se desarrollan algunas de las más notables experiencias de autogestión y autoorganización existentes en América Latina. El gobierno bolivariano no sólo no las ha coartado, sino que muchas veces ha impulsado y apoyado las experiencias nacidas de forma espontánea en los sectores populares, tanto en los barrios de las grandes ciudades como en las fábricas y los campos. En otros casos, las organizaciones populares nacieron por el impulso recibido desde el Estado y el gobierno. Finalmente, un tercer grupo de iniciativas nació y se sostiene de forma independiente, como es el caso de Cecosesola,[2] aunque este grupo es minoritario.

Cecosesola es una red de 50 comunidades con casi medio siglo de existencia en el estado de Lara, con producción agrícola, agroindustrias, servicios de salud, de ahorro y préstamo, funerarios, de transporte y distribución de alimentos y artículos para el hogar. Tiene más de 20 mil asociados, 1 300 trabajadores que también son socios con igual remuneración, y tienen una forma de funcionar sin estructura fija ni dirección, con base en más de 300 reuniones

2 Véase "Cecosesola: el mundo nuevo desde lo comunitario", en Raúl Zibechi, *Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías. Autonomías y emancipaciones en la era del progresismo*, México, Bajo Tierra Ediciones, 2015, pp. 263-284.

anuales, semanales, vivencias y encuentros de convivencia y fraternización (Cecosesola, 2009).

Estamos aquí ante un colectivo en que la organización, definida como "organización en movimiento", no tiene jerarquías; sus instancias son un conjunto de reuniones abiertas, sin orden del día, que funcionan como espacios de encuentro sin diseño previo y que desaparecen o se crean según las necesidades de cada situación. No dependen del Estado ni de los gobiernos local o nacional. Todo lo que han hecho, incluyendo el edificio del centro de salud comunitaria, es fruto del trabajo colectivo y los aportes individuales de los asociados y trabajadores.

Cecosesola es una organización verdaderamente autónoma y sus miembros trabajan por la emancipación individual y colectiva. Son una organización excepcional en Venezuela, del mismo carácter —aunque muy distinta— del zapatismo y el movimiento sin tierra de Brasil.

En Venezuela, las organizaciones sociales más importantes tienen carácter territorial, están ancladas en barrios de las periferias urbanas como los cerros de Caracas. Desde que protagonizaron el Caracazo contra el ajuste neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, esos territorios han sido fuente de una gran creatividad colectiva. Dicho de otro modo, en Venezuela los barrios han sido, y al parecer siguen siendo, lugares de transformación, espacios "construidos y resignificados por sus pobladores como un espacio de vida, de cultura propia, de solidaridad, de resistencia y de alternativa" (Martínez, 2013: 261).

Dentro del primer grupo de iniciativas del gobierno, que llevan a la formación de organizaciones sociales "desde arriba", deben destacarse las Mesas Técnicas de Agua y los Comités de Tierra Urbana (CTU), creadas en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, luego de fracasada la intentona golpista de 2002. Aunque algunas de estas organizaciones quedaron adheridas a las instituciones estatales, otras como los CTU se proyectaron de forma independiente, articulándose con otras iniciativas de base dando origen al Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Si bien mantiene relaciones cercanas con el gobierno y recibe apoyo material del Estado, también sostiene disputas con las instituciones en su proyecto de

largo aliento de construir comunidades y transformar los barrios democratizando la ciudad.

El caso de los Consejos Comunales merece un comentario especial. Antes de que nacieran existieron los Consejos Locales de Planificación Pública que, luego de varios años de funcionamiento, fracasaron por tres motivos: a) "El peso de los representantes institucionales era más grande que el de los delegados populares, aunque formalmente eran minoría"; b) No pudieron construir una organización "a nivel más alto" por la inexistencia de "una organización comunitaria de base"; c) El ámbito que abarcaban era demasiado grande "para permitir una participación directa de la población" (Azzellini, 2015: 145).

Las conclusiones parecen atinadas, ya que los problemas mencionados por Azzellini son comunes a los registrados en las organizaciones de las periferias urbanas del continente. A raíz de este aprendizaje nacieron los Consejos Comunales, que ya en 2009 alcanzan más de 30 000 expresiones locales. En 2007 Chávez dijo que estos consejos "nacieron en lo local, pero deben trascender lo local (...) Los consejos comunales son instrumentos o herramientas de poder popular constituyente" que "deben confederarse o federarse para abarcar un espacio mucho mayor" (*ibid.*: 155). La propuesta consistió en que se organizaran a nivel nacional a través de una confederación.

Es evidente que esta propuesta no nació de los consejos y no está claro que sus miembros necesitaran una organización de ese tipo. El politólogo Dario Azzellini enfatiza que habían nacido en la base, "pero su papel destacado y su crecimiento exponencial se deben a que el Estado los apoya y difunde de manera masiva" (*ibid.*: 156). El paso dado para convertirlos en organización nacional, supone su institucionalización a través de normas legales. La ley creada para ellos define su organización interna y "su relación con los órganos del Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas"; su tarea consiste en "la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social" (LCC, 2006).

Varios analistas sostienen que "las comunidades se han apropiado de la figura de los consejos comunales" (Azzellini, 2016: 120)

convertidos en órganos de poder popular. Creemos que aún es pronto para asegurarlo. En la medida en que gestionan las políticas estatales no tienen autonomía económica ni financiera, ya que administran recursos transferidos por el Estado o por instituciones estatales. La inexistencia de una economía propia limita su autonomía. No es lo mismo que sean órganos de gestión y participación que órganos de poder. Sin embargo, es posible que caminen en un sentido distinto al marcado por la ley que los creó.

En todo caso, parece necesario enfatizar la diferencia entre organismos como los Consejos Comunales creados desde arriba y el caso de Cecosesola, sobre todo desde el punto de vista de su autonomía integral, que abarca desde la autonomía económica hasta la capacidad de autogobernarse. La red de comunidades/cooperativas es un entramado económico-político-social-cultural, capaz de autogestionarse y autoabastecerse; de hecho suministra entre 30% y 40% de los alimentos de la ciudad de Barquisimeto. Cecosesola no tiene vocación de "totalidad", o sea de convertirse en *la* alternativa para todos los venezolanos, como sí la tienen los Consejos Comunales propuestos como el modelo de órgano de poder para todo el país.

Éste es un punto clave en las diferencias existentes entre las diversas organizaciones. El primero y más importante es la autonomía integral. El segundo es la relación con el Estado. Pero el tercero es la necesidad que tienen los partidos y los militantes revolucionarios de encontrar una alternativa o una política a ser seguida por todos y todas. Cuando hay una experiencia avanzada se pretende generalizarla, aun a costa de secarla o institucionalizarla. Una cosa son las necesidades del poder y otra muy distinta las necesidades de las creaciones del abajo.

Sobre los consejos hay también visiones críticas como la de Edgardo Lander, quien sostiene que el impulso promovido por el gobierno y la sociedad ha "generando experiencias variadas y diversas, algunas de gran riqueza, pero a la vez envueltas en la contradicción de depender de los recursos públicos y sometidas a lógica leninista, cuya caricatura son los consejos comunales rojos rojitos" (Lander, 2015).

La impresión recogida después de 15 años de proceso bolivariano es que en la sociedad han existido condiciones que fomentaron

iniciativas importantes, entre las que deben incluirse no sólo Cecosesola, sino también Tiuna el Fuerte en Caracas, la Red Nacional de Sistemas de Trueke, y hasta grupos como el Movimiento Revolucionario de Ciclismo Urbano, experiencias de comunicación, de organización territorial, feministas, indígenas, y muchas iniciativas locales poco conocidas (Zibechi, 2013). Son cientos y miles de semillas que nacieron en un periodo de intensa actividad de la sociedad, que muestran un potencial extraordinario, el que les ha permitido su prolongación en el tiempo.

Todo este rico movimiento está siendo fagocitado por la política bolivariana de apropiarse y cooptar todo lo que surge en la base, institucionalizando la creatividad colectiva para apuntalar el proceso, el gobierno y el Estado. La captura de todo lo que va creando la sociedad tiende a debilitar las creaciones concretas y a la vez desfibra el tejido social que las hizo posibles. Los grupos institucionalizados comienzan a participar de la cultura de la renta petrolera, comportamiento profundizado bajo el proceso bolivariano. De ser organizaciones portadoras de nuevas relaciones sociales emancipatorias quedan convertidas en reproductoras del mundo viejo, al que se subordinan.

* * *

Desde la revolución rusa de 1917 contamos con un siglo de experiencias revolucionarias triunfantes, tiempo suficiente para sacar algunas conclusiones o adelantar reflexiones sobre los límites y problemas que han enfrentado estas experiencias que, en su conjunto, involucran a una parte importante de la humanidad. Unas cuantas fueron motivo de debate entre intelectuales y militantes. Otras son más polémicas y se circunscriben a la experiencia latinoamericana.

La *primera* es que las fuerzas organizadas capaces de derribar el antiguo régimen son poco apropiadas para construir la nueva sociedad. Las fuerzas revolucionarias triunfantes son organizaciones jerárquicas cuya cúspide está mayoritariamente integrada por varones, blancos, educados. Estas fuerzas son adecuadas para enfrentar y derrotar militarmente a las fuerzas de la reacción, pero no los son en absoluto para construir relaciones sociales de nuevo tipo, ya que las dos lógicas son contrapuestas.

La unificación de las fuerzas antisistémicas, necesaria para el combate, se convierte en un problema a la hora de la transformación. La relación mando-obediencia, mandar mandando en el lenguaje zapatista, debe dar paso al mandar-obedeciendo al pueblo, algo que va a contrapelo de la cultura de los grupos revolucionarios. Sólo una fuerte educación en la ética puede modificar este modo de hacer que, entre nosotros, se manifiesta en una gama de comportamientos que van desde el caudillismo o el culto a la personalidad, hasta la delegación en los jefes y dirigentes, o en las instituciones estatales, o combinaciones entre ambas.

La *segunda* se relaciona con la inconveniencia de fusionar partido y Estado, pues se conforma un "sistema oligárquico revolucionario" muy difícil de desmontar (Del Río, 1981: 162). Éste suele ser el primer paso para la cristalización de una nueva clase en el poder, una clase que nace del control del poder estatal y se impone sobre la sociedad. El control del aparato estatal durante un tiempo prologando permite a un grupo reducido de personas el control, a través de su gestión, de los medios de producción. Aunque formalmente éstos pueden ser propiedad del Estado, en los hechos son administrados por una capa que toma las decisiones más importantes, beneficiándose directamente de su gestión.

La *tercera* consiste en la dificultad para desarrollar los poderes de los productores, los trabajadores y trabajadoras, poderes no estatales. En sus primeras etapas las revoluciones suelen contar con organizaciones de masas nacidas en la base de la sociedad (sóviets, comunas, comités de defensa de la revolución), que gozan de gran legitimidad y en las que participa una parte de la población. Estas organizaciones suelen apoyar con entusiasmo los procesos de cambio, y a menudo se identifican con la dirigencia revolucionaria.

Pasados los momentos más álgidos del conflicto esas organizaciones suelen debilitarse, los militantes las abandonan y con el tiempo se marchitan. Pero la dirección de la revolución, en vez de insuflarles ánimo e intentar revitalizarlas, acostumbra a subordinarlas al proyecto de fortalecimiento del Estado que animan todas las revoluciones triunfantes. Ambos procesos —el desgaste interno natural de cualquier organización social y el promovido desde el poder estatal— terminan por destruir el papel de las organizaciones

al convertirlas en instituciones resecas incapaces de movilizar a la población. A menudo son transformadas en aparatos destinados al control de la misma población que las creó.

Existen muy pocas experiencias de autogobierno que hayan pasado el umbral del reflujo y superado la cooptación estatal. Las Juntas de Buen Gobierno impulsadas por el zapatismo merecen un lugar destacado en la historia del autogobierno desde abajo. Hasta ahora no se han burocratizado ni sucumbieron al Estado ni al poder revolucionario. El hecho de que estén inspiradas en una práctica que no pretende hacerse con el aparato estatal sino que impulsa el autogobierno de los pueblos, recuperando las tradiciones indígenas, puede ser uno de los hechos que expliquen esta "anomalía". No se ha gestado un grupo autónomo, separado de las comunidades, ya que la rotación y el deseo de que todos participen en las tareas de gobierno se mantienen intactos. En las Juntas de Buen Gobierno son los pueblos los que están organizados como poder.

La *cuarta* tiene relación con las imágenes o metáforas que manejamos sobre el fin del capitalismo y la transición a un mundo nuevo. Rosa Luxemburgo, como otros revolucionarios de comienzos del siglo XX, manejaba la teoría del colapso del sistema y llegó a afirmar que "es la médula del socialismo científico", pues "sin el colapso no se puede expropiar a la clase capitalista" (Luxemburgo, 1967: 98).

Por su parte, el sociólogo Immanuel Wallerstein considera que el derrumbe del sistema ofrece la oportunidad de no perpetuar la explotación, al destacar que "las revoluciones incluso pueden ser revolucionarias en la medida en que promueven tal derrumbamiento" (Wallerstein, 1998: 106). Llega a esa conclusión porque sostiene, con base en la experiencia histórica, que una transición controlada y organizada implica una continuidad de la explotación, ya que alguien la dirige y controla. En el pensamiento revolucionario, la imagen del derrumbe es visualizada como el momento de ruptura en el que la irrupción de los sectores populares organizados puede torcer el rumbo de la historia, poner fin a la dominación de clase y abrir las puertas para la construcción del mundo nuevo.

Desde hace algún tiempo, el zapatismo maneja la hipótesis del colapso y propuso su debate en un encuentro realizado en Chiapas

en 2015, *El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista*. Es un debate bastante novedoso en los movimientos antisistémicos, pero puede ser alentador ante la apuesta de la mayor parte de los movimientos sociales de que sean los partidos en el gobierno los que encaminen a la sociedad hacia un mundo nuevo.

La idea de colapso tiene una larga tradición en el movimiento socialista. En los últimos años se ha revitalizado al calor de la crisis del concepto de desarrollo indefinido y de la crisis ambiental en curso. Es evidente que si el capitalismo no colapsa será muy difícil superarlo. Sin embargo, el colapso por sí solo no garantiza que la sociedad que surja de sus cenizas sea mejor que la actual. En el modo de entender la transición que va ganando espacios entre organizaciones sociales y militantes, se comprende que las iniciativas existentes pueden ser el punto de partida de la reorganización de la sociedad en un sentido de mayor democracia y justicia social. En esta dirección, todas las creaciones colectivas, desde las huertas orgánicas hasta las fábricas recuperadas, desde la educación liberadora a la salud integral, deben ser entendidas como relaciones sociales heterogéneas respecto a las hegemónicas, que conforman pequeños mundos nuevos que puedan servir, quizá, como inspiraciones/iluminaciones cuando la humanidad se afane por reconstruirse después del colapso.

La *quinta*, finalmente, representa un desafío de enorme magnitud: la idea de gobernar y dirigir a toda una sociedad, de hacer un cambio que incluya a todos los habitantes, supone una actitud totalitaria que implica gobernar a millones de personas y, guste o no, oprimirlas, algo que va en contra del espíritu emancipatorio.

El problema es cómo no renunciar al cambio social más amplio posible, pero sí renunciar a la pretensión —de típico cuño iluminista y elitista— de llevarle el bien y la luz a todos y todas. Se trata de intentar un camino diferente que pasa por la autolimitación de los revolucionarios que no deben hacer todo lo que puedan hacer, pero no sólo por razones ambientales (Capella, 2007). Es una de las cualidades mayores de la emancipación, que pasa no sólo por la autoinstitución sino, junto a ella, por la autolimitación (Castoriadis, 1995). Si el capitalismo puede ser entendido como el despliegue ilimitado de las potencialidades humanas sin medir

consecuencias, el ser capaces de limitarnos a nosotros mismos —básicamente por razones éticas— puede ser entendido como un modo de sofrenar impulsos irracionales que, en última instancia, nos conducen a la autodestrucción y la barbarie.

# CAPÍTULO III

## Nuevas élites bajo el progresismo

En el pensamiento del progresismo, Estado y capitalismo tienden a considerarse como opuestos. Fernand Braudel, por el contrario, sostiene que el capitalismo no puede triunfar sin el apoyo del Estado. "El capitalismo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado" (Braudel, 1985: 68). La fusión del Estado y el capital ha mostrado una potencia extraordinaria. Wallerstein agrega que "el Estado es un elemento que forma parte del funcionamiento del sistema capitalista", de modo muy particular en su fase monopólica-imperialista (Wallerstein, 1998: 225).

El control del aparato estatal fue clave en la formación de las burguesías latinoamericanas, que nacieron ejerciendo la violencia, primero contra los representantes locales de las monarquías europeas y, luego, para expropiar las tierras de los pueblos indios y negros, de los campesinos y las poblaciones tradicionales. La alianza con los Estados nación, y el control de sus aparatos militares y policiales para proteger sus intereses, permitieron a la clase burguesa-terrateniente apropiarse de las tierras y los bienes comunes de los pueblos.

Cuando en el escenario nacional se enfrentan dos grupos poderosos, como sucedió durante las independencias y al precipitarse la crisis de las oligarquías (o sea en las dos transiciones hegemónicas

entre EspañaPortugal e Inglaterra, y luego entre Inglaterra y Estados Unidos), la construcción de Estados fuertes suele ser la mejor opción para resolver el conflicto a favor del grupo emergente (*ibid*.). En esta tercera transición entre la dominación estadounidense y una futura y aún incierta hegemonía china, parece estar sucediendo algo similar: los gobiernos progresistas han apostado por fortalecer los aparatos estatales como forma de resolver a su favor la puja con Estados Unidos, el capital financiero y las grandes empresas multinacionales. El éxito o fracaso en este empeño marcará el futuro de esta corriente.

Entre los grupos emergentes bajo los gobiernos progresistas nos detendremos en los casos de la creación de una nueva élite en Brasil, procedente de las grandes empresas estatales, y de los cooperativistas mineros en Bolivia. Aunque aún es muy pronto para evaluar el impacto de estos grupos sociales emergentes en la vida de cada país y en la región en su conjunto, parece importante avanzar algunos elementos de análisis que permitan comprender la lógica de los conflictos políticos en curso. Ello implica recoger datos todavía dispersos y, sobre todo, navegar por debajo de las apariencias y los discursos sobre el socialismo y la disminución de las desigualdades para mirar la realidad cruda, que indica que se apela a los pobres para combatir a la fracción opuesta de la clase burguesa.

## Los antecedentes inmediatos

A diferencia de la gran depresión de la década de 1930, la fuerte crisis que sufrió América Latina en la década de 1980 fue ante todo una crisis del Estado. Esta circunstancia, combinada con el agotamiento del proceso nacional desarrollista prolongado con diferente intensidad entre 1930 y 1970 derivó en un fuerte endeudamiento de los Estados latinoamericanos. Entre 1970 y 1978 la deuda total viva en América Latina creció a un ritmo de 24% anual, triplicándose durante los años siguientes hasta 1982 (Bresser, 1998: 105). Lo anterior determinó una crisis de deuda externa sin precedentes, que junto al agotamiento de la estrategia de sustitución de importaciones y al proceso de "privatización del Estado" inducido por las élites políticas y burocráticas que emprendieron

actividades rentistas, colocó en "bandeja de plata" el remate que la globalización neoliberal hizo de aquel proceso (*ibid*.: 106).

En los años setenta, el mercado financiero internacional se vio sometido a múltiples transformaciones que implicaron un notable incremento de la oferta de crédito disponible para la periferia. La complicidad entre los agentes financieros y los grupos dominantes en América Latina permitió la generación de "burbujas de consumo o especulación basadas en endeudamientos público o privado" que llevaron a la crisis (Sevares, 2007: 188).

Un reporte del prestigioso centro de estudios e investigación francés Centre d'etudes prospectives et d'informations internationales (CEPII) indicaba en diciembre de 1991:

> Como contraparte real de la 'orgía de créditos', que de resultas de la competencia entre los bancos se produjo durante los setenta, se multiplicaron los programas de inversiones que no eran viables […] La lista de los 'elefantes blancos' más o menos grandes es larga y fueron producto de la conjunción o colusión, tanto de los intereses a corto plazo, bancarios o comerciales, de los países acreedores como de los intereses, privados y políticos, de los países deudores (CEPII, 1992: 289).

A diferencia de lo sucedido en la crisis de los años treinta, en la que cinco países repudiaron completamente sus deudas (Brasil, Colombia, Chile, México y Perú), mientras que Argentina procedió a una anulación parcial de la suya (Félix, 1987: 3-46), los gobiernos de América Latina en esta ocasión se resignaron —tras la crisis mexicana de 1982— la posibilidad de negociar de forma separada con sus correspondientes acreedores privados extranjeros bajo el patronazgo de Estados Unidos. Según la CEPAL, la transferencia neta de capitales latinoamericanos hacia el Norte significó más de 200 mil millones de dólares entre 1983 y 1991, devolviéndose como servicio de la deuda 1452000 millones de dólares entre 1982 y 2000, más de cuatro veces el *stock* total de la deuda adquirida al inicio de dicho periodo (Toussaint, 1989: 4).

Hasta la década de 1970 había sido ampliamente aceptado el modelo de Estado de seguridad fordista, caracterizado por su tendencia a la institucionalización de los conflictos de clase bajo el

control estatal, insertando a la clase trabajadora como una fuerza de desarrollo capitalista mediante la estrategia de expansión de mercados. Sin embargo, será a partir de la crisis —cuando la desaceleración del crecimiento hace que las cargas sociales agraven los problemas financieros del Estado protector— que se implementen las teorías neoliberales de la Escuela de Chicago en la región, reduciéndose el gasto público y disminuyendo la intervención estatal sobre los mercados. No parece casualidad, entonces, que la ruptura del ciclo de crecimiento en América Latina sea aproximadamente coincidente con la crisis del fordismo a nivel mundial, así como con los intentos de reflote de las economías centrales a través de la integración de los mercados de los países en desarrollo.

De esta manera, el neoliberalismo —con antecedentes históricos en la filosofía económica emanada de un grupo de ideólogos conservadores europeos que en la década de 1930 buscaban rescatar y redefinir el liberalismo clásico— se implementa en América Latina. Su precursor fue el FMI, que, a través de sus "recomendaciones", impulsó la reducción del financiamiento estatal a todo lo que no estuviese vinculado a la reproducción del capital y en especial a lo destinado para fines sociales (Torres, 2001). En la práctica, esto supuso la puesta en marcha de una agresiva ofensiva del capital sobre el trabajo con el objetivo de recomponer una tasa de ganancia sustancialmente menguada.

Los planes de ajuste estructural determinaron la implementación de medidas neoliberales clásicas como la privatización extensiva de bienes, servicios y recursos nacionales; liberalización de precios de bienes y servicios; reducción de normativas destinadas a la fijación de salarios bajo el criterio de liberalización y flexibilización del mercado de trabajo; libertad de funcionamiento para el mercado del dinero, lo que conlleva incremento de las tasas de interés y liberalización de la prioridad cambiaria. Además, en el caso latinoamericano fueron incorporadas otras medidas como la reducción del déficit fiscal, con base en la disminución de la burocracia estatal; el incremento de precios a mercancías que habían sido hasta entonces subsidiadas (productos de primera necesidad componentes de las canastas básicas); congelación de salarios; incremento de tasas de interés buscando la generación de ahorro;

devaluaciones de moneda; y medidas de protección al capital extranjero para incentivar su inversión en esta parte del globo.

Todo esto fue desarrollado en dos etapas diferenciadas: en la década de 1980 se aplicaron las llamadas "reformas de primera generación" con criterios basados prioritariamente en el ajuste antiinflacionario —recorte del gasto público e incremento de tasas de interés—; en la década de 1990 tomaron cuerpo las transformaciones complementarias, conceptualizadas como "reformas de segunda generación"; éstas implicaron apertura comercial, privatizaciones y flexibilización del mercado de trabajo, bajo el paraguas del Consenso de Washington.

La aplicación de lo anteriormente expuesto produjo diversas consecuencias, entre las que destaca la reducción de los ingresos populares; esto generó un fuerte impacto en la capacidad de consumo de la población y agravó varias modalidades de sobreacumulación del capital (Katz, 2014). Todo ello en países subdesarrollados, donde el efecto del intercambio desigual y un insuficiente progreso tecnológico —cuyos logros son retenidos por los países del "centro"— mantienen las rentas de la periferia en un nivel extremadamente bajo (Prebisch, 2006).

Según datos de la CEPAL, entre 1980 y 2003 el desempleo abierto pasó de 7.2 a 11%, mientras en el mismo periodo el salario mínimo descendió en un promedio de 25% y la informalidad laboral creció 10 puntos (de 36 a 46%). En 2003, el 10% de la población —los más ricos— acaparó 48% del ingreso, en tanto el 10% más pobre tenía acceso a tan sólo 1.6% de dicha riqueza.

En el ámbito político, el neoliberalismo fue aplicado por la mayoría de las dictaduras militares de la región. De hecho, el paradigma se había forjado anticipadamente en el Chile pinochetista, bajo el asesoramiento de Friedrich Hayek (quien visitó Chile en noviembre de 1977 y abril de 1981) y especialmente de Milton Friedman, que posicionaría el término "milagro de Chile" para referenciar la obra de sus discípulos en el Cono Sur. Con posterioridad, ese mismo modelo neoliberal sería institucionalizado por los gobiernos constitucionales que sucedieron a estas criminales dictaduras.

El presente siglo nació marcado por la crisis del neoliberalismo en el subcontinente. El Estado había quedado reducido a su mínima

expresión, lo que implicó su incapacidad para planificar y priorizar inversiones. De igual manera se desmanteló la vieja industria local generada durante el periodo de sustitución de importaciones —lo que acentuó la dependencia de la región respecto a los mercados globales de *commodities*—, mientras que, en paralelo, las economías nacionales quedaron en situación de vulnerabilidad frente a un desregulado movimiento de capitales externos.

La crisis del neoliberalismo latinoamericano llevó a que de las doctrinas de ortodoxia fiscal y control sobre la deuda pública se transitase nuevamente hacia el endeudamiento externo, en tanto los recortes aplicados sobre el gasto público y la contracción de la capacidad adquisitiva de los trabajadores —con la consiguiente flexibilización del mercado laboral— no llevaron a incrementos significativos en materia de inversión.

En resumen, el neoliberalismo —más allá de lo que significó como agresión a la clase trabajadora, debilitamiento de las organizaciones obreras y desmantelamiento del Estado— también fue un fracaso como proyecto de las clases dominantes nacionales para expandir sus negocios, reforzar su base de acumulación y aumentar su presencia en el mercado mundial (Katz, 2004: 27).

El neoliberalismo no dinamizó la actividad económica ni incentivó el crecimiento económico. Los beneficios que generó para las clases dominantes se desarrollaron a corto plazo, limitándose a los resultados de las medidas de *shock* aplicadas de forma despiadada contra los trabajadores, lo que implicó cierto incremento de la tasa de explotación. Sin embargo, dicho beneficio fue exiguo, dado que la reducción del mercado interno y el deterioro de la capacidad adquisitiva de la población no permitieron el desarrollo de procesos de acumulación sostenida.

En paralelo, el desarrollo de resistencias sociales, en muchos casos parcialmente exitosas, que comenzaron a posicionar los cimientos que posibilitaron la llegada del actual ciclo progresista, fueron "determinantes a la hora de poner límites a esta ofensiva del capital" (*ibid.*). Fruto de ello se atenuará el discurso y las políticas neoliberales, reconociéndose de manera muy hipócrita ciertas "fallas del mercado", y admitiéndose la necesidad de la intervención del Estado en determinados ámbitos. En pocas palabras, el "reino

absoluto de la flexibilidad" (Bourdieu, 1998), mostraba ya los primeros signos de su fracaso.

En realidad, a mediados de la década de 1990 ya eran evidentes las insuficiencias en materia de resultados prácticos de las políticas neoliberales en América Latina. El propio John Williamson, economista británico reconocido por acuñar el término Consenso de Washington, en aquel momento economista jefe del Banco Mundial (con anterioridad se había desempeñado como consejero del FMI), empezó a advertir de la necesidad de actuar respecto al problema de la desigualdad y la distribución de la renta. Será a partir de entonces que el Banco Mundial pasa a argumentar la importancia del gasto público en forma de asistencialismo, con el objetivo de amortiguar los efectos del creciente incremento de la pobreza.

Es así que las mismas instituciones de Bretton Woods, impulsoras del modelo neoliberal en América Latina, señalan a su vez la necesidad de cierto fortalecimiento institucional como factor para menguar los efectos de sus políticas desreguladoras. La criminal argumentación de estos promotores del neoliberalismo se basó en que la explosión de la pobreza era el precio a pagar —como señala Pierre Bourdieu, el mercado provoca la muerte de unos y el éxito de otros— durante el llamado "periodo de transición", hasta que el modelo genere empleo.

Como indican en sus trabajos José Luis Coraggio y Natalia Quiroga, dicho fortalecimiento institucional se expresó principalmente como una profundización de la privatización y mercantilización de lo público.

> Un claro ejemplo de esto fue la creciente mercantilización y tercerización de la política social (con el Banco Mundial promoviendo la formación de nuevas ONG capacitadas para aplicar descentralizadamente y a menor costo los programas públicos) y el definitivo énfasis en políticas sociales asistencialistas, no universales, focalizadas en el alivio de la pobreza extrema, en particular sobre bases de compactación territorial lo que mostraba la guetización ya alcanzada de las sociedades urbanas. Esas políticas fueron formateadas con criterios de eficiencia que no ocultaban el interés extremo porque nuestros países siguieran pagando una deuda pública cuya ilegitimidad e inviabilidad no entraban en el imaginario de los autores de las agendas. Y mostraban la

> visión de los conductores de estos procesos de reforma: la economía es una esfera autónoma de la sociedad, que tiene sus propias reglas intocables, las propias del libre juego de fuerzas de un mercado plagado de asimetrías y falta de oportunidades. La política social tenía que aliviar los efectos considerados secundarios pero inevitables, del buen manejo de la economía. Se pudo decir que la mejor política social es una buena política macroeconómica. Qué sector de actividad debía crecer (o desaparecer) en cada país y región, lo indicaría el mercado, del mismo modo que el mercado iba a ser el regulador del grado básico de efectivización de los derechos humanos para cada persona, grupo o región (Coraggio y Quiroga, 2005: 67).

En definitiva, es en las zonas periféricas donde el despojo históricamente ha tenido su perfil más salvaje, convirtiéndose en condición para garantizar la continuidad de la reproducción ampliada en los territorios del centro (Amin, 1981). Por lo tanto, en América Latina se implementó el modelo neoliberal buscando establecer un modelo empresarial sobre las bases de eficiencia, eficacia y calidad, mientras en paralelo se pretendió alinear los intereses del capital nacional con los del capital transnacional o supranacional (Caicedo, 2014). Ello implicaba un vaciamiento de los roles del Estado en el marco del agotamiento de la "matriz nacional-popular estatista" (Garretón, 2003).

* * *

En América Latina, el "nuevo ciclo político progresista" llegó de la mano de una concatenación de triunfos electorales en diferentes países sudamericanos que representaron los anhelos de cambio existentes en estas sociedades.[1]

Esta etapa de reformas que en la mayoría de países de la región condujo al cambio de ciclo, situación que no se produjo en otros continentes periféricos al capitalismo central, es el resultado de que en América Latina el neoliberalismo fuera percibido como una agresión por la mayoría de los grupos sociales (Houtart, 2009). Esto produjo el desarrollo de resistencias antineoliberales que cuajaron

1 Este proceso tuvo su origen en Venezuela, cuando en diciembre de 1998 Hugo Chávez ganó por primera vez las elecciones con 60% de los votos.

en la construcción de movimientos sociales de nuevo tipo, y constituyeron una versión actualizada de lo que Orlando Fals-Borda (2005) llamó resistencias campesinas "antiseñoriales".

La heterogeneidad de proyectos "progresistas" establecidos en los diferentes países latinoamericanos, donde organizaciones autodefinidas de izquierda alcanzaron el poder, tiene su origen en las rutas políticas a partir de las cuales se ganaron las elecciones. En este sentido, no son iguales los procesos de Bolivia y Venezuela a los de Brasil y Uruguay, ni tampoco lo son el de Ecuador y Argentina respecto al de Nicaragua.

Es precisamente la hoja de ruta trazada para llegar al poder—con sus líneas rojas y aquiescencias—, la que implicará otra de las diferencias entre ellos: la presencia o no en sus gobiernos de representantes de sectores empresariales, de opciones políticas centro-conservadoras e incluso de opciones claramente reaccionarias, como es el caso de Brasil.

Sin embargo, existe un consenso generalizado que inclusive incorpora a determinados sectores del espectro político conservador: el nuevo "consenso posliberal" determina que el mercado por sí mismo no resuelve la pobreza ni las inestabilidades económicas. A partir de ahí hay un acuerdo sobre la necesidad de "más Estado" (Stolowicz, 2007).

Aquí empieza el problema, pues el capitalismo en general, e incluso el neoliberalismo en particular, no implica necesariamente el concepto de "Estado mínimo", sino que el Estado intervenga intensamente a favor del capital. Su tamaño —grande o pequeño— está en función de otras consideraciones más coyunturales. Este modelo de Estado, más allá de su tamaño, cumple un papel fundamental expropiatorio para transferir riqueza social desde la sociedad en general hacia el capital (privatizaciones, acceso a recursos naturales, política fiscal regresiva, generación de deuda pública, concesión de exenciones fiscales…); establece una estructura de relaciones entre capital y trabajo que beneficia al primero; y desde la superestructura articula las pautas que viabilizan política e ideológicamente su reproducción.

En este sentido, el llamado "retorno del Estado", con el consiguiente discurso del aumento del gasto social, se ha convertido en

una perversa variante del capitalismo regional camuflado bajo una tautológica invocación a soflamas antineoliberales, devolviendo al sistema económico capitalista la legitimidad a través de meras correcciones a los excesos descontrolados acaecidos durante su etapa neoliberal. Más allá de la articulación de políticas sociales que responden a criterios de protección social predefinidos de forma clásica como de "izquierdas" —en referencia a esas medidas que tienen un fuerte impacto en la conciencia colectiva popular y generan importante apoyo electoral—, no cuesta mucho encontrar políticas económicas claramente reaccionarias en la agenda posneoliberal de los llamados gobiernos progresistas.

Es difícil discutir que donde gobiernan —o han gobernado— los "progresistas" existe una mejora general de los niveles de vida de la población respecto a la anterior etapa neoliberal. Su explicación es múltiple, tiene que ver con un abanico de factores que engloban desde la etapa de bonanza económica vivida durante la llamada década dorada de los *commodities*, que dio la posibilidad de incrementar los subsidios y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, hasta el desarrollo de acciones contra la pobreza extrema, pasando por el incremento de la inversión social en salud y educación. A esto hay que sumar el rescate de prácticas republicanas abandonadas por el neoliberalismo, el reconocimiento institucional de la diversidad étnica, ciertos avances en materia de género, así como una larga lista de reformas normativas que no cabe abordar acá. Es este factor el que durante los años de bonanza reforzó la percepción de cambio y acumuló réditos electorales a favor de estos gobiernos entre los sectores sociales que históricamente habían sido olvidados y ahora fueron atendidos. Todo ello a pesar de que no se avanzase en cambios estructurales y el marco de intervención quedara reducido al asistencialismo, y a una focalización que permitió hacer frente con relativo éxito a una coyuntura crítica tanto social como políticamente.

Más allá de esto, un proyecto de izquierda debe orientarse a una redistribución radical de la riqueza, motivo por el cual la política social pasa a ser el eje fundamental de la política económica que propugna la igualdad. Sin embargo, ello no implica que la política social deba compensar los efectos de una política económica

desincronizada de la anterior que genere desigualdad. Pero, en la actualidad, estas diferencias fundamentales para un proyecto de izquierda quedan veladas por el hecho de que con las políticas sociales mejora el ingreso de los más pobres y en el muy corto plazo cambian los guarismos de la desigualdad. Este dato es usado para validar la idea de la "izquierda realmente existente" (*ibid.* : 363).

De esta manera, este confuso posneoliberalismo a nivel regional se implementa bajo dos componentes estratégicos esenciales: a) superación del modelo económico neoliberal con políticas de fuerte impacto simbólico en el imaginario colectivo, que permitieron la alteración de las "reglas de juego" en el campo político institucional (nuevas constituciones, reformas normativas en general y electorales en particular); y b) deslegitimación de los actores políticos protagónicos durante el periodo neoliberal, la vieja partidocracia, pero sin afectar en lo más mínimo a los verdaderos responsables del antiguo caos, es decir, sin tocar a los agentes del mercado y su matriz económica de acumulación.

La construcción de alternativas se vio limitada por el hecho de que estos gobiernos mantienen su dinámica política y radical-discursiva conviviendo con el poder de las élites económicas —bancos, grandes grupos de capitales nacionales, transnacionales extranjeras y el *agrobusiness*—, lo que implicó que la crisis hegemónica neoliberal deviniese en un modelo posneoliberal carente de proyecto anticapitalista.

Tras 17 años de comenzado el ciclo "progresista" en América Latina, estos gobiernos han demostrado su incapacidad para imaginar el fin del capitalismo.

> En consecuencia, dejó de preocuparse por el fin del capitalismo y, al contrario, centró su creatividad en desarrollar un *modus vivendi* con el capitalismo que permita minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista dominada por los principios del individualismo (versus comunidad), la competencia (versus reciprocidad) y la tasa de ganancia (versus complementariedad y solidaridad). La socialdemocracia, el keynesianismo, el Estado de bienestar y el Estado desarrollista de los años 60 del siglo pasado son las principales formas políticas de ese *modus vivendi* (De Sousa Santos, 2010: 25).

Y es desde esa perspectiva desde la cual, lo que Boaventura de Sousa llama el Estado-comunidad-ilusoria se encarna en un conjunto de reformas que pretende devolver alguna centralidad al Estado, pero sin comprometer la lealtad a la ortodoxia neoliberal internacional.

> El Estado-comunidad-ilusoria tiene una vocación política nacional-popular y transclasista. La "comunidad" reside en la capacidad del Estado para incorporar algunas demandas populares por vía de inversiones financieras y simbólico-ideológicas. La acción represiva del Estado asume, ella misma, una fachada simbólico-ideológica (la "seguridad ciudadana"). El carácter "ilusorio" reside en el sentido clasista del transclasismo. Las tareas de acumulación dejan de contraponerse a las tareas de legitimación para ser su espejo: el Estado convierte intereses privados en políticas públicas no porque sea "el comité de la burguesía", sino porque es autónomo en la defensa del bien común. Por otro lado, al denunciar las más arrogantes manifestaciones del poder clasista (satanizando la ostentación, los bonos y gratificaciones), el Estado hace que los fundamentos de este poder queden todavía más invisibles e intocados (*ibid*.: 67).

Para contrarrestar esta realidad, las políticas "progresistas" deberían haber priorizado —bajo el criterio de construir los factores objetivos y subjetivos que impulsen la lucha anticapitalista— la desmercantilización y despatriarcalización de la sociedad, la construcción de múltiples formas combinadas de poder popular, procesos de nacionalización paulatinos y la gestión obrera de las empresas, la economía social y solidaria, el empoderamiento de las organizaciones sociales de manera autónoma, la capacidad de lucha contra la alienación, los procesos comunitarios rurales y barriales, así como otros tantos referentes de políticas contrahegemónicas que lejos están del control institucional de la vida y el clientelismo político. Recordando a Gilles Deleuze, la izquierda no sería una ideología sino más bien una forma de percibir el mundo.

Ahora bien, el problema anterior deviene de la ilusión acerca del Estado neutral y mediador relativamente autónomo en el conflicto de clases. Sería Engels quien en 1878, en *Anti Dühring* definiría al Estado como un ente claramente posicionado: "El Estado mismo, cualquiera que sea su forma, es esencialmente una máquina capitalista,

es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal" (Engels, 2012: 303). Muchos años después Toni Negri retomaría la tesis actualizándola para el periodo actual:

> Tan es así que el análisis revolucionario del Estado del capital colectivo, del Estado planificador del desarrollo y la crisis, se despliega considerando, desde un punto de vista completamente empírico, la democracia como un residuo histórico y, por el contrario, el Estado contemporáneo como una máquina equipada para la planificación y la gestión de una creciente 'conflictividad' y, en cualquier caso, para el control y la previsión de los comportamientos políticos de las masas, siempre predispuesta a la provocación, a la anticipación política y/o terrorista contra éstas (Negri, 2003: 385).

Con base en las pautas anteriores, no queda otra opción que afirmar que la construcción de contrahegemonías, entendiéndolas como elementos para la construcción de la conciencia política autónoma en las diversas clases y sectores populares, es imposible desde el poder del Estado, dado que el cerebro capitalista se ha convertido en Estado y su legitimidad se basa en el poder de mando y la racionalidad productiva del desarrollo del capital.

Pero Negri va más allá, e indica que la legitimidad democrática del Estado pasó a tener su fundamento en la regla capitalista del desarrollo de la explotación, posicionando el concepto de libertad sólo dentro de un marco posible: el desarrollo capitalista. En su *Crítica del programa de Gotha* Marx afirmaría que "mientras exista el capital no habrá libertad".

En este sentido, el desarrollo de lógicas contrahegemónicas en América Latina debería conllevar la construcción de una conciencia popular transversalizada por una propuesta multicultural y plurinacional que ponga en cuestión el concepto colonial de Estado-nación, bajo la integración de perspectivas emancipadoras de clase, de pueblos y culturas ancestrales, y de género, sintonizando una propuesta libertaria que armonice equidad, "desarrollo" socioeconómico alternativo, recuperación del ámbito rural y defensa del entorno natural. Desde esta perspectiva, el concepto de contrahegemonía significa poner en cuestión los componentes sustantivos de la modernidad: el predominio de la razón científica, el pensamiento

ilustrado, el concepto de desarrollo y acumulación, así como nuestra relación de control y dominio sobre la naturaleza.

* * *

La reproducción de la fuerza de trabajo no sólo exige la reproducción de su calificación, sino también la reproducción de su sumisión a la ideología dominante —aceptación del orden establecido. Es así que el Estado combina dos mecanismos de control social: sus aparatos ideológicos (religioso, escolar, jurídico, familiar, sindical, político, de comunicación o cultural) y los represivos. En este sentido, cada grupo social está provisto de la ideología que conviene al rol que debe desarrollar en la sociedad de clases en la que vive: rol de explotado —conciencia profesional, moral, cívica, apolítica—, rol de agente de la explotación —capacidad de mando, capacidad de relacionarse—, rol de agente de la represión —saber mandar y obedecer sin discutir órdenes—, rol de profesional de la ideología —manipulación de las conciencias. Es de esta manera que la ideología pasa a ser el sistema de ideas y representaciones que domina al individuo y/o a un grupo social. Según Marx, la ideología es un bricolage imaginario que configura la historia de los individuos, que así producen materialmente su existencia.

Es desde ahí, desde donde Louis Althusser entiende que la ideología es una representación de la relación imaginaria (deformación imaginaria) de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Este filósofo estructuralista afirmaría que "la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, pero al mismo tiempo y de inmediato agregamos que la categoría de sujeto no es constitutiva de toda ideología sino sólo en tanto toda ideología tiene la función (que la define) de 'constituir' en sujetos a los individuos concretos" (Althusser, 1974: 139). Es decir, el funcionamiento de la ideología se da en un doble juego, ya que la ideología no es nada más que su funcionamiento en las formas materiales de la existencia de ese mismo funcionamiento. A esto, Ernesto Laclau añadiría que "los individuos, que son simples soportes de las estructuras, son transformados por la ideología en sujetos" (Laclau, 1978: 101), entendiendo que el mecanismo característico de esta inversión es

la interpelación. La especificidad del populismo como forma de la política es que es un discurso dicotómico que divide a la sociedad en dos ámbitos opuestos, que constituye al pueblo sobre la base de interpelar a los de abajo contra la clase dominante.

Así, el populismo se ha caracterizado por la conformación de nuevas organizaciones políticas que representaron *a priori* una opción transformadora pero con fundamentaciones ideológicas altamente flexibles, lo cual posibilitó su adaptación a diferentes escenarios con base en un adaptable discurso antiélite moldeable en función de los casos y coyunturas. Es desde esa perspectiva desde la cual puede entenderse por qué el populismo de tercera generación, o neopopulismo, tiene su arranque en referentes políticos del aperturismo económico y la liberalización de mercados (Carlos Menen, Alberto Fujimori, Carlos Salinas de Gortari o Fernando Collor de Melo); mientras los actuales (Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales, entre otros) volvieron a propugnar el discurso de la intervención del Estado como ente regulador y dinamizador de la economía. El populismo tiene más perfil político que económico, y aunque teniendo su origen en un conflicto real, sus líderes construyen una retórica antioligárquica que impacta en el imaginario social por su teórico desafío al *statu quo*, utilizando para ello redes clientelares a fin de legitimar su liderazgo a través de los votos (Machado, 2013).

> Los líderes neopopulistas, se presentan a la vez como personificación del orden, de la capacidad de gobernar y tomar decisiones, y como protectores paternales del pueblo, velando por sus representados, a quienes protegen del rigor de los economistas y los técnicos (que en muchos casos ellos mismos llevan al poder), y frente a un mundo descarnado e insensible a los sufrimientos humanos, a sociedades donde la competencia y desigualdades del mercado han ido agudizando y generalizando la sensación de incertidumbre e inseguridad personal. (Novaro, 1996: 144).

El populismo tiene como objetivo habitual obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su líder. En su última generación todo esto se desarrolla bajo el despliegue de

herramientas de gran dimensión mediática, lo que permite al populismo tener una amplia llegada sobre sus sociedades, que tienden a delegar su poder a modelos de Estado en que su líder lo ejerce dentro de un límite formalmente mal definido (Morlino, 1995).

En América Latina, bajo el discurso del socialismo del siglo XXI, este modelo queda plasmado en una lógica política de "tercera vía" (Machado, 2013), superadora de las viejas resistencias al modelo neoliberal y el conflicto de clases, adoptando políticas pragmáticas cuya legitimidad se sustenta bajo el discurso del retorno de un Estado fuerte para la protección y bienestar de la población. Se trata entonces de fortalecer la institucionalidad del Estado frente al empoderamiento desarrollado por la sociedad civil de antaño a través de los movimientos sociales, que en muchos casos llegaron incluso a ser antisistémicos, que articularon la resistencia contra el neoliberalismo.

De esta manera, el modelo relacional establecido entre el liderazgo populista y sus gobernados se transforma en una lógica de autoritarismo basado en el consenso, a pesar de que teóricos como Laclau quieran reconocer en ello cualidades de genuina democracia frente al marchitado modelo liberal pluralista. Habría que rescatar a Max Horkheimer, uno de los principales exponentes de la Teoría Crítica de la Escuela de Fránkfort, para entender que el Estado autoritario es un fenómeno sociológico originado tras circunstancias históricas en que surge la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Al respecto, en su obra estelar, Laclau llegará a afirmar que la razón populista es el equivalente a la razón política, entendiendo que lo fundamental en el liderazgo populista es que pueda establecer un orden estable y la homogenización de la sociedad: "la identificación con un significante vacío es la condición *sine qua non* de la emergencia de un pueblo" (Laclau, 2005: 204). Para Laclau ese "significante vacío" es una brecha que, debido a los actuales tiempos de crisis de representación, podría abrirse dentro del bloque hegemónico, como fruto de las tensiones generadas por la contrahegemonía. Sin embargo, la puesta en práctica con resultados exitosos de las tesis laclaunianas han conllevado a asociar el "significante vacío" con el nombre de un líder carismático propuesto como encarnación del sentir popular y voz del "pueblo". El modelo desarrollado a partir de entonces se

transforma en una nueva universalidad que pasa a tener parecidos con lo que teóricos más clásicos como Peter Wiles pretendieron asociar al Estado popular. El Estado popular es el Estado que se vuelve visible y sensible a su jefe, el Estado dotado de voluntad y de virtudes humanas, el Estado en el que corre no la linfa de la indiferencia y la neutralidad, sino la sangre del poder de la justicia. El pueblo y su jefe son las dos entidades del régimen (Wiles, 1998: 205).

Para Negri, Laclau significó una variante neokantiana de aquello que podría definirse como un socialismo postsoviético. Sería el propio Negri en su texto *Hegemonía: Gramsci, Togliatti, Laclau* quien recogería la siguiente y demoledora cita del brasileño Bruno Cava:

> Si hay una cosa evidente hoy cuando se consideran las formas actuales de la política es el desplazamiento del 'pueblo' con relación a las funciones de participación a las cuales había estado ligado por el derecho público moderno. En la situación que nos encontramos nosotros, el 'significante vacío' se vacía aún más, no adopta la multitud, pero es fagocitado por aquellos poderes fuertes que no tienen nada que ver con el pueblo, la nación y todos los otros conceptos alegres del vocabulario político de la modernidad (Negri, 2015: 4).

Analizando los actuales procesos y liderazgos progresistas existentes en América Latina, cabe rescatar la tesis sociológica de que el carisma "puede ser definido como una relación de poder fuertemente asimétrica entre un guía inspirado y una corte de seguidores que reconocen en él, y en su mensaje, la promesa y la realización anticipada de un orden nuevo, al cual ellos adhieren con una convicción más, o menos, intensa" (Boudon y Bourricaud, 1980: 78); y el hecho de que dicho carisma "se relaciona con temores colectivos de pueblos enteros, con estados de inseguridad radical de ansia generalizada" (Bobbio *et al.*, 1985: 219).

Cierto es que estos liderazgos carismáticos nacieron como respuesta a un modelo social y económico quebrado, y que gran parte de su legitimidad se basa en un actuar político que promueve la legitimidad del voto, es decir, revigorizan el modelo de democracia electoralista y plebiscitaria. Sin embargo, el modelo de mando carismático o caudillesco desarrollado históricamente en América Latina no ha sido ajeno a las experiencias autoritarias, que han

utilizado el papel del Estado como factor de integración nacional y el concepto de "patria" como elemento de homogeneización social. Esto ha propiciado —con todo lo que significa de trasfondo— y sostenido sobre la erosión del modelo democrático liberal burgués, un cíclico resurgir del hiperpresidencialismo y el clientelismo burocrático como ejes centrales del orden populista (satisfacción de necesidades a cambio de legitimidad del régimen).

Desde una visión crítica a este modelo se hace indispensable rescatar el aporte anticapitalista de Cornelius Castoriadis, como un intento de visibilizar diferenciadamente el proyecto emancipatorio de los dominados, que bajo el proyecto de autonomía buscan la articulación de nuevos objetivos políticos y nuevas aptitudes humanas. Para ello, la democracia directa y radical —donde el concepto de lo representativo entra en cuestión— pasa a ser fundamental y se transforma en el eje de lucha contra cualquier intento de racionalización capitalista y conformismo instaurado (Vera, 2010).

En la actualidad, y tras la quiebra del modelo neoliberal en la región, al igual que lo acontecido en el periodo nacional-desarrollista iniciado tras los efectos de la depresión de la década de 1930, la reacción de las élites capitalistas y su expresión política instalada en la mayoría de los gobiernos progresistas ha significado un aumento de su dependencia con relación a los países centrales, significando a su vez un incremento de la sujeción de las clases subalternas bajo el establecimiento de sofisticados Estados de control.

Si el viejo desarrollismo no era en realidad más que una teoría del crecimiento económico que se mantuvo sujeta a dimensiones economicistas y de medidas cuantitativas insuperables (Negri y Cocco, 2006: 50), los actuales procesos progresistas no han dejado de ser ilusorios respecto a combinar crecimiento económico —en el marco del desarrollo capitalista subordinado— y la emancipación social.

En la actualidad, el retorno del Estado y la soberanía nacional han sido entendidas por los sectores institucionalizados de la izquierda como el principal eje de resistencia a la globalización neoliberal. En este sentido, el Estado nación y la configuración de un bloque regional no necesariamente anticapitalista se convirtieron en la única herramienta entendible para intentar confrontar al poder de las grandes transnacionales en el actual mundo globalizado.

No obstante, y más allá del discutible éxito de tales objetivos —visto el re-empoderamiento de las transnacionales extractivas en la región en los actuales momentos de reflujo en los precios de los *commodities*—, la construcción de condiciones para el desarrollo autónomo del capital periférico tiene escasa relación respecto a la emancipación social y la libertad.

> La distinción terminológica entre emancipación y libertad tiene aquí un valor crucial: mientras que la emancipación lucha por la libertad de la identidad: la libertad de ser quien verdaderamente (ya) eras, la liberación apunta a la libertad de la autodeterminación y autotransformación: la libertad de determinar lo que (nunca habías sido y) puedes devenir (Negri y Hardt, 2009: 331).

El actual neodesarrollismo latinoamericano, subordinado a un proyecto nacional que conlleva un pacto de perfil interclasista, determina como sujeto político principal al Estado, subordinando a la ciudadanía y el tejido social organizado que de ésta emana a la disciplina y el control del poder institucional. En definitiva, los llamados gobiernos progresistas de América Latina han limitado su visión al control del poder y su relación desde este espacio con el capital en aras de cierto control sobre el mercado, buscando la modernización de sus economías nacionales y sociedades bajo el altanero discurso de la "segunda independencia".

Lo anterior implica el desarrollo de un intento de racionalidad instrumental —calculabilidad y control de los procesos sociales—, lo que conlleva implementación del progreso técnico y tecnológico por parte de la racionalidad científica, así como la instrumentalización de los sujetos en aras a un fin determinado que podemos definir como progreso (dominación y explotación de la naturaleza y del ser humano por el ser humano). Sin embargo, estas lógicas de intervención ignoran que tenemos un *sistema quo* escasamente racional que necesita una transformación radical de su sistema económico y del sistema más vasto en el que habita.

En opinión de Jean Baudrillard, la modernidad ha dado un giro fatal, transformándose en una farsa. Pero lo más triste de esto es que los pueblos sometidos, en vez de diferenciarse de sus dominadores y proceder con su propia revancha liberadora, se han dedicado a

intentar parecérseles y hasta exagerar de forma grotesca su modelo, en sintonía con el aserto de Frantz Fanon, "piel negra y máscaras blancas…"

* * *

Como decíamos con anterioridad, el actual neodesarrollismo implementado en América Latina por los llamados gobiernos progresistas no es más que el viejo desarrollismo de los años treinta, modernizado con un nuevo *look* acorde al presente siglo.

Si el viejo desarrollismo latinoamericano vino a significar ciertos niveles de industrialización, la consolidación de las relaciones capitalistas en el ámbito rural, la introducción de las transnacionales extractivas en la explotación de los recursos naturales de nuestros países y la "modernización" del mercado laboral, con la correspondiente inserción del sector financiero en el mercado productivo y de consumo; el neodesarrollismo actual se trata de lo mismo pero desarrollando esto que se ha venido a denominar "competitividad sistémica" (Leiva, 2008): énfasis en la innovación como factor pretendidamente central del desarrollo económico, el desarrollo de una cultura emprendedora capitalista, la flexibilización del sistema productivo, la formación del capital humano, la dotación y modernización de infraestructuras, así como el desarrollo de redes colaborativas en aras de la innovación, y apoyadas por diversas instituciones (academia y Estado), que buscan una nueva forma de institucionalidad con capacidad de fomentarlas.

En el fondo, la lógica neodesarrollista latinoamericana puede resumirse en: aplicación de políticas económicas heterodoxas con una intervención protagónica del Estado que permite disimular con pragmatismo su favoritismo hacia los capitalistas (Katz, 2014), retomando con escaso éxito la idea de industrialización como prioridad en las economías intermedias y promoviendo paralelamente alianzas con el *agrobusiness* bajo la lógica de lograr mayor rentabilidad en el agro. En paralelo se pretende establecer acuerdos con transnacionales extranjeras buscando reducir la brecha tecnológica e intentando imitar el proceso protagonizado por los cuatro "tigres asiáticos" (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán),

que entre 1960 y 1990 mantuvieron altas tasas de crecimiento e industrialización, a costa del subsidio estatal, la moderación salarial, la estabilidad social y la implicación de los trabajadores con la productividad.

Para financiar lo anteriormente descrito y emerger del subdesarrollo, esta nueva modalidad de capitalismo de Estado ha buscado mediante el neoextractivismo —orientación de la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza con papel protagónico del Estado— el incremento de su renta extractivista y ha desarrollado una mayor fiscalidad. Como señala Katz, "no hay mercados fuertes sin Estados fuertes".

Es así que el desarrollo económico queda secuestrado en la prisión de la modernización y el progreso, fundamentado en un modelo de organización cuyo principio y fin se basa en la expansión de la lógica de acumulación y ganancia. Siguiendo con la lectura de Katz, "el neodesarrollismo es más afín a la CEPAL tecnocrática que al pensamiento crítico y presenta más continuidades que rupturas con el neoliberalismo" (*ibid.*). De esta manera se trata de ignorar que bajo la égida del capitalismo global, los nuevos países que buscan instalarse como competidores activos en el mercado mundial sólo se posicionarán en tal esfera si son capaces de succionar una alta tasa de plusvalía a sus trabajadores.

Si bien es cierto que han existido países de la periferia más cercana al centro que, mediante dinámicas de desarrollo tardocapitalista, han conseguido ocupar posiciones en el mercado mundial a costa de viejas potencias en declive, la teoría clásica marxista del desarrollo desigual y combinado pone en discusión que esta regla pueda ser generalizada.

> Las leyes de la historia no tienen nada de común con el esquematismo pedantesco. El desarrollo desigual, que es la ley más general del proceso histórico, no se nos revela, en parte alguna, con la evidencia y la complejidad con que la patentiza el destino de los países atrasados. Azotados por el látigo de las necesidades materiales, los países atrasados se ven obligados a avanzar a saltos. De esta ley universal del desarrollo desigual de la cultura se deriva otra que, a falta de nombre más adecuado, calificaremos de ley de desarrollo combinado, aludiendo a la aproximación de las distintas etapas del camino y a la confusión

> de distintas fases, a la amalgama de formas arcaicas y modernas. Sin acudir a esta ley, enfocada, naturalmente, en la integridad de su contenido material, sería imposible comprender la historia de Rusia ni la de ningún otro país de avance cultural rezagado, cualquiera que sea su grado (Trotsky, 1997: 15).

El actual encantamiento latinoamericano por los procesos de desarrollo económico surgidos en la segunda mitad del siglo pasado en el sudeste asiático, impide comprender este tipo de contradicción e ignora aquello que hace más de siglo y medio Marx sentenció: el mercado mundial es el árbitro último de la sociedad capitalista. Cabe indicar al respecto que las cadenas globales de valor cumplen un rol fundamental en la división internacional del trabajo y que, coordinadas por las empresas "bandera" del capitalismo global, tienen un fuerte impacto en el desarrollo económico de los países periféricos, que entran en éstas como subcontratados para tareas específicas.

El rápido crecimiento económico de los países del sudeste asiático está directamente relacionado a su inserción económica con los países desarrollados mediante las cadenas globales de valor, pero lo que olvidan los planificadores y estrategas institucionales latinoamericanos es que el apoyo de las transnacionales líderes en cada uno de los sectores de estas cadenas depende de que tales proyectos mejoren las capacidades de dichas corporaciones en los países en desarrollo, es decir, depende de que se incrementen sus ganancias globales.

En resumen, las transnacionales líderes se reservan las decisiones más importantes de las cadenas, que pueden incluir condiciones relativas a las excepciones fiscales en los países en los cuales se instalan, condiciones laborales de precarización y salarios bajos, o incluso no permitir el desarrollo de las firmas subordinadas, es decir, minimización de costos y maximización de utilidades a nivel global. Si bien es cierto que los países que llegan tarde al mercado global pueden desplazar a países que se desarrollaron primero, la *intelligentsia* institucional busca consciente o inconscientemente ignorar que bajo ese modelo alguien debe pagar los costos de dicho "éxito" económico. Como diría James Carville, asesor del Partido Demócrata en la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992: "¡Es la economía, estúpido!"

Ahora bien, en el marco de la emergencia de un nuevo orden mundial multipolar, los países del "progresismo" latinoamericano han intentado definir un modelo propio de desarrollo basado en combinar protagonismo estatal con economía de mercado. Es decir, se intentó basar la agenda posneoliberal en la expansión de políticas sociales misturada con la articulación del mercado interno sin tocar la matriz de acumulación heredada del modelo neoliberal anteriormente vigente. El modelo no es nuevo, y tiene que ver con una reedición latinoamericana de aquello que se teorizó en la obra T*eoría general del empleo, el interés y el dinero*[2] como respuesta a la Gran Depresión de 1929 por parte del autor de la frase: "Yo puedo estar influido por lo que estimo que es justicia y buen sentido, pero la lucha de clases me encontrará del lado de la burguesía educada".[3]

El método tuvo un impacto positivo en la región respecto a sus indicadores socioeconómicos, lo cual no puede ser desvinculado de las transformaciones habidas en el mapa del poder económico global. El macro crecimiento de la economía china durante más de tres décadas (crecimiento anual medio en el periodo 1980-1990: 10.2%; en el periodo 1990-2000: 10.6%; y en el periodo 2000-2006: 9.8%) significó la transformación de la tendencia estructural en la evolución de precios de las materias primas que exporta en el mercado global de *commodities*. Entre 2002 y 2011, el índice de precios de intercambio de bienes y servicios exportados por América Latina se incrementó 37%, impulsado por un aumento de los precios en los productos exportados: 303% en el caso de la energía, 143% en el de los alimentos y 505% en el de los minerales (Araníbar y Rodríguez, 2013: 26). Según datos de la CEPAL, la evolución del valor de las exportaciones latinoamericanas ha mostrado un crecimiento exponencial en las últimas tres décadas, pasando de 19 000 millones de dólares en 1980 a 340 000 millones en el año 2000, llegando a un billón de dólares a comienzos de la presente década.

En definitiva, el modelo de desarrollo latinoamericano ha mantenido e incluso agudizado su dependiente inserción internacional

2 En 1936, John Maynard Keynes publicó su obra *Teoría general del empleo, el interés y el dinero*, centrando su análisis en las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos.

3 Esta cita de Keynes es recogida de su conferencia "¿Soy un liberal?", que forma parte de una compilación de textos publicada en 2009 en el libro *Ensayos de persuasión* por la Editorial Síntesis.

como proveedor de materias primas, con sus consiguientes impactos sociales y ambientales, a pesar de que el Estado haya logrado mayor legitimación que antaño mediante la redistribución de parte de los excedentes generados por el modelo neoextractivista de explotación de productos primarios.

La vulnerabilidad de este tipo de economías —subordinadas a las fluctuaciones erráticas de los mercados globales— es extrema y abordaremos sus implicaciones políticas más adelante. En todo caso, la lógica neodesarrollista de los actuales gobiernos latinoamericanos se ve incluso frenada por los procesos de reprimarización de sus economías, pues los indicadores muestran una ralentización del crecimiento productivo-industrial (Actis y Zelicovich, 2012).

Los gobiernos progresistas de América Latina han entendido el neoextractivismo como un mecanismo por el cual capitalizar al Estado, buscando mantener la implementación de políticas sociales y la transformación de la matriz productiva de sus diferentes países en aras de buscar un supuesto desarrollo endógeno. Quienes defienden el modelo extractivo lo entienden como una etapa de transición, periodo en el que, más allá de satisfacerse las necesidades inmediatas de la población, se debe acumular el nivel de riqueza y las capacidades científico-intelectuales para plantear su posterior superación.

> Se sale del extractivismo, utilizando temporalmente el extractivismo, para crear las condiciones culturales, organizativas y materiales de una población que salte a la economía del conocimiento […] vamos a seguir produciendo porque hay que satisfacer las necesidades materiales de la gente pero, a la vez, iremos creando las condiciones para un reencuentro con la naturaleza, rescatando la tradición indígena (García Linera, 2015).

Pero lo que parecen ignorar el vicepresidente boliviano y otros apólogos de la economía fácil es que estos procesos extractivistas se caracterizan por ser economías de enclave; no generan actividades económicas nuevas a través del encadenamiento productivo ni se integran al mercado local, orientando la explotación de recursos naturales hacia las necesidades del mercado global, teniendo una vida que no supera los 30 años debido al agotamiento de recursos o

de la propia tierra que explotan, lo que genera fuertes impactos de carácter multidisciplinar en los territorios y comunidades afectadas.

> En términos más generales, la visión "eldoradista", promovida por los gobiernos progresistas más radicales (Bolivia, Venezuela y Ecuador) aparece hoy asociada a la acción del Estado (productor y relativamente regulador) y a una batería de políticas sociales, dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista (petróleo y gas, sobre todo). Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de ciertas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado nacional, el cual se ha vuelto a erigir como un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de gobernanza mundial, que tienen por base la consolidación de una nueva institucionalidad basada en marcos supranacionales o metareguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devenga un "megaactor", o a que su intervención garantice cambios de fondo. Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y otros actores), pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones por parte de las comunidades y poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos (Svampa, 2012: 31).

Una de las características fundamentales del neoextractivismo progresista latinoamericano es que sus gobiernos carecen —intencionadamente o no— de una dimensión real del impacto social y ambiental del modelo, limitando sus argumentaciones a un ámbito economicista sobre el porcentaje de apropiación de la renta que éste genera. Es por ello, que este neoextractivismo progresista que Maristella Svampa llama muy acertadamente "consenso de los *commodities*" conlleva en el fondo muy pocas diferencias respecto al extractivismo clásico.

Hablamos entonces de la permanencia de la primacía del patrón productivo primario exportador en la región, lo que en países como Brasil ha significado incluso un fenómeno de desindustrialización

temprana (Salama, 2012). Lo anterior viene a significar también un proceso de aceleración de lógicas vinculadas a la acumulación por desposesión (Harvey, 2014), produciendo despojo, transformación violenta de las formas tradicionales de vida en las comunidades directamente afectadas, desplazamiento de sectores campesinos e indígenas de sus territorios históricos, militarización, criminalización de la protesta social y violencia estatal y paraestatal. Si bien hace ya siglos que los bienes naturales de América Latina, en toda su dimensión, fueron incorporados al sistema mundo capitalista como bienes destinados a su explotación para la retroalimentación del capitalismo global (Composto, 2012), son los gobiernos progresistas del subcontinente los que están agudizando esta lógica de la modernidad/colonialidad.

Entendiendo que los procesos de desposesión forman parte y son intrínsecos a la lógica de la acumulación del capital —hoy se hace difícil considerar la existencia de zonas no mercantilizadas—, a la par que en la actualidad la producción de excedentes desborda fronteras para la incorporación de nuevos territorios y mercados futuros (entre 1857 y 1858 Marx escribiría en los *Grundisse*, "la idea de crear el mercado mundial está directamente en la idea misma del capital"), ambas cuestiones pasan a ser claramente visibles en el modelo de desarrollo neoextractivista como un campo heterogéneo de articulaciones (Gago y Mezzadra, 2015). El sistema mundo es un todo, donde lo hegemónico y lo subordinado no son el fruto de una diferencia de etapas (Composto, 2012) sino de la posición que ocupan al interior de una misma estructura económica global.

Queda claro entonces que el discurso neodesarrollista del progresismo institucional latinoamericano tiene poco que ver con la superación del capitalismo, pues difícilmente se puede entender que la vía para la superación del modelo capitalista sea la retroalimentación del capitalismo global. Mirando hacia atrás, ya en 1955, en su obra *La sociedad sana,* Erich Fromm cuestionaría a aquellos analistas que parten de la premisa de que el capitalismo, reformado o no, puede llegar a ser racional, y que la tarea principal del individuo consiste en adaptarse a sus requisitos fundamentales. Fromm indicaba que, para que la gente pueda vivir productivamente de forma sana y en paz, el capitalismo debía desaparecer. Las tesis de

Fromm pretendían rescatar aquella de Marx por la que se entiende al capitalismo como una forma de vida atrofiadora de la personalidad humana, tesis sobre la cual el pensador alemán planteó como objetivo del socialismo la introducción del dominio de la razón en todas las actividades humanas. Desde ese atrevimiento, Marx afirmaría que la eliminación de la irracionalidad en las fuerzas productivas de la economía debería conllevar las condiciones para reducir toda la coacción del gobierno sobre las asociaciones y actos de los individuos, lo que dicho en otras palabras y para sorpresa de los actuales planificadores progresistas y la intelectualidad afín al nuevo poder, vendría a significar la disolución del Estado.

## Brasil: Lo que muestra la corrupción

La crisis política y económica que atraviesa Brasil, y sobre todo la Operación Lava Jato,[4] que investiga la corrupción en la estatal Petrobras, de la que participan altos cargos de la estatal, políticos y empresarios, han conseguido desnudar el papel que juega el control de las instituciones estatales en la formación de una camada de nuevos ricos que conforman una burguesía emergente, en alianza con un sector de la burguesía tradicional.

La investigación del Ministerio Público determinó que, entre 2004 y 2012 fueron desviados alrededor de 10 mil millones de reales de Petrobras, unos 4 mil millones de dólares, para beneficio de partidos políticos como el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Popular (PP) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Los tres integran la base de apoyo de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esos desvíos favorecieron también a las principales constructoras del país (Camargo Corrêa, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, OAS, Mendes Junior y Engevix, entre otras), que consiguieron jugosos contratos con la estatal para la realización de grandes obras. Finalmente, esos dineros beneficiaron a intermediarios, altos cargos de Petrobras y los partidos involucrados.

Como consecuencia de la Operación Lava Jato, hasta noviembre de 2015 había más de cien personas encarceladas y más de 75

4 "Lava Jato", textualmente lavado de autos, en relación con el lavado de dinero.

condenadas, pero las cifras tienden a crecer. Las investigaciones muestran la existencia de una triple alianza: empresas multinacionales brasileñas, empresa estatal de petróleo y partidos políticos. Esa alianza nació antes de la llegada del PT al gobierno, hacia la segunda mitad de la década de 1990, cuando gobernaba Fernando Henrique Cardoso, profundizándose a medida que Petrobras ampliaba considerablemente sus inversiones y el Estado recuperaba parte del control perdido durante el periodo neoliberal. Veamos cómo trabaja cada uno de los actores.

Petrobras llegó a ser la segunda petrolera del mundo, luego de su fabulosa capitalización impulsada por el gobierno del PT en septiembre de 2010. Fue la mayor capitalización de una empresa en la historia, recaudando 72 000 millones de dólares, con lo que el valor de mercado de Petrobras subió a 283 000 millones, sólo detrás de la estadounidense Exxon. Con esa operación el Estado pasó a controlar más de 50% de las acciones. Fue el momento de mayor gloria de la estatal, que previó inversiones de 224 000 millones de dólares entre 2010 y 2014, para llegar a 2020 como una de las cinco mayores petroleras del mundo.

Desde el lado empresarial, los cuatro grandes grupos implicados en la Operación Lava Jato (Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y OAS) emplean nada menos que 500 000 trabajadores y llegaron a facturar sólo en el área de la construcción unos 15 000 millones de dólares anuales por más de 300 contratos, de los cuales la mitad son con el Estado. Esos grupos son responsables de gran parte de la construcción de obras de infraestructura (desde hidroeléctricas y puertos hasta carreteras y aeropuertos). Una de las principales inversoras ha sido la estatal Petrobras, que necesita ampliar puertos, construir barcos, sondas y plataformas de extracción de petróleo, llegando a ser la primera petrolera del mundo en inversiones.

Según los testimonios recogidos por el Ministerio Público, "las constructoras se reunían y decidían previamente quién ejecutaría cada una de las obras ofrecidas por el poder público" (Carta Capital, 2014). Al valor de las obras le sumaban un porcentaje que pasaba directamente a los funcionarios de Petrobras que adjudicaban las obras y a los partidos políticos a los que pertenecían, a

través de "empresas consultoras" que se encargaban del lavado. Se trataba de un "club" dominado por más de 15 grandes empresas de la construcción que escogían las obras según el ramo de actuación que les conviniera. Al parecer, el mismo esquema se utiliza en otras empresas estatales que aún no han sido investigadas.

Por el lado de los empresarios, la forma de actuación parece bastante tradicional. Marcelo Odebrecht, en prisión como presidente del conglomerado Organización Odebrecht, es nieto de Norberto Odebrecht, fundador de la empresa en 1944. De la mano de Marcelo, cuya fortuna personal se estima en 14 000 millones de reales, la empresa llegó a ser una de las cinco mayores de Brasil, encontrándose entre las más importantes constructoras de América Latina. El plan estratégico de los gobiernos del PT consistió en promover la expansión internacional de las empresas brasileñas con apoyo financiero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), en su momento el mayor banco de fomento del mundo, para elevar al país al rango de *global player,* convirtiéndolo en una de las principales potencias emergentes. Se trata de la alianza entre el poder político y un puñado de empresas elegidas por el gobierno para ser potenciadas y auparse junto a ellas en el escenario global. Además de las constructoras, beneficiadas con el proyecto IIRSA para la construcción de la infraestructura para la integración regional, aparecen empresas de la alimentación (los frigoríficos JBS y Brasil Foods), así como los grupos Votorantim y Gerdau, entre los más destacados. Como suele suceder, las grandes empresas sólo prosperan con apoyo estatal, algo que en Brasil comenzó durante el primer gobierno de Getúlio Vargas en la década de 1930.

Odebrecht es un caso particular, ya que opera en la estratégica área de la defensa, una de las prioridades de los gobiernos del PT. En efecto, Odebrecht ha creado un área de Defensa y Tecnología que participa en el mayor programa diseñado por la Estrategia Nacional de Defensa y las fuerzas armadas: el programa de submarinos, la base naval y el astillero de la Marina en Itaguaí (Rio de Janeiro), donde se construyen cuatro submarinos convencionales y el primer submarino nuclear brasileño. La empresa Itaguaí Construcciones Navales está formada por Odebrecht y la francesa DCNS y es la encargada de la transferencia de tecnología que está propiciando la

independencia tecnológica para la construcción de los submarinos que defenderán los yacimientos de petróleo del mar.

Pero el aspecto central para entender la emergencia de una nueva burguesía de gestores bajo los gobiernos del PT es seguir los vínculos personales de los altos cargos de la petrolera, el gobierno y el partido. Se trata de relaciones estrechas entre personas que alcanzaron los escalones más altos de las instituciones estatales (gobiernos federal y estatal o empresas públicas), que permiten descifrar qué intereses defienden y cómo se desempeñan. Proponemos observar la trayectoria de dos típicos gestores del capital, un funcionario de carrera de Petrobras "capturado" por el PT y un trabajador bancario de larga trayectoria en ese partido.

En Petrobras, los cargos de directores son sugeridos por los partidos, como en todas las empresas estatales. Renato Duque fue elegido por el PT para ocupar la dirección de Servicios, así como Nestor Cerveró lo fue por el PMDB para la dirección Internacional y Paulo Roberto Costa por el PP para la dirección de Abastecimiento.[5] Cada uno de esos directores terminó favoreciendo al partido que lo nominó para el cargo, desviando fondos de la empresa para las campañas electorales.

El ingeniero Renato Duque, especializado en ingeniería del petróleo en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, ingresó a Petrobras en 1978. Luego de pasar por diferentes secciones ingresó al área de contratos. En 2003 fue ascendido a director, luego de 25 años en la empresa. Se desempeñó como director de plataformas flotantes, superintendente de perforación en la Cuenca de Campos, gerente de contratos de perforación y de recursos humanos, y también dirigió la división de ingeniería y tecnología. De su firma dependían acuerdos millonarios con empresas nacionales y extranjeras.

Recién se afilió al PT cuando Lula llegó al gobierno, en 2003, siendo reclutado por Silvio Pereira, entonces secretario general, con el visto bueno de José Dirceu (uno de los hombres duros de las campañas electorales de Lula, que tuvo que renunciar como jefe del gabinete civil de la presidencia de la República por sus vinculaciones con la trama corrupta conocida como *mensalão*), quienes lo avalaron para llegar a la dirección de Servicios (Istoé, 2014). Antes

5 PMDB: Partido del Movimiento Democrático Brasileño. PP: Partido Popular. Ambos son aliados del gobierno.

de ser detenido vivía en un ático dúplex en Barra de Tijuca, un barrio de la burguesía en la zona sur de Rio de Janeiro, valorado en 4.5 millones de reales (más de un millón de dólares). Compró dos comercios de alto nivel y construyó una casa de verano en la ciudad turística de Penedo. Invirtió en la compra de joyas y tenía 3.2 millones en su cuenta bancaria, que fueron bloqueados por el Banco Central. Su patrimonio supera los 15 millones de reales, a lo que deben sumarse los depósitos en cuentas bancarias en Suiza fruto del desvío de 3% en los contratos, de los cuales 2% iba al partido. Los investigadores hacen un cálculo simple: si Pedro Barusco, un gerente de Petrobras situado un escalón por debajo de Duque, se comprometió a devolver 250 millones de reales, puede imaginarse cuánto ha podido amasar el jefe. Un razonamiento similar se puede hacer para calcular los desvíos realizados en otras áreas del Estado.

La investigación demostró que Duque y Barusco recibieron una propina de 12 millones de reales en un solo contrato con Camargo Corrêa. En marzo de 2010, el director de Servicios fue homenajeado con el título de "ciudadano de Rio de Janeiro" en la Asamblea Legislativa del estado, a instancias del diputado Gilberto Palmares del PT. Pero en febrero de 2012, Graça Foster asumió la presidencia de Petrobras, decidiendo "despolitizarla" y prescindir de Duque.

En ese momento, el ex director de Servicios abrió la empresa D3TM Consultoría, a través de la cual recibía propinas de las empresas a las que ayudaba a ganar contratos con Petrobras. Según las denuncias habría recibido hasta 50 millones por la compra de sondas para el Complejo Petroquímico de Rio de Janeiro. En los últimos años de su carrera Duque se convirtió en amigo íntimo del tesorero del PT, João Vaccari Neto, con el que almorzaba en restaurantes exclusivos de São Paulo y Rio de Janeiro. Vaccari fue acusado de desviar 4.2 millones de reales a las arcas del PT, dinero que le fue entregado por Renato Duque.

El segundo caso es el del empleado bancario y sindicalista Vaccari Neto, quien ascendió al cargo de tesorero del PT luego de una larga carrera política por contar con la confianza personal de Lula. Antes fue presidente de la Cooperativa Habitacional de los Bancarios de São Paulo (Bancoop) y miembro del Consejo de Administración de Itaipú. La cooperativa fue fundada en 1996 por Ricardo

Berzoini, presidente del PT y luego ministro en el gobierno de Lula. Entre 2002 y 2004 Bancoop desvió fondos al PT para financiar su campaña electoral.

Bancoop llegó a tener más de 15 mil cooperativistas y fue una de las más importantes constructoras de viviendas de São Paulo, pero tuvo un déficit de más de 100 millones de reales a pesar de contar con apoyos financieros de los fondos de pensiones vinculados a las empresas y la banca estatales. La cooperativa colapsó y defraudó a muchos cooperativistas, lo que llevó a la justicia a exigir que los directivos indemnizaran a los afectados que reclamaron por los daños sufridos.

La trayectoria de Vaccari es similar a la de cientos de empleados bancarios afiliados al sindicato de la Central Única dos Trabalhadores (CUT), quienes inician una carrera política que los lleva a situarse en lugares estratégicos desde el punto de vista de la acumulación de capital, como los fondos de pensiones y las grandes empresas estatales o incluso privadas. Los fondos de pensiones de tres grandes estatales (Banco do Brasil, Petrobras y Caixa Económica Federal) controlan buena parte de las principales empresas brasileñas, ya sea de forma directa por integrar los consejos de administración o a través del BNDES, cuyo consejo de administración está también integrado por sindicalistas (Zibechi, 2012). Los sindicalistas provenientes de estas empresas ocupan puestos claves en los gobiernos del PT y son mayoría en los escalones más altos de los ministerios.

El 21 de septiembre de 2015, Duque y Vaccari fueron condenados a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, por "corrupción pasiva y lavado de dinero" en la investigación de la Operación Lava Jato. Ambos representan la alianza entre los altos cargos de la empresa estatal y el partido de gobierno. Para completar el círculo debe considerarse que su poder y su forma de vida son posibles gracias a los cargos que ocupan y a la alianza que sellaron con un sector de la burguesía, al que favorecen con contratos y del que se benefician. Las grandes constructoras financian buena parte de las campañas electorales, al punto que en las elecciones de 2010, 54% de los parlamentarios fueron electos con el apoyo de un puñado de empresas hoy investigadas por corrupción (Zibechi, 2012: 40).

Existen otras lecturas de la crisis brasileña que enfatizan en la

conspiración de la derecha y los Estados Unidos para derribar al gobierno del PT. El embajador Samuel Pinheiro Guimarães, ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno de Lula, enfatiza en la existencia de una ofensiva conservadora que busca "destruir la ingeniería de la construcción, donde se encuentra el capital nacional" con el objetivo de "preparar la destrucción de organismos del Estado como Petrobras, el BNDES, la Caixa Económica y Eletrobrás, entre otras" (Pinheiro, 2015). En ese sentido debe considerarse que el ex candidato a la presidencia por la socialdemocracia (PSDB), José Serra, quiere eliminar la exigencia de que Petrobras tenga una participación mínima de 30% en todas las inversiones de las enormes reservas en las costas brasileñas.

Según Pinheiro Guimarães, la crisis del sistema judicial forma parte de la crisis institucional que atraviesa el país. En su opinión, la Policía Federal actúa contra los acusados con extrema parcialidad, de forma mediática, creando en la sociedad la presunción de alta peligrosidad de los individuos que arresta para la investigación y arrogándose la figura de poder independiente del Estado. Con base en declaraciones del presidente de entidades de la Policía Federal en el parlamento, surge que la institución "recibe recursos regularmente de la CIA, del FBI y de la DEA, por un monto de 10 millones de dólares anuales, depositados directamente en las cuentas individuales de policías federales" (*ibid.*).

Las fuerzas armadas coinciden con esta apreciación. Un editorial de la página Defesanet, a raíz de la detención del vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, inspirador y ejecutor del programa nuclear de la Marina, destaca la injerencia extranjera para debilitar el sector de la defensa. La página suele reflejar las opiniones de sectores de las fuerzas armadas y asegura su apoyo al detenido "aun ante la posibilidad de que haya cometido contravenciones", porque representa "un ataque al único proyecto estratégico brasileño que realmente busca elevar varios escalones a la nación" (Defesanet, 2015).

Existe además una investigación por el presunto sobreprecio de las obras del Programa de Submarinos (Prosub) y la base de Itaguaí, que está siendo investigado por la justicia. El tema es sumamente delicado ya que las obras corren a cargo de Odebrecht y tocan uno

de los puntos más delicados de la defensa de Brasil: el programa nuclear y de submarinos iniciado en 2009 luego de firmados los acuerdos estratégicos de transferencia de tecnología con Francia.

Un comentario final. En el capitalismo la "corrupción" es parte intrínseca de la acumulación de capital. No existe capitalismo sin corrupción, pues es un sistema basado en la explotación de los trabajadores y, por lo tanto, no puede apelar a ninguna moral para justificarse. La Operación Lava Jato y la crisis política-económica existente en Brasil consiguieron retrasar el cronograma de entrega de los submarinos. El primer submarino debía salir del astillero de Itaguaí en 2015, pero por la reducción presupuestaria sería entregado recién en 2019 o 2020 (Poder Naval, 2015). Más grave es lo sucedido con Petrobras, que cayó cerca de 400 posiciones en el *ranking* de las mayores empresas del mundo elaborado por la revista Forbes. En 2013, Petrobras era la vigésima empresa del mundo, y en 2015 ocupa al lugar 416, perdiendo dos tercios de su valor de mercado (Valor, 2015).

Parece evidente que existe una durísima disputa entre dos sectores de la burguesía. Estados Unidos y el capital financiero internacional tomaron partido contra los gestores vinculados al PT y las multinacionales de origen brasileño como Petrobras y Odebrecht. En esa lucha cada sector de la burguesía se apoya en distintos poderes. La novedad que aportan los gobiernos progresistas es que se apoyan en las grandes empresas originarias de cada país, en los gestores de las empresas estatales, los partidos progresistas y los sindicatos y otros movimientos sociales; además cuentan con el apoyo externo de los países emergentes que integran los BRICS. Necesitan apelar a la movilización popular para crear las condiciones que les permitan aislar y desplazar al sector más tradicional de la burguesía, en general vinculado a la banca, el agronegocio, la minería y la especulación inmobiliaria, dependiente de las grandes multinacionales del norte y aliado incondicional de Estados Unidos.

## Bolivia: cooperativistas mineros, burguesía emergente

La minería cooperativa se expandió como consecuencia de las políticas neoliberales que privatizaron el poderoso y combativo sector

minero estatal en torno a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Las cooperativas mineras captaron una parte de los trabajadores desempleados a raíz de las privatizaciones que favorecieron a grandes empresas multinacionales.

Las cooperativas mineras nacieron con la crisis de 1929 y su historia fue fluctuando según los precios internacionales de los minerales. Pero desde 1985, cuando el gobierno neoliberal decidió desmantelar Comibol que hasta ese momento administraba la principal riqueza boliviana, se inició la "relocalización" de los trabajadores que abandonaron las minas en busca de otras alternativas laborales en las ciudades, opción infructuosa para muchos que al no encontrar trabajo se vieron forzados a regresar a éstas; un retorno conflictivo, ya que sucedió de manera violenta porque los mineros tenían que tomar la mina "hasta que el gobierno les acordara el derecho de explotarla como cooperativa" (Michard, 2008: 12).

Según otro análisis, las cooperativas absorbieron buena parte de la masa de trabajadores desocupados, mitigando la presión por empleo sobre la minería privatizada, por lo que "las cooperativas mineras son la otra mitad del modelo neoliberal en minería" (Francescone y Díaz, 2013: 32). Los cooperativistas operan las viejas y poco rentables minas de Comibol nacionalizadas por la revolución de 1952, mientras los mejores yacimientos fueron entregados a la iniciativa privada. Hasta las privatizaciones, las cooperativas mineras contaban con unos 20 mil trabajadores, pero hacia fines de la década de 1980 ya superaban los 40 mil miembros.

Desde que el MAS ocupa el Palacio Quemado, las cooperativas mineras comenzaron a ser respaldadas con el objetivo de contar con un sector productivo cercano a los objetivos políticos y estratégicos del nuevo gobierno. Debido a los altos precios internacionales, las exportaciones mineras pasaron de 500 millones en 2006 a más de 3 000 millones de dólares en 2013. El sector cooperativo representa 30% de las exportaciones mineras totales, pero 37% de la plata, 41% de las de estaño y 71% del oro son exportados por ellas (*ibid.*: 35).

Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y 43% de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (447 en 2008 a 1 400 en 2013); éstas emplean de forma directa a 120 mil

trabajadores, 90% de la ocupación del sector. Sin embargo aportan muy poco al Estado, 4% por impuesto al valor agregado y 1% del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol. En total, dejan 44 millones por regalías de los 1 059 millones de dólares exportados por ellas en 2012 (*ibid.*).

Las diferencias entre las cooperativas son importantes. Más de 80% tiene entre 10 y 50 socios, 2% superan los 200 socios y 12 cooperativas concentran 74% de la producción. Los ingresos también son muy desiguales: algunos socios pueden ingresar 60 mil bolivianos por mes, mientras los trabajadores contratados apenas alcanzan a 1 500 bolivianos[6] (Salazar, 2015: 240). Algunas grandes cooperativas contratan hasta 80% de la fuerza de trabajo. Sólo 10 cooperativas tienen más de 300 socios (Poveda, 2014).

En muchas cooperativas de gran tamaño existe una gran diferenciación interna y profundas desigualdades. Formalmente, todos los trabajadores de la cooperativa son socios, pero en la realidad hay categorías. Hay peones que vienen del campo a trabajar por temporadas para completar los ingresos que obtienen en la agricultura. Los que no tienen experiencia en el trabajo de mina, deben trabajar un tiempo, a veces años, antes de ser aceptados como socios. Muchos peones trabajan para un socio. En el Cerro Rico de Potosí, una cuadrilla de cuatro peones que trabajan para un socio reparten la producción a razón de 40% para el socio y 60% para los peones, lo que representa entre 700 y 1 000 bolivianos mensuales para los peones (Michard, 2008: 14).

Hay muchos arreglos, de acuerdo a las cooperativas. Existen las "segundas manos", una categoría intermedia entre peón y socio, además de tres o cuatro categorías de socios, según detectó la investigación de Jocelyn Michard en Potosí. Por lo tanto, los derechos son diferentes, ya que las categorías más altas se benefician de regalos de fin año y aguinaldo, mientras en otras cooperativas sólo algunos socios pueden acceder a cargos de dirección.

En cuanto a la organización del trabajo, cada socio se busca un "paraje" y lo explota de manera autónoma, puede asociarse con otros socios o contratar trabajadores. Los ingresos dependen del mineral extraído. En Potosí, en las cooperativas más grandes los

6 Un dólar equivalía a 7 bolivianos en diciembre de 2015.

miembros de la comisión permanente "tienen capacidad financiera para contratar empleados, dejan a sus peones trabajar en un paraje mientras se dedican a sus tareas administrativas", ya que realizar una buena gestión "constituye una posibilidad de ascenso político" (*ibid*.: 20). Las grandes cooperativas cuentan con secretarias, choferes, contadores, ingenieros, personal de seguridad y mejores máquinas, y pueden obtener mejores precios al vender en cantidades.

La estratificación económica y social dentro de las cooperativas es importante y está relacionada no sólo con la cantidad de socios sino con la distribución interna del poder.

> Existen socios, que ocupan o están directamente vinculados con los órganos de dirección de su cooperativa, que tienen control de parajes con yacimientos de alta ley, que subcontratan trabajadores para explotar la mina e invierten en tecnología, etc. y que logran altísimas utilidades personales. Éste es un estrato que en muchas cooperativas toma las decisiones más importantes y actúa con una lógica empresarial. Es este el grupo que ha logrado tener una relación más directa con las comercializadoras y en algunos casos ha gestionado alianzas con inversores extranjeros estableciendo contratos de riesgo compartido (*ibid*.: 59).

Estamos ante una descripción interesante de cómo surge una élite diferenciada que asienta su poder y prestigio en el control del trabajo directo de los socios/trabajadores agrupados en cuadrillas que, en muchos casos, trabajan con herramientas manuales. A partir del control del trabajo y del plusvalor generado por sus obreros en cada mina, esa pequeña élite controla la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) que, como se dijo, aporta nada menos que un tercio de las exportaciones mineras del país, o sea 23% del total exportado antes de la caída de los precios.

Un seguimiento de la carrera personal de los cooperativistas que alcanzaron altos cargos en el Estado permite sacar algunas conclusiones sobre este sector de la burguesía emergente. En los años ochernta, el senador Efraín Condori trabajó en la mina Catavi perteneciente en ese periodo a Comibol, según surge de su biografía publicada en la página de la Vicepresidencia. En la década de 1990 trabajaba en la Cooperativa 20 de Octubre, que a su vez lo eligió como presidente. Entre 1998 y 2000 fue presidente de Fencomin y

luego del Comité de Defensa de Catavi. Posteriormente será investido como senador del MAS por el departamento de Potosí.

El también senador del MAS, Pascual Huarachi, fue dirigente estudiantil y en 1996 dirigente de educación de la Cooperativa Minera de Chorolque. Entre 2002 y 2004 fungió como secretario de Minería de Fencomin, organismo que presidió entre 2005 y 2006. Andrés Villca, senador del MAS, ostenta una trayectoria similar. La bancada de los cooperativistas mineros incluye, además de los senadores, a seis diputados, que en conjunto representan 8% de la bancada oficialista. El primer ministro de Minería del gobierno de Evo Morales fue también presidente de Fencomin, organización que hegemoniza el ministerio. Hay por lo menos dos cooperativistas en cargos de viceministros.

Existe una fuerte relación entre el gobierno y los cooperativistas mineros, no exenta de rispideces y crisis. En varias ocasiones los cooperativistas presionaron al gobierno, como sucedió durante el proceso constituyente y la aprobación de la Ley de Minería, con el objetivo de obtener beneficios para el sector. Ante las elecciones de 2014, Fencomin supeditó al gobierno a que se aprobara la Ley Minera antes del acto electoral, como condición para apoyar la candidatura del MAS (Salazar, 2015:242). Sin embargo, en los momentos decisivos los cooperativistas mineros cerraron filas en torno al gobierno masista, como pudo verse en la "masiva participación de las cooperativas en la marcha a favor del gobierno durante el conflicto TIPNIS (...) premiada con dos leyes a favor del sector" (Francescone y Díaz, 2013: 33).

La Ley de Minería, aprobada en 2014, ha sido definida como privatista, antiindígena y antidemocrática. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), ésta reconoce sólo tres formas de actividad minera (estatal, privada y cooperativa), por lo que "estaría obligando a los pueblos indígenas a asumir una forma organizativa propiamente mercantil capitalista abandonando su naturaleza social colectiva" (CEDLA, 2014: 5).

Además vulnera al sector productivo agrario, en tanto considera que la minería tiene un carácter estratégico que lleva a que los derechos mineros "tengan primacía sobre la propiedad agrícola de la tierra", otorgando a los derechos mineros la facultad de recurrir a

la expropiación a propietarios agrícolas para garantizar la actividad minera, lo que incluye los derechos adquiridos en áreas que fueron otorgadas a los pueblos indígenas como Tierras Comunitarias de Origen o Territorios Indígenas Originario Campesinos (*ibid.*: 6).

De acuerdo al investigador Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), ningún sector de la sociedad tendrá las potestades y la jerarquía otorgada a los concesiones de "derechos mineros", que están "protegidos por disposiciones propias de una monarquía, no de una democracia" (Villegas, 2014: 26). La normativa ofrece seguridad y protección a las empresas mineras y sus inversiones ante "actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretenda invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones", lo que supone criminalizar la protesta (CEDLA, 2014: 6).

En opinión de Villegas, el Estado se convierte en "un instrumento de los concesionarios", que quedan situados incluso "por encima del parlamento", en un proceso contradictorio que, mientras favorece a los cooperativistas, que "manifestaron que su apoyo electoral al gobierno dependía de la aprobación de la ley minera", por otro envía a la policía a arrebatar la personería de organizaciones opositoras como Conamaq y CIDOB, y entregarla a las organizaciones que el propio gobierno ha creado" (Villegas, 2014: 28).

Según Carlos Arce, del CEDLA, el gobierno "apoya a los cooperativizados como parte de la nueva burguesía emergente que fortalecerá al nuevo Estado Plurinacional", con la misma intención que apoya a otros sectores como los comerciantes o productores agrícolas medianos del norte de Santa Cruz" (CEDLA, 2012). Para Arce se trata de un tipo de empresarios más austeros y populares que no se exhiben en Miami y viven con modestia, como los cooperativistas mineros, comerciantes urbanos y productores rurales que el Estado articula para garantizarse una base social de apoyo con poder económico y productivo.

Esta burguesía emergente necesita no sólo apoyarse en el Estado sino, también, en los sectores populares. En la publicidad electoral aparecen con sus cascos de mineros, apelando a una vieja y lejana simbología como forma de soldar lealtades. Participan de forma activa en luchas importantes, como sucede en Potosí (el departamento

más minero del país) donde han sido protagonistas de varios movimientos en 2007, 2010 y en julio-agosto de 2015. Integran el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que realizó una huelga departamental de 20 días con cortes de rutas y acciones callejeras.

Comcipo levantó un pliego de demandas de 26 puntos, en el que destaca la construcción de fábricas, hospitales, caminos e infraestructura en momentos en que la caída de los precios de los minerales amenaza la continuidad de las explotaciones mineras. Además exige la activación de la planta minera de Karachipampa, instalada hace 40 años, que nunca funcionó, y la preservación del Cerro Rico de Potosí, que corre el riesgo de derrumbarse amenazando los socavones, siendo una de las principales explotaciones de las cooperativas (Bolpress, 2015).

Hay por lo menos cuatro aspectos que permiten comprender las ventajas obtenidas por los cooperativistas mineros: menos regalías e impuestos y una tasa cero de IVA; están eximidas de las obligaciones tributarias del régimen general de impuestos por su naturaleza social y sin fines de lucro; tienen facilidades en la comercialización, a lo cual el Estado contribuyó con la creación del Centro Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras y un Fondo de Estabilización de precios que permite compensar si el costo de producción de las cooperativas supera los precios internacionales; finalmente, la ley de Medio Ambiente, por supuesto, no afecta a las cooperativas mineras (Poveda, 2014: 81).

Todo el respaldo estatal y gubernamental se explica en gran medida por las necesidades del proyecto plurinacional, brindándoles mejores condiciones para enfrentar la competencia del mercado, en un sector en el cual el gobierno no tiene otros aliados que los cooperativistas y los trabajadores sindicalizados, cuyos intereses suelen ser contradictorios. En esta apuesta del proyecto del MAS los principales perjudicados son los peones de las minas y las comunidades andinas, que no tienen acceso a la explotación del subsuelo que en teoría les pertenece, porque no cuentan ni con recursos propios ni con apoyo estatal. Por cierto, el apoyo del MAS a los cooperativistas tiene esos costos sociales directos, pero aun así necesita aliarse con el capital privado para convertirse en el sector hegemónico de la acumulación minera. "La tendencia más bien está encaminada

a convertir al cooperativismo minero y a su régimen especial en canal de penetración del capital extranjero, remplazando a la desaparecida clase de empresarios mineros bolivianos de la minería mediana" (*ibid*.: 85).

* * *

Hemos observado dos procesos distintos en dos países con gobiernos progresistas: el ascenso de una élite incrustada en el Estado, entrelazada con la burguesía multinacional brasileña y altos funcionarios del partido de gobierno y, por otro lado, la promoción de una camada de cooperativistas convertidos en explotadores con influencias y apoyos en el gobierno. Lo analizado no puede generalizarse a otros procesos que tienen, cada uno, sus propias particularidades. Los caminos para la creación de nuevos grupos de privilegios, como se ha podido comprobar, no son idénticos en Brasil y en Bolivia, y presentan, por el contrario, más diferencias que similitudes.

Tampoco podría afirmarse que han nacido nuevas burguesías, cuestión que parece poco probable en la década y media escasa que tienen los procesos progresistas. Puede afirmarse, empero, que una de las consecuencias más importantes de las gestiones progresistas es la consolidación de nuevos privilegios y de grupos beneficiarios de las políticas gubernamentales. Pero esos sectores deben ser identificados con cierta precisión. No vale hablar de "capitalismo de Estado" en general, sin acotar quiénes participan y cómo se benefician de la nueva realidad.

En el caso de los "altos mandos" del cooperativismo minero boliviano, parecen existir tendencias hacia la conformación de una élite bien posicionada, que atrapa una parte sustancial del plusvalor generado por los obreros de las cooperativas, mientras está bien situada para aliarse con el capital privado. Por otro lado, las carreras sindicales vinculadas a los fondos de pensiones y a partidos incrustados en cargos estatales de alto nivel, ha generado una prole de nuevos administradores en puestos clave, con las condiciones para gestionar una fracción nada despreciable del capitalismo brasileño.

El objetivo es mostrar cómo va naciendo esa camada de gestores

a la sombra de las empresas y las políticas estatales. Aunque los gestores han ganado fuerza considerable, aún es pronto para decir que se trata de una burguesía emergente, aunque sus intereses están lejos de los de las mayorías populares y, más lejos todavía, de la proclamada intención de construir el socialismo del siglo XXI o sociedades más justas e igualitarias. Habrá que esperar aún cierto tiempo para saber si estas tendencias se consolidan. Sin embargo, la crisis en curso es un buen revelador —como veremos en el capítulo siguiente— de la cristalización de intereses de clase.

# CAPÍTULO IV

# Fin de ciclo: desigualdad y represión para sostener los privilegios

## a) La persistencia de la desigualdad

Uno de los mayores mitos creados por los gobiernos progresistas es el que asegura que han reducido la desigualdad. Las políticas públicas de estos gobiernos consiguieron reducir de forma importante la pobreza, aunque una parte de esa reducción se debe al ciclo económico alcista que elevó los niveles de empleo y redujo el desempleo a mínimos históricos. Pero no puede obviarse el hecho de que el aumento consistente del salario mínimo y las políticas sociales mejoraron los ingresos de los sectores populares, reduciendo la pobreza en varios países por debajo de 10% de la población.

No puede decirse lo mismo de la desigualdad. La incapacidad para reducir las desigualdades agudizadas durante la era neoliberal es uno de los grandes fracasos de los gobiernos progresistas. El problema para medirla es la falta de datos, o la existencia de mediciones en plazos muy cortos, lo que no ayuda a tener una visión más o menos completa de los procesos de distribución y concentración de la renta.

En primer lugar, debe distinguirse entre desigualdad estructural y desigualdad coyuntural, como señala el sociólogo ecuatoriano Pablo Ospina. Entre la década de 1990 y la de 2000 se registró una

tendencia divergente: en la primera crecieron la pobreza y la desigualdad en todo el continente, mientras en la segunda se redujeron en todos los países; ello le permite concluir que estamos ante un comportamiento "independiente de la tendencia ideológica de los gobernantes de cada país, lo que hace suponer que se trata de una tendencia favorecida por factores económicos estructurales", vinculados al tipo de inserción del subcontinente en el sistema mundial (Ospina, 2013: 175).

A primera vista, esto es visible al comparar los casos de Ecuador y Colombia, dos regímenes *a priori* confrontados ideológicamente. El gobierno correísta presume de ser el que mejores logros ha obtenido en materia de lucha contra la pobreza en la región, vanagloriándose por desarrollar un modelo de política social referencial para todo el planeta. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), durante los primeros ocho años de gestión correísta (2007-2014) la pobreza nacional medida por ingresos bajó de 36.7 a 22%, lo que significa que la pobreza se redujo 14.2 puntos porcentuales. Sin embargo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el país pasó de un indicador 45.06% de pobreza medida por ingresos en 2008 a 28.5% en 2014, por lo tanto, se contabiliza una reducción de 17.45 puntos porcentuales. Siguiendo estos indicadores, Colombia habría reducido su desigualdad 3.25 puntos porcentuales más que Ecuador con apenas un año de diferencia; citando al Premio Nobel de literatura francés, Anatole France, esto significaría que "sin mentiras la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento".

En segundo lugar, los datos sobre desigualdad y pobreza mejoran en los primeros años de la década de 2000, porque habían alcanzado un pico coyuntural entre fines de los noventa y comienzos de la primera década del siglo; no obstante, en la segunda mitad los índices tienden a estancarse, porque los gobiernos se enfrentaron a la desigualdad estructural, aunque sus indicadores prácticamente no se han modificado. Los datos, por lo tanto, aseguran que hubo una drástica caída de la pobreza, hasta la mitad de aquella registrada en el momento álgido de la crisis; luego, se produjo un descenso gradual pero continuo. Pero también hubo un aumento

de las recaudaciones de impuestos, del empleo formal frente al subempleo, del gasto social de los gobiernos en educación y salud, en transferencias monetarias y prestaciones a los grupos de mayor pobreza, a lo que hay que sumar el crecimiento de la matrícula escolar y universitaria, entre otros. En Ecuador, por ejemplo, aunque la pobreza cayó a la mitad entre 2000 y 2010 (de 64.4 a 32.8%), ese simple dato encierra dos problemas. El primero es que mide el momento de mayor crisis económica en la historia reciente del país. El segundo es que la pobreza ya había caído fuertemente cuando Rafael Correa asumió la presidencia: en diciembre de 2006 ésta ya se situaba en torno a 37% (*ibid.*: 179).

El Índice Gini era de 0.56 en diciembre de 2000 y comenzó a descender suavemente hasta situarse en 0.50 en diciembre de 2010. Algo similar sucedió en Bolivia, donde el índice que mide la desigualdad era de 0.59 en 2001 y cayó hasta 0.50 en 2009 (Arze y Gómez, 2013: 119). Los comportamientos son similares en otros países de la región: crecimiento de la pobreza y la desigualdad hasta un pico durante las crisis y descenso en la década siguiente. En Colombia, cuyas políticas están alejadas de las de los países con gobiernos progresistas, aunque —como vimos anteriormente— se registró una reducción de la pobreza, la desigualdad quedó prácticamente congelada en torno a 0.58 (DANE, 2009).

Lo que puede decirse de los gobiernos progresistas es que, en diversos casos, sus políticas hicieron caer la pobreza de modo más consistente y profundo que en países con gobiernos conservadores. Sin embargo, respecto a la desigualdad no es posible sacar conclusiones definitivas y generales para todos los países. En algunos casos, como el señalado, porque hubo una pequeña caída de la desigualdad que aún no sabemos si habrá de consolidarse en periodos de crisis.

La tercera cuestión se relaciona con la medición de la desigualdad. Los datos que suelen difundir los gobiernos se relacionan con la Encuesta de Hogares, considerado un instrumento limitado para medir los ingresos de los sectores más ricos. Un trabajo realizado por el Instituto de Economía del Uruguay para los años 2009 a 2011, con base en los microdatos tributarios de imposición a la renta personal, comparados con aquellos que surgen de la Encuesta

Continua de Hogares (ECH), mostraron datos divergentes que enseñan que "las dificultades de la ECH para capturar los ingresos muy altos tendieron a agravarse en el periodo" (Burdín *et al.*, 2014: 3).

Una conclusión similar obtienen los investigadores del brasileño IPEA (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, por sus siglas en portugués). Tres investigadores de este instituto estatal combinaron datos de las muestras domiciliarias con las declaraciones anuales del impuesto a la renta y concluyeron que, si bien hay una tendencia a la estabilidad de la desigualdad, no se registra una reducción entre 2006 y 2012 (Medeiros *et al.*, 2015). En los casos de Uruguay y Brasil contamos, pues, con datos que avalan que la desigualdad es mayor de lo que se pensaba, y que además no está descendiendo.

Debe decirse que ambos grupos de investigadores están influenciados, entre otros, por los estudios del economista francés Thomas Piketty sobre la desigualdad. Afirman que las investigaciones sobre los grupos de ingresos elevados son muy escasas, "por la debilidad de los sistemas de tributación directa al ingreso y al patrimonio y las consecuentes carencias en la disponibilidad de información tributaria de buena calidad" (Burdín *et al.*, 2014: 10).

En el caso de Uruguay, la investigación constata que hubo una caída de la desigualdad entre la crisis de 2002 y 2012, octavo año de los gobiernos progresistas de Tabaré Vázquez y José Mujica, pero es prácticamente igual a la que había a la salida de la dictadura militar en 1986 (Gini de 0.42 y 0.40 respectivamente). Cuando se incluyen los grupos de muy altos ingresos y las rentas del capital las cosas cambian, ya que entre los más ricos las rentas superan a los salarios como fuente de ingresos. El estudio se focaliza en el 1%, 0.5% y 0.1% de mayores ingresos. Una primera conclusión es que la captación de ingresos por el 1% superior es tres puntos más elevada a la detectada la Encuesta de Hogares.

En 2009, el 1% superior captaba 13.8% de los ingresos del país y en 2011, 14.1%. El 0,01% superior pasa de 1.7 a 1.9% (*ibid.*, 2014: 36), datos que indican que, cuanto más alto es el nivel económico, más rápidamente crecen sus ingresos. Pero hay más: un tercio de los ingresos del 0,01% son ingresos de capital que no se reflejan en los datos oficiales. El 0.5% capta más ingresos que el 40% más pobre y el 0.1% un poco menos de lo que recibe el 30%.

Las conclusiones del trabajo destruyen el discurso oficial que atribuye la supuesta caída de la desigualdad a las políticas sociales y la creación del impuesto a la renta, que para los gobiernos del Frente Amplio ha sido la principal reforma de carácter estructural, pero que grava sólo los ingresos salariales. "La participación del 1% de mayores ingresos se mantuvo constante en el periodo (aunque con una ligera tendencia al crecimiento), en el entorno de 12.5-14%", destaca el informe. En cuanto a la reforma impositiva señala que se trata de "un impuesto que genera una redistribución moderada en el ingreso total, las rentas laborales y las de pensiones y jubilaciones, al tiempo que es ligeramente regresivo en relación a las rentas del capital", en gran medida porque "la composición de los ingresos de los sectores más altos está más volcada hacia aquellas rentas del capital con mayores exoneraciones" (*ibid*.: 47-48).

El estudio de los tres investigadores del IPEA sobre Brasil abarca más años, de 2006 a 2012. En este país la concentración de la riqueza es mucho mayor que en Uruguay. El 1% más rico concentra el 24.4% de la riqueza, casi el doble. La primera conclusión del estudio es que la desigualdad es muy estable. Mientras los datos oficiales hablan de una consistente disminución de la desigualdad en esos seis años, los datos recogidos gracias a las declaraciones a la renta aseguran que no hubo descenso sino una "leve tendencia de aumento" (Medeiros *et al*., 2015: 975).

Del mismo modo, detectan que entre el 1% de mayores ingresos existe una resistencia a la disminución de la desigualdad mayor que entre las clases medias y bajas. Los investigadores creen que su estudio aún subestima la desigualdad existente, porque ciertamente los más ricos tienen mayores posibilidades de evadir u ocultar sus ingresos. Pero lo interesante es constatar que en pleno gobierno del PT, cuando la pobreza cayó de forma radical (40 millones de pobres se incorporaron al consumo), la desigualdad siguió siendo la misma. Aunque Brasil creció de forma consistente durante esos años, la mitad del crecimiento quedó en manos del 5% superior, y 28% se lo apropió el 1% más rico. Apenas 10% del crecimiento fue para los más pobres. "Hay cambios entre el 90% más pobre, pero la concentración en el tope de la escala es estable, especialmente en el 1% más rico", concluyen (*ibid*.: 982).

Una actualización posterior del mismo equipo revela que cuanto más arriba en la escala de ingresos, más rápido es el crecimiento de la riqueza en esos años. El 10% más rico concentraba 51.1% de la riqueza en 2006, pasando a 53.8% en 2012. Pero el 1% pasó de 22.8 a 24.4%. El porcentaje de la riqueza que captura el que está más arriba es siempre mayor, aun bajo los gobiernos "progresistas" del PT.

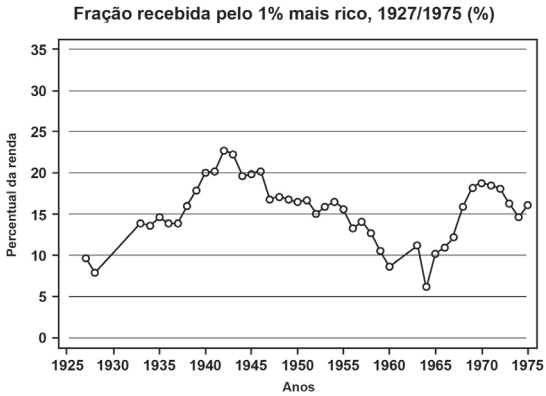
Este conjunto de datos revelan que no existió intención de combatir al 1%. Por el contrario, su riqueza tiene que estar creciendo en estos momentos de crisis, como lo sugieren los datos preliminares. Lo que hubo bajo el progresismo fue una redistribución de ingresos entre el 90%, lo que excluye al 10% de arriba y, sobre todo, a ese 1% tan resistente a los cambios. Son los más ricos los que afectan la desigualdad, y sobre ellos no se ha hecho nada.

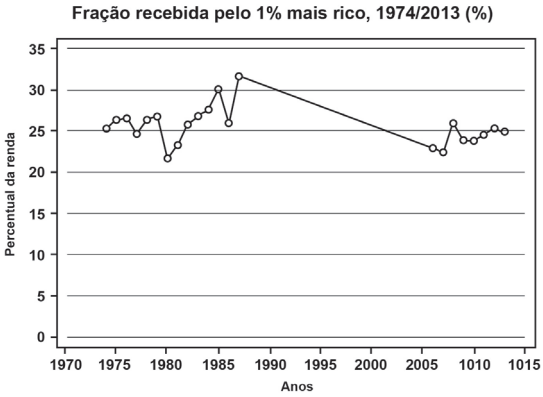
En el caso de Brasil contamos con un estudio sobre desigualdad que incluye casi un siglo, desde 1927 hasta 2013, una serie histórica excepcional por su larga duración (Ferreira, 2015). De ella resultan dos hechos contundentes: que la desigualdad fluctúa en tiempos largos, no en coyunturas cortas, y que hay razones de fondo para su caída o aumento que no dependen de políticas puntuales sino de ciclos pautados por la industrialización, el poder de las clases dominantes, la estabilidad de la dominación y la capacidad de los subalternos de pasar a la ofensiva. En el caso del Brasil petista, la desigualdad es similar a la registrada en el tramo final de la dictadura (1964-1985) y superior a la existente en el periodo de aprobación de la vigente Constitución (1988), una etapa de agudos conflictos laborales y sociales.

Ferreira de Souza, Castro y Medeiros sostienen que para explicar los cambios en la desigualdad hay que tener en cuenta factores no sólo económicos, sino políticos. La represión de las dictaduras jugó un papel importante en el aumento de la desigualdad. En 1965, poco después del golpe de Estado, el 1% concentraba 10% de la riqueza. En 1968, ya tenía 16% y siguió acumulando hasta concentrar 25% a fines de la década de 1970.[1]

1 En el caso de Argentina, la serie de remuneración del trabajo asalariado en el valor agregado bruto, de 1950 a 2007, registra un comportamiento casi idéntico a la evolución de la desigualdad en Brasil. Véase Susana Kidyba y Daniel Vega (2015), Distribución funcional del ingreso en la Argentina, 1950-2007, Serie Estudios y Perspectivas, núm. 44, Buenos Aires, CEPAL .

Las luchas de clases juegan un papel destacado en la evolución de la desigualdad, mucho más que las políticas sociales compensatorias. El progresismo ha hecho la opción, en palabras de André Singer, ex portavoz de la presidencia de Lula, de promover un gran pacto social conservador dentro del orden, que excluye la movilización de la sociedad, proceso que no ha impedido que las clases más ricas se le opongan: "Como el lulismo es un modelo de cambios dentro del orden, y hasta con un refuerzo del orden, no puede ser movilizador. Eso hace que el conflicto no tenga una expresión política partidaria, electoral, institucional. A tal punto que hay una frustración muy grande en la clase media tradicional porque no hay un partido que exprese esa carga de hostilidad" (Singer, 2012). Sin movilización la desigualdad no corre riesgos.

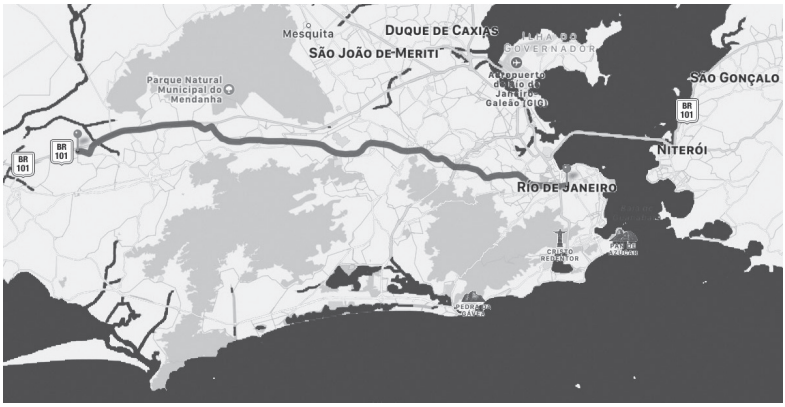


Por otro lado, las políticas sociales mejoran los ingresos de los beneficiarios, pero no modifican su lugar estructural. Una investigación sobre uno de los programas estrellas del gobierno brasileño, Minha Casa, Minha Vida (Mi Casa, Mi Vida), asegura que reproduce la injusticia social al remover a las familias de su hábitat para darles una vivienda de mejor calidad, pero en las periferias, donde tienen escaso acceso a la ciudad.

La socióloga Melissa Fernández Arrigoitia realizó la investigación en Rio de Janeiro, donde fueron reasentadas 22 mil familias de cara a los Juegos Olímpicos de 2016; 74% de éstas recibieron casas del programa Minha Casa, Minha Vida. Vivían en "áreas de riesgo en el centro de la ciudad, donde habían construido sus estrategias de sobrevivencia". En algunos casos, como el del conjunto Recanto da Natureza, fueron trasladadas a bloques de apartamentos de 44 metros cuadrados a 50 kilómetros del centro de Rio. La distancia se convierte en una nueva forma de marginación. Entre las personas entrevistadas había muchos casos de depresión, asociados al aislamiento provocado por el traslado. Una conclusión es que la vivienda ha mejorado, pero los proyectos no ofrecieron nada mejor en términos de desarrollo humano. "La mayoría comenzaron a trabajar en sus casas, con pequeñas ventas de productos de limpieza, belleza, reparaciones de computadoras. Sus ingresos cayeron, pues aumentaron los gastos de impuestos, cuentas y bienes de consumo" (Fernández, 2015).

**Distancia entre Recanto da Natureza y el centro de Rio de Janeiro (45.1 km)**



El programa ya entregó 2.3 millones de viviendas para familias con ingresos menores a 1 600 reales (450 dólares) y aún debe entregar 1.6 millones de unidades más. Pero las familias no pueden escoger a dónde irán a vivir, y cuando ingresan a su nueva vivienda encuentran un barrio cercado con muros y alambres, donde los niños deben jugar en el asfalto o en los lugares de estacionamiento y, sobre todo, desconectados de sus anteriores espacios y modos de vivir. El programa beneficia a las constructoras que reciben grandes áreas para construir y obtener ganancias. No hay alquileres sociales, como en Inglaterra o Alemania, donde el Estado interviene para regular el mercado de vivienda a favor de los más pobres. La investigación concluye que "el programa puede acabar perpetuando el estado de marginación de los beneficiarios" (*ibid.*).

En el caso del Ecuador, buscando un comparativo entre el gobierno progresista moderado del PT y un gobierno de los supuestamente radicales en la región, tras la crisis financiera de 1999 y la dolarización del año 2000, los gobiernos neoliberales anteriores al de Rafael Correa intentaron estabilizar la economía nacional y recuperar la inversión extranjera a través de la construcción de un nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP). El escaso éxito de aquella apuesta tiene que ver con la entonces limitada participación del Estado en los excedentes petroleros de las empresas privadas, y con el hecho de que los yacimientos estatales se encontrasen afectados por una producción declinante y una limitada inversión; ello restringió los ingresos fiscales derivados de la actividad petrolera y su efecto articulador con la economía nacional (Larrea, 2004).

Más allá de la debilidad de aquellos gobiernos, este periodo se desarrolló en un marco de condiciones favorables que pueden resumirse en dos cuestiones: que el precio del petróleo creció en algo más del doble de su valor hasta alcanzar los 50.75 dólares por barril en momentos previos al triunfo de Alianza PAIS en las elecciones presidenciales de 2006: y a la llegada de sustanciosas remesas desde el exterior (pasaron de 1 084 millones de dólares en el año 2000 a 2 916 millones de dólares en 2006) debido al éxodo masivo de trabajadores ecuatorianos tras la crisis financiera de 1999.

El crecimiento de la renta per cápita ecuatoriana, que pasó de 1 336 dólares entre 1993-1999 a 1 514 en la década de 2000-2009

(*ibid.*), activó la "popularización" del sistema financiero privado (facilidad de acceso al crédito para familias humildes buscando incentivar el consumo), lo que consolidó un capital emergente que, enfocando sus criterios de rentabilidad hacia el mercado interno —a diferencia de la vieja oligarquía dedicada al *agrobusiness*— agudizó el problema de la existencia de empresas monopólicas en el mercado comercial ecuatoriano.

Es en esa coyuntura que se da el nacimiento del correísmo, como expresión combinada de una lógica política y otra económica que se desarrollaron en paralelo (Machado, 2015). El hastío ciudadano ante una sucesión de malos gobiernos transversalizados por la corrupción y la deslegitimación del sistema, por un lado, y por otro, la necesidad de expresión política de ese nuevo capital emergente que, en conflicto con la vieja oligarquía agroexportadora, propugnaba la modernización de los mercados nacionales para superar un modelo económico arcaico basado en la exportación de banano, flores, camarón y petróleo (entre los cuatro productos suman 75% de las exportaciones ecuatorianas, correspondiendo al crudo 54% de éstas).

Es así que la actual intervención del Estado en la dinamización de la economía —principal característica del socialismo del siglo XXI ecuatoriano— significó que el gasto de inversión pasara de 11.4% del Presupuesto General del Estado en 2008 a 20.5% en 2013, mientras los grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional incrementaron en casi 40% sus ingresos. En pocas palabras, las empresas más grandes que operan en el mercado ecuatoriano han ganado más durante la gestión correísta que durante los años anteriores a la llegada del presidente Correa al sillón presidencial del Palacio de Carondelet (*ibid.*).

El dato es curioso, pues mientras el gobierno presume de haber bajado el Índice Gini de 0.54 en 2007 a 0.48 al cierre del 2012 (en la actualidad está oficialmente en 0.47), lo cierto es que los ingresos de las 300 principales empresas que operan en el país y su relevancia respecto al PIB nacional se ha incrementado. Así, en 2006, con un PIB de 46.8 miles de millones de dólares, las 300 empresas más grandes de Ecuador ingresaron 20 363 millones de dólares, lo que viene a significar 43.6% del PIB. Seis años después, en 2012, con

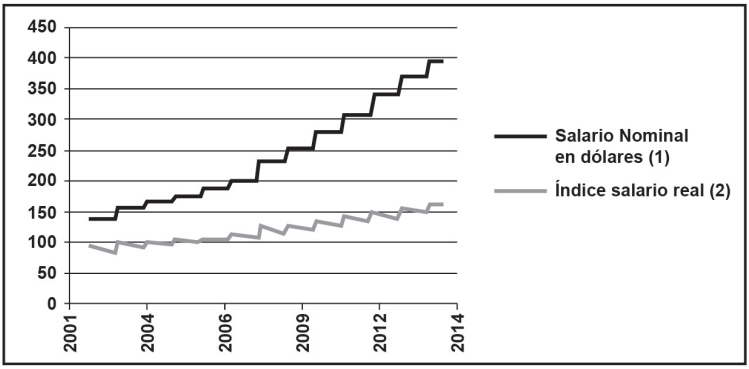
un PIB de 84 700 millones de dólares —casi el doble del de 2006—, estas mismas empresas ingresaron 39 289 millones de dólares, lo que implica 46.4% del PIB nacional. Hoy, con un PIB algo superior a los 101 000 millones de dólares, la situación en los mercados es de aún mayor concentración. Asistimos entonces a una mayor monopolización por parte de las más destacadas empresas que operan en el mercado ecuatoriano, lo que significa que los mismos que antes ganaban más, ahora ganan todavía más.

La cuestión se agrava en la medida en que el incremento relativo de la capacidad adquisitiva de la población, que ha facilitado una política interna destinada al consumo, está derivando en un fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. Según un reciente estudio del Colegio de Economistas de Pichincha, 41% de los hogares ecuatorianos gasta más de lo que gana, siendo las personas más endeudadas aquellas que menos ingresos perciben.

Entender el endeudamiento actual de más de 400 000 familias ecuatorianas —el tamaño promedio del hogar en este país es de cuatro personas—, implica comprender también una sumatoria de factores adicionales: la flexibilización de las condiciones de crédito al consumo buscando incentivarlo, la falta de educación financiera de los sectores populares y de clase media baja, así como la complicidad entre el sistema financiero, el gran comercio y las autoridades políticas, lo cual propicia el actual festín consumista.

El fisco ecuatoriano reconoce la existencia de 118 grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional, de los cuales 16 controlan la mayor parte de la economía. Las políticas fiscales y productivas desarrolladas en los últimos años permitieron una serie de excepciones fiscales que determinan que la presión fiscal no recaiga sobre las grandes empresas, recaudándose de éstas sólo 15% del montante total del Impuesto a la Renta.

**Incremento salarial en Ecuador entre los años 2001 y 2014**




**Fuente:** Banco Central del Ecuador (2014) **Elaboración:** Proyecto Balance Crítico
**Notas de la Fuente:** (1) Se obtiene sumando al Salario Básico Unificado, el promedio anual de la décimo tercera remuneración y el promedio anual de la décimo cuarta remuneración; (2) Es el valor nominal promedio dividido para el índice de precios al consumidor del mes de referencia. Está expresado como índice cuya base es 2004=100. Este cuadro puede verse también en la Información Estadística Mensual del BCE

Por otro lado, el partido de gobierno Alianza PAIS incorporó en su programa electoral 2013-2017 el epígrafe de la Revolución Urbana, definida escuetamente así: "Trabajaremos por combatir la anarquía en las ciudades: invasiones y tráfico de tierras. Éste es uno de los mayores desafíos que tiene el Ecuador".

En la práctica esto significa desalojos periódicos, en especial en la ciudad de Guayaquil (segunda ciudad en importancia del país y primera en número de habitantes) en aras del "buen vivir" de la población, cuyo episodio más emblemático es el sucedido en Monte Sinaí. Se trata de un barrio popular de la periferia urbana de una ciudad que históricamente ha crecido a partir a los asentamientos irregulares. De acuerdo al censo estadístico de 2010, la ciudad tiene cerca de 2.3 millones de habitantes, 70% de los cuales son pobres.

Según datos recopilados momentos antes de la más brutal de las intervenciones a las que sus moradores fueron sometidos —el 10 de mayo de 2013, 1 500 efectivos policías y militares quemaron las viviendas de caña construidas por éstos en Monte Sinaí—, el municipio de Guayaquil estimaba que unas 6 465 familias humildes demandaban vivienda anualmente en esta ciudad, lo que implica un requerimiento de 39 000 viviendas en los últimos seis años. Sin embargo, los

datos extraídos de la página web del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), muestran que los bonos para nueva vivienda (ayudas económicas para sectores necesitados) entregados en toda la provincia del Guayas entre 2007 y 2012 sumaban tan sólo 12 360, siendo apenas 3 145 viviendas las construidas por el municipio de la ciudad en ese mismo periodo. En resumen, durante la gestión correísta entre 2007 y 2012 (momentos previos a los desalojos), no se habían cubierto las necesidades generadas en materia de vivienda en la ciudad, que ya en 2006 estaban calculadas en 75 000 unidades.

De acuerdo al estudio *Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados*, elaborado por la Fundación Hogar de Cristo, casi 30% de la población que vive en la zona percibe un ingreso mensual menor a 40 dólares mensuales, 48% de los hogares cuenta con un solo trabajador y en 16% de las familias ningún miembro trabaja.

Estas condiciones imposibilitaban a la mayoría de las familias asentadas el acceso a una vivienda de los planes habitacionales generados por el Estado, pues a pesar de que estos programas están subvencionados, requieren que el comprador tenga unas condiciones de ahorro que gran parte de la población afectada no está en condiciones de cumplir (Machado, 2013).

El modelo constructivo de estos programas oficiales, ofertados bajo la lógica del mercado, es Ciudad Victoria, un complejo urbanístico en que las viviendas tienen 38 metros cuadrados y dos habitaciones (insuficientes para el tamaño habitual de las familias populares); además, quienes tienen posibilidades de ser realojados se ven obligados a prescindir de sus pequeños animales de granja y de los cultivos que anteriormente paliaban en parte las necesidades de alimentación diaria. Los planificadores del Estado, popular e irónicamente conocidos como "planificadores de la felicidad", denominan eufemísticamente a esta masa de viviendas uniformes, a todas luces guetos diseñados para la población de escasos recursos económicos, como ciudades del buen vivir.

En una entrevista realizada al calor de los sucesos, Lorena Zárate, especialista internacional en modelos urbanísticos, sostiene que "el modelo aplicado en Miduvi tuvo sus orígenes en Chile durante la época de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Se mejoró después y fue promovido por el Banco Mundial" (*ibid.*). De

hecho, un año antes de los primeros desalojos de Monte Sinaí, en mayo de 2012, Ecuador había suscrito un contrato de préstamo por 75 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a efectos de implementar el llamado Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a realizarse en un plazo de cinco años, para una intervención en las 1 300 hectáreas que comprende a la zona. Sin embargo, Zárate señala que

> investigaciones hechas al respecto, indican que con una inversión de aproximadamente 10 000 dólares por vivienda y con la construcción de la propia gente que va a habitar posteriormente en ellas, es posible construir hogares que alcanzan hasta los 90 metros cuadrados, generando a su vez tejido social organizado y coparticipación con los moradores en el modelo de ciudad a desarrollarse.

Con base en lo anterior, los gobiernos progresistas deberían considerar que, cuando se proyecta y planifica la ejecución de vivienda social, ésta debe ser considerada para el bien de los estratos humildes que van a utilizarlas, y no con base en las exigencias del sector privado que, a través de la estandarización del sistema constructivo y la pequeña dimensión de los hogares, conforman guetos para pobres con los cuales, a través de los bajos salarios de la mano de obra utilizada, logran un beneficio económico alto pese a los bajos precios que por ella perciben.

Como puede observarse, también en los modelos de desplazamiento de población y rediseños especulativos de los grandes núcleos urbanos, sean los gobiernos del tinte que sean, podemos encontrar paralelismos y significaciones.

### b) Las políticas sociales al servicio del capital financiero

Los grandes bancos de Brasil están obteniendo las mayores ganancias de su historia. En el tercer trimestre de 2015, Itaú, Bradesco y Banco do Brasil tuvieron ganancias de 15%. En los ochos años de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o sea en pleno periodo neoliberal, las ganancias de los bancos crecieron entre 10 y 11%. En los ochos años de Lula (2003-2011) sus ganancias llegaron a 14%. Esta paradoja merece una explicación.

El economista Carlos Lessa, ex presidente del BNDES bajo el primer gobierno de Lula, explica que los gobiernos del PT priorizaron el endeudamiento de las familias, lo que significó valorizar el consumo privado por encima del público. "En lugar de mejorar las inversiones en salud, educación, infraestructura y movilidad urbana, seguridad pública, la masa de recursos que fue posible obtener a partir del *boom* de los emergentes y de la prosperidad en ese periodo (2007-2010), llevó a Brasil al camino del creciente endeudamiento privado" (Lessa, 2015).

Es un modelo que impulsa el consumo y que llevó a que se compraran coches hasta en 60 cuotas con un interés real muy alto que benefició a los bancos, explica Lessa en una larga entrevista donde analiza este modelo fallido. El tipo de desarrollo económico impulsado llevó a que la flota automovilística creciera 9% al año, pero sin tocar la infraestructura urbana. Esa política ganó la simpatía de una población que deseaba consumir porque nunca tuvo coche ni bienes de consumo, ni vacaciones con viajes ni ropa de calidad. Así llegamos a una realidad en la que el programa Bolsa Familia ayuda a los más pobres pero a la vez potencia las ganancias del sector financiero.

Su conclusión es que fue una política equivocada que ahora está cosechando rechazos.

> Se puede reavivar la actividad económica por el endeudamiento de los hogares, pero sólo se garantiza el futuro aumentando el volumen de empleo de calidad, para ampliar la capacidad de producción. Lo que ocurrió en Brasil en los últimos años fue la atrofia y el desmantelamiento de la actividad industrial y el crecimiento de la actividad agroindustrial [...] Es claro y evidente que cuando una economía crece, el volumen de crédito y la deuda de todas las personas, las familias, las empresas y el público también. Esto es natural y es algo que viene con toda la trayectoria de crecimiento, pero tirar de la economía a través de deuda de los hogares es un concepto erróneo (*ibid.*).

Al no haberse realizado reformas estructurales, que son las que pueden disminuir la enorme desigualdad y cambiar la vida de las personas, cuando llega el fin del ciclo de los precios altos de los *commodities* el crecimiento se frena, caen los ingresos, el nivel de

empleo y los salarios, y las familias ya no pueden pagar sus deudas. Tampoco el Estado, que debe recortar sus gastos.

Otras críticas podrían sumarse: fomentar el consumo como forma de integración despolitiza a los sectores populares. Pero ése era, tal vez, el objetivo del gobierno Lula, que pretendió contentar a los de abajo y también a los de arriba, buscando evitar el conflicto social.

Para completar el cuadro trazado por el economista Lessa es necesario comprender cómo las políticas sociales alentaron el consumo de masas y el endeudamiento masivo, beneficiando al sistema financiero y volviendo más dependientes a los sectores populares que pretendían ayudar. Una síntesis del análisis de la economista Lena Lavinas:

> La política social sirve para consolidar el modelo de consumo del socialdesarrollismo, que consiste en promover la transición hacia una sociedad de consumo de masas, a través del acceso al sistema financiero. La novedad del modelo socialdesarrollista es la de haber instituido la lógica de la financierización en todo el sistema de protección social, ya sea mediante el acceso al mercado de crédito, ya sea vía la expansión de los planes de salud privada, crédito educativo, etcétera. Se asiste de este modo a un proceso de financierización acelerada, que se sirve del sistema de protección social para vencer la barrera de la "heterogeneidad estructural", que frenaba en América Latina la expansión de la sociedad de mercado (Lavinas, 2015: 34).

Llega a esas conclusiones luego de analizar cómo el crecimiento del crédito está atado a las políticas sociales que llevan al endeudamiento de las familias y a una mayor vulnerabilidad de las clases populares. Considera que el sistema de seguridad social (previsión, asistencia y salud) creado por la Constitución de 1988 es una pieza clave en la transición de Brasil a una sociedad de consumo, porque facilita el acceso al sistema financiero. El 60% del gasto social son transferencias monetarias, "mientras que la provisión de servicios desmercantilizados sigue siendo minoritaria y por debajo de lo establecido por la ley" (*ibid*.: 37).

La generalización de los beneficios previsionales ha contribuido más a la reducción de la pobreza que los beneficios asistenciales focalizados: sacó a 21 millones de la pobreza y a 19

millones de la miseria, frente a 7 y 4 millones respectivamente. Por el contrario, el programa Bolsa Familia no es un derecho establecido, pues no todos los elegibles para ser beneficiarios están cubiertos. Aunque el programa atiende a 14 millones de familias con el traspaso de 170 reales por mes (45 dólares), quedan fuera del mismo entre 800 mil y 2.5 millones de familias, porque el programa "no está sujeto a las mismas normas que regulan otros beneficios sociales, como la indexación anual de la línea de pobreza y el valor de los beneficios a las familias, ambos sujetos a la discreción del gobierno federal" (*ibid*.: 40). En suma, éste puede se considerado un programa de focalización y no de derechos. La caída de la pobreza de 34% de la población en 2001 a menos de 10% en 2013, aun siendo muy positiva encubre que no han adquirido derechos y que los beneficios pueden ser escatimados por una decisión gubernamental.

Un comentario aparte merecería el Sistema Unificado de Salud (SUS), que debería ser único, universal y gratuito pero está desfinanciado y empuja a las familias hacia el sector privado. De hecho, el gasto privado de las familias en salud representa 5% del PIB, mientras el gasto del SUS es de 3.8%; en el sector privado se encuentra 62% de las camas y dos tercios de los equipos para diagnóstico y tratamiento, además de 64% de los equipos de resonancia magnética, pese a que el sector incluye sólo a 25% de la población. Por eso, entre 2003 y 2013 los titulares de planes privados crecieron 41%, lo que avala la opinión de que las políticas públicas en el área "se direcciona a fortalecer el capital financiero y avanzar en la mercantilización plena de la salud" (*ibid*.: 44). En el área educativa también existe la tendencia, aunque en menor escala, hacia la mercantilización de lo que se supone es un servicio público.

Desde 2003, bajo las gestiones del PT se impulsó una consistente expansión del crédito; ésta comenzó con crédito consignado, que se descuenta de la nómina salarial; en 2004 se extendió a jubilados y pensionistas, y luego a los beneficiarios de Bolsa Familia, con lo que se consiguió el acceso al mercado crediticio de los sectores más pobres. El círculo de la inclusión financiera, que según Lavinas es el nuevo mantra del neoliberalismo, se cierra con el Proyecto de Inclusión Bancaria. que llevó los servicios financieros al público de los

programas de combate a la pobreza. La expansión fue asombrosa: en 2001 el crédito representaba 22% del PIB, y en 2014 superaba el 58%. Entre los más pobres, casi se duplicó el número de los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció 80% entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó 140% (*ibid.*: 47).

Pero en eso llegó la crisis. Y con ello aumentaron las tasas de interés, que en el comercio superan 5% mensual. El resultado es catastrófico: en 2015, el endeudamiento de las familias con el sistema financiero compromete 48% de sus ingresos frente a 22% en 2006. Por eso las fabulosas ganancias de la banca. Entre la clase media, la llamada Clase C por ingresos, que concentra a la mayoría de los brasileños, 65% de los ingresos van al pago de servicios financieros. ¿Hay o no hay motivos para la protesta, la rabia y la bronca cuando después de 12 años de progresismo son prisioneros del capital financiero?

El futuro inmediato es un gigantesco *default* de las familias, agravado en el caso de las más pobres, porque pierden lo poco que tienen. Entre 2003 y 2013, la tasa de acceso al saneamiento entre el 10% más pobre pasó de 25% a 35%, un aumento más que moderado. Pero en el mismo periodo el uso de celulares pasó de 10% a 80%, y el consumo de electrodomésticos importados creció 34%.

Entre las múltiples conclusiones que pueden extraerse de esta realidad se impone una: las políticas sociales monetarizadas y no universales del progresismo brasileño beneficiaron al capital financiero, al incluir en ese sector a millones de personas que antes no tenían acceso al crédito; esto volvió más vulnerables a los más pobres, haciéndolos más dependientes y sometidos a la gran banca, lo que parece responder a la necesidad del capitalismo brasileño en su actual fase de acumulación.

Hacen falta estudios en otros países de la región para comprobar si el "modelo brasileño" es el mismo que sigue el resto del progresismo, aunque las impresiones recogidas en los casos de Argentina, Ecuador y Uruguay permiten suponer que van por el mismo camino.

### c) Más represión para sostener los privilegios

Nadie mejor que Michel Foucault para ayudar a comprender la

aparición de los mecanismos sistémicos de violencia que fueron desarrollándose en diferentes épocas, y mediante los cuales se mantiene una tendencia hacia un modelo cada vez más represivo a la par que sutil. Se trata —por parte del poder— de implementar una nueva disciplina colectiva, que conlleva el control, cada vez más estricto, sobre las personas con base en un discurso científico (técnico-jurídico-legal) que lo legitima.

Basta con ver la amplia masa legislativa implementada en varios de estos países en los últimos años, que incorpora obligaciones disciplinarias integradas por los mecanismos modernos de seguridad, para advertir cómo se han ido alistando los mecanismos de control social y disciplinamiento desde el Estado "protector". Así, y siguiendo a Foucault, "a primera vista y de manera un tanto esquemática: la soberanía se ejerce en los límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de los individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el conjunto de una población" (Foucault, 2011: 27).

En todos los países de la región sudamericana se registra un aumento de la represión, tanto en los países con gobiernos conservadores como en aquellos cuyos gobiernos son progresistas. La represión asume formas distintas en cada país, pero la regla es que se registra un recrudecimiento de la represión policial y de cuerpos especiales contra los movimientos sociales, la protesta colectiva y las expresiones de disidencia. Lo común en todos los países es el dominio del modelo extractivo que genera exclusión, y la creciente reactivación de los movimientos. Resulta llamativo que bajo ciertos gobiernos progresistas, luego de algunos años en los que hubo un descenso de la represión, en cuanto la sociedad comienza a reactivarse y retorna la protesta callejera, la represión gana nuevos ribetes.

Los casos más notables de ese viraje son los de Argentina y Brasil. En el primero, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, se observó un claro avance en el sentido de evitar la represión de las numerosas manifestaciones y cortes de rutas y calles. En paralelo, hubo también un importante ascenso de la represión en Ecuador, Bolivia y Uruguay, en cada país con sus propias características.

En Ecuador asistimos a una importante represión sobre el movimiento indígena y los movimientos sociales en general, lo que ha sido una constante bajo el gobierno de Rafael Correa, pues desde

el primer momento ha tenido conflictivas relaciones con la Conaie y otras organizaciones sociales y sindicales. El caso ecuatoriano es quizás el más conocido de criminalización de la protesta bajo gobiernos progresistas. Tras la aprobación, el 3 de diciembre de 2015, de una enmienda constitucional por la cual se dota a las fuerzas armadas de competencias en materia de seguridad ciudadana, todo apunta a que la represión se incrementará.

El último episodio significativo fueron los hechos de represión policial y militar desarrollados como consecuencia del "levantamiento indígena" que tuvo lugar entre el 2 y 26 de agosto de 2015, cuando se movilizaron decenas de colectivos indígenas y otras fuerzas sociales de oposición al gobierno de Correa. Según un informe del Colectivo de Investigación y Acción Sicosocial Ecuador, hubo 229 "agresiones, detenciones, intentos de detención, y allanamientos en todos los territorios donde se han realizado movilizaciones y protestas", en especial en las provincias de la Amazonía y la Sierra sur del país (PLAN V, 2015).

Aproximadamente dos de cada tres personas víctimas de violencia estatal fueron detenidas, lo que da cuenta de una estrategia de control de la protesta, según el informe. Los cargos que se han formulado son "sabotaje y terrorismo, paralización de servicios públicos, ataque o resistencia a la fuerza pública, posesión de armas, e incitación a la discordia", aunque la mayoría de los acusados han sido procesados por paralización de servicios públicos (57) y ataque o resistencia a la fuerza pública (42). Sobra indicar que la protesta estuvo protagonizada por sectores populares, lo que significa que la inmensa mayoría de los procesados son pobres.

En el caso de Ecuador, la historia represiva viene siendo una constante característica del régimen correísta. Su primer antecedente se remonta a unos días antes de instalarse la Asamblea Constituyente, en los llamados "sucesos de Dayuma" —finales de noviembre de 2007—, cuando diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la violación de tales derechos en una acción represiva con participación de las fuerzas armadas y auspiciada por el gobierno contra los pobladores amazónicos movilizados en reivindicación de mejoras sociales e infraestructuras para su pequeña población.

El Defensor del Pueblo anterior —momentos antes de tener que abandonar su cargo— en diciembre de 2011 reconocería textualmente en un informe: "En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando éstas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano" (Defensoría Del Pueblo, 2011).

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la criminalización de la protesta social ocurre cuando "la justicia se convierte en un arma de represión contra los defensores del derecho a la tierra en lugar de un mecanismo de cumplimiento de los estándares de derechos humanos" y adopta diferentes modalidades, como el hostigamiento judicial a líderes de movimientos y organizaciones o miembros de comunidades mediante diversos tipos penales, la adopción de medidas administrativas en contra de las organizaciones, todo lo cual, frecuentemente va acompañado de discursos que deslegitiman su labor" (Observatorio FIDH/OMCT, 2014). Esto es exactamente lo que sucede en este pequeño país andino.

El informe *Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos del Ecuador*, elaborado en 2015 por la misma FIDH, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), identifica —analizando diversos casos de procesamiento judicial a diversos dirigentes de comunidades y nacionalidades indígenas— la estrategia de criminalización social aplicada por el gobierno de Correa contra las organizaciones y líderes sociales que manifiestan resistencia al agresivo modelo de desarrollo extractivista.

Ese mismo informe hace alusión a cómo el derecho penal es utilizado para la criminalización generalizada de defensores de derechos en represalia a la labor que desempeñan, a cómo se ha reducido el espacio para la acción de la sociedad civil en el marco de la protesta y la reivindicación, y a cómo aumenta y se agrava la tendencia a la criminalización de la protesta social, afectando particularmente a las mujeres y las comunidades indígenas.

Las acciones de criminalización y represión contra la protesta social auspiciadas por el régimen correísta son una clara muestra de la acelerada involución del proceso político que se vive en Ecuador,

pues abiertamente entran en contradicción con el derecho a la "resistencia frente a acciones u omisión del poder público" que reconoce el texto constitucional actualmente vigente y aprobado en referéndum popular por el mismo pueblo ecuatoriano. De hecho, la Asamblea Constituyente ya había insistido en las amnistías otorgadas en 2008 a aproximadamente 400 defensores de la naturaleza, y en la necesidad de tener en cuenta el carácter político de sus actos de resistencia: "son actos políticos en la medida en que se orientan al bien público, aunque quienes los enfrentan los combaten caracterizándolos como delictivos. Hay que distinguir, pues, los actos políticos de protesta, en ejercicio del derecho de resistencia, con diversos tipos de delitos comunes" (Asamblea Constituyente, 2011).

En paralelo, en las comunidades indígenas amazónicas del sur del país se vive el escándalo generalizado; ello responde a la falta de resultados en materia investigativa por parte del Ministerio del Interior y a la impunidad derivada en los casos de los asesinatos de José Tendetza, quien fue presidente de la comunidad shuar Yanúa Kin de Zamora Chinchipe, Fredy Taish y Bosco Wisuma, todos ellos destacados opositores al modelo extractivo implementado por el correísmo.

En la actualidad, los casos recogidos en el informe de la FIDH, CEDHU e INREDH, entre tantos otros expedientes judiciales abiertos contra defensores de la naturaleza y los territorios ancestrales en el país, apuntan a acusaciones de rebelión, sabotaje e incluso terrorismo organizado como estrategia de disciplinamiento social adoptada por el gobierno correísta para atemorizar las disidencias y resistencias sociales que se generan en las localidades afectadas por la actividad extractiva. Todo ello en un país donde su mandatario hace afirmaciones tan necias como "¿dónde está en el Manifiesto Comunista el NO a la minería? Tradicionalmente los países socialistas fueron mineros, ¿qué teoría socialista dijo NO a la minería? Son los seudointelectuales posmodernistas los que meten todos estos problemas en una interminable discusión. No hay dónde dudar, salir del modelo extractivista es erróneo" (Punto Final, 2012).

Por su parte, el ex secretario general del partido gobernista y ex secretario particular del mandatario —hoy premiado como embajador del Ecuador en la UNESCO—, al ser cuestionado por la falta de independencia del poder Judicial respecto al Ejecutivo, afirma:

"Cuando se dice aquella división de poderes, cuando se dice aquella trilogía de Montesquieu… ¿o es acaso hora de preguntarse en la historia política si es que eso es una ley divina?, ¿quién determinó que eso es lo que tiene que existir?" (El Universo, 2012).

Como se puede comprobar con base en las aseveraciones anteriores, el régimen correísta no se rige por una ideología; el correísmo en sí mismo carece de ideología, se implementa con base en una tecnología de poder. Para ello necesita poner en marcha una lógica de disciplinamiento que normalice a la sociedad, que descomponga a sus individuos, que fije los procedimientos de adiestramiento progresivo y control permanente, mientras califica de ineptos o incapaces a los sectores no domesticables.

En Bolivia, el gobierno realizó el desalojo de las sedes de CIDOB y Conamaq apoyado en la policía, para colocar a sus propios partidarios en los cargos de dirección. Cuando comenzó el gobierno del MAS se alcanzó el Pacto de Unidad entre las principales organizaciones campesinas e indígenas, que fue la plataforma base de apoyo del gobierno: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Conamaq, CIDOB y Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", entre otras.

A fines de 2011, CIDOB y Conamaq, que habían apoyado la marcha contra la carretera que atravesaría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) decidieron abandonar el Pacto de Unidad, considerando que "el Poder Ejecutivo ha parcializado la participación de las organizaciones indígenas, valorando más que todo a las organizaciones afines al MAS, con el propósito de que afecta de forma directa a nuestros territorios, culturas y nuestros recursos naturales" (CIDOB/Conamaq, 2013).

Desde ese momento, el gobierno de Evo Morales intentó neutralizar a las dos principales organizaciones sociales críticas con el proceso de cambios. En junio de 2012, CIDOB denunció "la intromisión del Gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia" (Zibechi, 2014). Un grupo de disidentes, con apoyo del gobierno, desconoció a las autoridades y convocó una "comisión ampliada" para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de Conamaq "afines al MAS" tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla (*ibid.*). El comunicado de la organización asegura que el golpe contra Conamaq se dio para "aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada". La particularidad del gobierno de Evo Morales consiste en enfrentar y dividir a las organizaciones populares, movilizando a las afines para atacar a aquellas que discrepan con sus políticas.

En Uruguay la protesta social registró un pico importante en agosto de 2015 a raíz de una serie de huelgas y paros en la enseñanza, protagonizados por docentes y estudiantes que paralizaron escuelas, colegios y universidades, en demanda de aumentos en las partidas de educación cuando el parlamento debatía el presupuesto. El gobierno de Tabaré Vázquez decretó la esencialidad de los servicios educativos, una medida que supone la pérdida del empleo de los huelguistas, para quebrar la huelga docente con sumarios y destituciones masivas.

Fue la primera vez desde 1985, que se imponía semejante medida, a la que ni siquiera apelaron los gobiernos neoliberales. La respuesta fue drástica: miles de maestras se concentraron ante la sede sindical en clara señal de desacato al autoritarismo; la central sindical decidió un paro general y una marcha de 50 mil docentes y estudiantes gritó contra el decreto de Vázquez, mientras 50 centros de estudio eran ocupados. El Frente Amplio se dividió. Sólo la derecha respaldó sin fisuras al presidente.

Los casos de Brasil y Argentina deben ser analizados con cierto detalle, no sólo por la importancia de esos países sino porque muestran pautas distintas como modelos represivos, aunque pueden considerarse en algún punto como complementarias.

El informe anual 2015 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entiende que hay una regresión en la actuación del Estado ante los cortes de rutas. Según este análisis, desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner (2003) hubo una política diferente hacia las protestas, optando por el modelo de disuasión antes que el represivo y prohibiendo la portación de armas de fuego a

los policías que actuaban en las manifestaciones. De hecho, entre 2003 y 2010 no hubo muertos ni heridos graves en las protestas por parte de las fuerzas federales (CELS, 2015: 290).

Sin embargo, en 2010 se produjo un viraje, ya que las policías federal y metropolitana provocaron dos muertos durante la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre. El periodo en el que se procuró "afectar el autogobierno policial", a través de la definición de un protocolo de "criterios mínimos" para la actuación policial en las manifestaciones, se interrumpió definitivamente en 2013 y fue una señal regresiva para los cuerpos encargados de la represión. En 2014, el informe establece que "las fuerzas de seguridad federales incumplieron cada uno de los estándares de actuación que durante más de una década se habían incorporado a sus normas internas y a su doctrina" (*ibid*.: 292). En opinión del citado centro, la política de no represión fue inédita y fue uno de los mayores avances en materia de derechos humanos durante una década, aunque reconoce "su baja institucionalización normativa, la inestabilidad de su cumplimiento en el tiempo y en diferentes zonas del territorio nacional, y la despareja incorporación de los principios en la formación de los agentes de seguridad" (*ibid*.: 293).

No obstante, otros análisis no parecen coincidir con esta apreciación. El informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), bajo el título *Una sociedad de privilegios se sostiene con represión*, recoge los casos de "gatillo fácil" (asesinatos policiales), muertes en cárceles y comisarías así como las víctimas de la represión de la protesta. Hubo 4644 asesinados hasta noviembre de 2015: 49% tenían entre 15 y 25 años, 3%, 14 o menos, y 27% estaba entre los 26 a 35 años. Casi la mitad, 46%, son casos de "gatillo fácil", y 39% fueron muertos mientras estaban detenidos en una dependencia policial.

Lo más sintomático y realmente preocupante es el cuadro donde se registra la evolución de asesinatos policiales por gestión del gobierno. En los 10 años del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) quedó registrado un promedio de 68 asesinados a manos de la policía cada año. Su gobierno fue salvajemente neoliberal, privatizó todas las empresas estatales, que fueron entregadas (casi regaladas) a empresas extranjeras. Fue un gobierno represivo y antipopular.

Pero en los 12 años de Kirchner y Fernández (2003-2015), hubo un promedio de 246 muertos por la policía por año, o sea cuatro veces más (véase cuadro).[2] Sin embargo, estos gobiernos se tomaron en serio los derechos humanos, pasaron a retiro a una parte de la cúpula policial por corrupción y se empeñaron en no reprimir, basados en lo que el CELS denomina "control político" de las fuerzas de seguridad. Esto debe tener una explicación que, hasta ahora, no parece sencilla.

La primera impresión es que, cuando se produce un salto en la represión, como el sucedido en torno al año 2001 por el ascenso del movimiento popular, los niveles represivos no vuelven atrás. En efecto, los muertos bajo el gobierno de Menem crecieron respecto a la década anterior (Correpi destaca que hubo subregistro); luego de la hiperinflación de 1989 y las luchas contra las privatizaciones, las cifras nunca volvieron a ser las de la década de los ochenta. Durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández hubo una cantidad superior de casos de "gatillo fácil" de los que había en la década de los noventa. Varios años se registraron más muertos que durante el terrible 2001, en que se produjeron el levantamiento del 19 y 20 de diciembre, miles de cortes de rutas y cientos de saqueos a supermercados.

Hubo un año de quiebre que aparece muy claro: 2010. Durante este año ocurrió un salto de 231 muertos en 2009, cifra alta con respecto a los años anteriores pero aún dentro de los parámetros, a 291, es decir, un crecimiento de 25%. En este punto hay una confluencia entre los análisis del CELS y Correpi, ya que el relanzamiento de la protesta social puede haber estado en la base de la mayor represión con muertes. Pero Correpi destaca que existe una tercerización represiva a través de las "patotas" —grupos vandálicos de civiles—, que han jugado un papel importante en la represión, y el amedrentamiento y acoso de manifestantes y opositores. Este aspecto parece relacionado con el autogobierno de la fuerza policial que se ha querido acotar pero que, con el paso de los años, mostró sus límites.

2 Los datos de 2015 abarcan sólo diez meses y medio, pese a lo cual ya se han registrado 227 muertes.

**ASESINADOS POR LA REPRESIÓN ESTATAL POR GESTIÓN 1983-2015**

| GESTIÓN | FECHA | CASOS TOTALES | % | CASOS POR AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **Alfonsín** | Dic 83/jul 89 | 116 | 2.50 | 21 |
| **Menem** | Jul 98/dic 99 | 706 | 15.20 | 68 |
| **De la Rua/Álvarez** | Dic 99/dic 01 | 482 | 10.38 | 241 |
| **SAA/Duhalde** | Dic 01/may 03 | 265 | 5.71 | 175 |
| **N. Kirchner** | May 03/dic 07 | 988 | 21.27 | 215 |
| **C. Fernández** | Dic 07/dic 015 | 2 082 | 44.83 | 260 |
| **Gestiones K** | May 03/dic 015 | 3 070 | 65.1 | 246 |
| **Totales** | Dic 83/dic 015 | 4 644 | 100 | 154 |

**Fuente:** Correpi.

En Argentina existe una violencia policial focalizada en los sectores populares, como la que sucede en Córdoba, donde un informe de la Universidad aporta datos tremendos: entre 2003 y 2013 el personal policial pasó de 13 000 a 27 000 efectivos y los detenidos crecieron de modo exponencial, de 8 960 en 2005 a 73 100 en 2011, la inmensa mayoría en aplicación del Código de Faltas con la utilización de figuras como "merodeo" y escándalo en la vía pública (Brocca *et al.*, 2013). En una ciudad de un millón de habitantes representa 200 detenidos por día. Alrededor de 60% de los detenidos son pobres que viven en la periferia; un porcentaje muy alto llevaban gorras o pelos largos tipo rastas, y casi todos están convencidos de que fueron detenidos por su aspecto, lo que se conoce como "portación de rostro", o sea por ser jóvenes, de piel oscura y pobres. Las detenciones suelen hacerlas miembros del Cuerpo de Acción Preventiva que no tiene una estructura dependiente de las comisarías, sino un mando propio y centralizado.

En Brasil se registra una represión histórica de carácter racial y clasista, y una nueva represión contra la protesta social que se disparó a raíz de las jornadas de junio de 2013. Además está en proceso de aprobación una ley antiterrorista que criminaliza las protestas callejeras, restringiendo seriamente los derechos básicos de manifestación y expresión.

El mapa de la violencia señala que entre 2002 y 2013 las muertes violentas de blancos cayeron 24.8%, mientras las de negros

crecieron 38.7%, aunque no hubo cambios fundamentales en la tasa general de homicidios. En 2002 moría 73% más de personas negras que blancas, pero en 2013 la brecha se elevó a 146.5% más de negros asesinados, lo que indica que la tasa de muertes se ha duplicado entre la población pobre, negra y favelada (Waiselfisz, 2015: 184).

A la hora de explicar este comportamiento contradictorio, el informe encargado por la Secretaría de la Presidencia destaca tres factores: en primer lugar, la creciente privatización de la seguridad, paralela a la que afecta la salud y la educación, lo que favorece a las clases altas blancas que viven en barrios prósperos; en segundo lugar, mientras la salud y la educación entran en el debate electoral, la cuestión de la seguridad de los sectores populares es invisibilizada por los medios, que colocan en lugar destacado la seguridad de las zonas de clases medias y altas; y, por último, la naturalización de la violencia contra pobres, negros, mujeres, niños y adolescentes, todo ello con un claro papel disciplinador.

En sus conclusiones el informe establece que, aunque no hay cambios en los datos generales, se produjeron "profundas transformaciones en la lógica interna de la violencia: la creciente selectividad de los que van a ser asesinados" (*ibid*.: 150).

Por otro lado, se registran cambios de fondo en las formas de represión de la protesta social. La primera constatación es que junio de 2013 fue un parteaguas que instaló la protesta en las calles de Brasil, algo que no había sucedido desde que el PT ocupó el gobierno en 2003. Durante el Mundial de Futbol de 2014, el Estado brasileño criminalizó a quienes intentaban manifestarse, cercando las concentraciones con una cantidad muy superior de policías e impidiendo durante horas la movilidad de quienes quedaron dentro del cerco.

Desde que el gobierno de Lula aprobó la Estrategia Nacional de Defensa en 2008 se institucionalizó la participación de las fuerzas armadas en operaciones internas. En 2013, el Ministerio de Defensa de Brasil difundió el *Manual de Garantía de la Ley y el Orden*, en el que se define la modalidad de intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna. Aun teniendo el cuenta que el manual contiene varias páginas en blanco cuyo contenido no ha sido difundido,

establece claramente que las fuerzas armadas van a intervenir para restaurar el orden contra "fuerzas oponentes".

A la hora de definir qué fuerzas son las consideradas como oponentes, el manual señala: "movimientos u organizaciones" y "personas, grupos de personas u organizaciones actuando de forma autónoma o infiltrados en movimientos"; cuando detalla las "principales amenazas", las nombra como "bloqueo de vías públicas", "disturbios urbanos", "invasión de propiedades e instalaciones rurales o urbanas, públicas o privadas", "paralización de actividades productivas" y "sabotaje en los locales de grandes eventos", entre las más destacadas (Ministério da Defesa, 2013). En suma, buena parte del repertorio de acción de los movimientos sociales es delito.

La ONG Artigo 19 monitoreó 740 manifestaciones entre enero de 2014 y junio de 2015 en São Paulo y Rio de Janeiro, destacando que se pasó de la violencia generalizada contra los manifestantes de junio de 2013 a una estrategia que consistió en "la tentativa de impedir las protestas antes de que se inicien" (Artigo 19, 2015: 17). Para eso fueron desplegadas nuevas técnicas como el *kettling* (cerco o cadena en torno a los manifestantes) y la participación de la llamada Tropa del Brazo o Tropa Ninja, agentes entrenados en arte marciales para paralizar a los que protestan. El *kettling* es una técnica que viola incluso los principios del Manual de Control de Disturbios de la Policía Militar brasileña. En dicho instructivo, cuando se trata el tema se indica: "La multitud no debe ser presionada contra obstáculos físicos u otra tropa, pues esto conducirá a un confinamiento de consecuencias violentas e indeseables" (Manual de Control de Disturbios Civiles de la Policía Militar, ítem 3.2.1). Estas técnicas volvieron a ser puestas en práctica en las primeras movilizaciones de 2016, convocadas por el Movimiento Passe Libre en São Paulo en protesta ante las nuevas subidas de tarifas del transporte público.

Además se apela a la intimidación institucional del Estado a través de amenazas y de la intervención de la justicia incluso antes de producirse las manifestaciones, deteniendo a presuntos sospechosos de cometer actos violentos. Esta modalidad represiva afecta también a los periodistas que cubren estas acciones colectivas. En un boletín publicado el 14 de julio de 2014, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) indicaba que

210 periodistas habían sido violentados desde mayo de 2013, 169 de ellos por policías.

El informe destaca el contraste entre las masivas represiones de 2013 y las más selectivas, pero implacables, de 2014, con la tolerancia mostrada hacia las acciones de la extrema derecha que ganó las calles contra la presidente Rousseff en 2015. En efecto, en las masivas manifestaciones contra el gobierno no hubo represión. En la protesta de São Paulo del 15 de marzo participó un grupo de extrema derecha con artefactos explosivos y de combate, pero la policía decidió actuar específicamente contra ese grupo sin afectar a los demás manifestantes ni aplicar métodos agresivos contra los violentos (Artigo 19, 2015: 18).

El sociólogo Rudá Ricci sostiene que uno de los principales legados de la Copa Mundial de Futbol es el deterioro del Estado de derecho y la legitimación de los abusos de la olicía Militar, que esta vez no se limitó a atacar a pobres y negros de las periferias y la emprendió contra estudiantes universitarios de clase media, a través de "órdenes de búsqueda y captura expedidas como forma de intimidación", para impedir la movilización. Considera que "hay fuertes señales de cultura fascista en esta ofensiva contra los derechos democráticos fundamentales" (Ricci, 2014).

En la favela la represión anuló siempre al Estado de derecho; pero ahora esa lógica se desborda más allá para impedir las protestas, generar un clima de temor que inhiba a los militantes sociales, advertidos de que todo el peso del Estado les caerá encima.

Además de la continuidad de prácticas represivas contra la población negra pobre, que la campaña "Reaja ou será morta, Reaja ou será morto"[3] califica como un genocidio contra el pueblo negro, y de la nueva y sistemática represión contra quienes protestan, tenemos la aprobación de la Ley Antiterrorista en el Senado en octubre de 2015 con apoyo del gobierno de Rousseff y una parte del PT. Un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas criticó el texto aprobado, considerando que puede restringir libertades fundamentales por tener una definición muy amplia de terrorismo (Opera Mundi, 2015).

Este miedo a los ciudadanos es, para el filósofo Vladimir Safatle, una constante en los "Estados democráticos" que "intentan por

3 Véase http://reajanasruas.blogspot.com.uy/

todos los medios convertir la revuelta popular en crimen con penas de más de 20 años de cárcel" (Safatle, 2015). En su opinión, la ley es una respuesta directa a las movilizaciones de junio de 2013 y al temor de que se repitan. Lo novedoso es que un partido de izquierda que sufrió la represión del régimen militar, haya tomado la iniciativa de fortalecer los aparatos represivos y la legislación que avala su accionar, casi indiscriminado, contra la protesta callejera.

En *Estado de excepción* (un libro publicado en 2004 de rigurosa actualidad), el filósofo italiano Giorgio Agamben señala que en todas las democracias occidentales "la declaración del estado de excepción está siendo sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno" (Agamben, 2005: 44). Tanto las crisis económicas como los megaeventos se han convertido en laboratorios para dar un salto hacia adelante en el control policial-judicial. Siguiendo la expresión de Walter Benjamin, el secuestro de los derechos, la criminalización de la protesta social, junto a un modelo de militarización que no es ni transitorio ni accidental, muestra que vivimos en un "estado de excepción permanente".

* * *

Lo que entró en crisis es un proyecto que buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con buenos modales. El resultado de los años dedicados a gerenciar el modelo fue el ascenso de nuevas proles de gestores que se incrustaron en los altos escalones del Estado, ya sea en las administraciones centrales, las empresas estatales o en alianza con empresas privadas. La crisis del progresismo devela lo que el discurso pretendió enmascarar: cómo las políticas sociales, bajo el argumento de la justicia social, el combate a la pobreza y la desigualdad, se limitaron a cooptar a los dirigentes populares para intentar domesticar los movimientos de los más pobres.

Las políticas sociales fueron necesarias para poder implementar un objetivo impronunciable: establecer alianzas entre las élites emergentes y las clases dominantes tradicionales, para gobernar a los subalternos con las menores resistencias posibles. Decir gobernar no es

adecuado por insuficiente. Se trata de la modernización capitalista de la sociedad que pasa por integrar a los de abajo limando sus diferencias culturales, lo que Aníbal Quijano denomina heterogeneidad estructural de América Latina. La promoción del consumo entre los sectores populares y la inclusión financiera de los sectores populares fue tanto como abrir las puertas a un modo de gobernabilidad que nunca había calado tan hondo en las camadas más sumergidas, para adocenarlas, por un lado, y lubricar la acumulación de capital, por otro.

Bajo el discurso de la participación ciudadana y la incorporación de los sectores históricamente olvidados de nuestra sociedad, estos regímenes entendieron la democracia de forma minimalista, como meros procesos electorales, vaciando de contenidos —mediante políticas clientelares— a las organizaciones y movimientos sociales que se habían empoderado durante la etapa de resistencia al neoliberalismo, produciendo ciudadanías inactivas, en lugar de promover sociedades concientizadas y libres de las inseguridades e incertidumbres que el capitalismo difunde.

El fenómeno de feminización de varias presidencias en la región da cuenta de cierto cambio cultural en la opinión pública y de mayor confianza en la capacidad de gobernar de las mujeres; a pesar de ello, la igualdad de género sigue siendo un horizonte lejano en nuestras sociedades. La cultura patriarcal continúa predominando en la región y se mantienen las brechas históricas de género en la participación en la toma de decisiones, las organizaciones políticas, las instituciones públicas, los cargos jerárquicos y en los salarios. En los países en que han gobernado o gobiernan mujeres (Argentina, Brasil y Chile), el liderazgo presidencial contrasta con la escasa presencia de mujeres en órganos electivos, en las dirigencias de los partidos políticos y en otros ámbitos de autoridad. El poder patriarcal está afianzado en los partidos políticos y la sociedad en general, lo cual se expresa en las prácticas políticas más allá de quien ocupe el sillón presidencial. Los gobiernos progresistas poco han hecho por transformar esas realidades y superar la persistencia de elementos androcéntricos en la cultura y las prácticas de las organizaciones políticas de la región. La pobreza y la exclusión siguen teniendo rostro indígena, negro, cholo y de mujer.

La escasa participación de los jóvenes, que carecen de políticas que promuevan su participación, permite visibilizar un bajo índice de interés en la política. Estos datos podrían reflejar una falta de confianza en la forma específica en que ha funcionado y se practica la política en los países llamados progresistas de la región. Es más, fruto de las movilizaciones sociales en las que han participado, o que incluso han protagonizado —lucha contra la subida de tarifas del transporte público o el Mundial de Futbol en Brasil, reclamo por mantener el crudo en el subsuelo en el parque nacional Yasuní en Ecuador, o manifestaciones masivas por mejorar las condiciones de educación en Chile—, el poder político ha pasado a considerarlos como sus enemigos.

Son necesarias más investigaciones para descubrir hasta qué punto estos empeños han sido exitosos. El mapeo de las resistencias locales indica que existe un proyecto en marcha para desplazar pueblos enteros que viven encima o en torno a las riquezas que pretenden despojar. Pero tan graves como los desplazamientos masivos por emprendimientos mineros, monocultivos, megaobras o especulación inmobiliaria, son los nuevos modos inmateriales de dominación, entre los que se destaca la dependencia del sistema financiero que ha impulsado el progresismo, cuyos tentáculos llegan ahora a todos los sectores de la sociedad gracias a las políticas sociales implementadas en los últimos años.

# EPÍLOGO

## Encrucijada del pensamiento crítico y crisis de los intelectuales

Una de las consecuencias más nefastas del periodo progresista es la deserción de una generación casi completa de profesionales académicos de su papel de impulsores del pensamiento crítico. Pocas veces en la historia hemos asistido a una combinación tan extensa de simplificación del pensamiento y actitud conformista como la que observamos en estos años. Llama la atención que alguno de los más difundidos profesionales de las ideas sea capaz de comparar, por ejemplo, a Putin con Lenin, y que otros defiendan con vehemencia a sus gobiernos con el pobre argumento de que disminuyeron la pobreza.

La comparación entre el revolucionario ruso y el ex integrante del KGB devenido en presidente, es una muestra de lo que el subcomandante Galeano denominara "pensamiento perezoso". Hacer hincapié en la pobreza como argumento central en la defensa del progresismo es tanto como tirar por la borda los ricos debates habidos en cada una de las revoluciones triunfantes, en aras de un pensamiento adaptado a la lógica del Banco Mundial que ha hecho del "combate a la pobreza" su estrategia para disciplinar sociedades.

Aquellos potentes debates sobre el "socialismo en un solo país" entre los partidarios de Trotsky y Stalin; sobre los caminos para superar la oposición entre trabajo intelectual y manual, o entre dirigentes

y dirigidos, durante la revolución cultural china; o la controversia sobre la ley de valor en las sociedades de transición que protagonizara el Che con Mandel y Bettelheim, en la que también participó Paul Sweezy, entre otros, parecen cosas de otro mundo al lado de las grises y penosas argumentaciones que escuchamos estos años.

Hay varias razones que pueden explicar este deterioro. El de intelectual no es un oficio o profesión; es una tarea colectiva al servicio de sujetos colectivos en lucha. El pensamiento crítico no puede estar atado a los poderes existentes y debe desplegarse libremente, con especial vocación autocrítica, no por masoquismo sino por el interés que todo rebelde debe tener en hacer balance para ajustar sus prácticas.

Según la literatura sobre el tema, el nacimiento del término intelectual –tal y como lo concebimos en la actualidad- tiene su origen en Francia, a finales del siglo XIX, fruto de la actividad solidaria con Alfred Dreyfus (caso Dreyfus), un capitán del ejército francés de origen judío, quien pese a la fragilidad de las pruebas, fue considerado culpable de alta traición por entregar información secreta al agregado militar alemán en París, siendo condenado a cadena perpetua en la mítica Isla del Diablo, a 11 kilómetros de la costa de la Guayana Francesa.

Un alegato a favor del capitán Dreyfus escrito por Émile Zola —máximo exponente del naturalismo literario— publicado por el diario *L'Aurore* el 13 de enero de 1898 bajo el título "J'accuse.. !" (Yo acuso), derivó al día siguiente en un manifiesto cuyo encabezamiento era *Una protesta*. Anatole France, Pierre Louÿs, Charles Seignobos, Marcel Proust y Charles Péguy fueron sus firmantes, entre muchos otros. George Clemenceau, jefe de redacción del *L'Aurore* los definiría como "esos intelectuales que se agrupan en torno de una idea y se mantienen inquebrantables".

En Rusia, unos años más tarde, se desarrollará el término *intelligentsia*, como bien indica el sociólogo Carlos Altamirano, para concebirse a sí misma como un segmento cultural "con una misión redentora" (Altamirano, 2013: 35). El vocablo intelectuales terminará conviviendo con el de *intelligentsia* de manera indistinta.

Altamirano, en su obra *Intelectuales*, destaca la formulación clásica de esta concepción en el manifiesto publicado en 1928 por

Julien Brenda, *La traición de los intelectuales*. Dicho texto resalta la función del intelectual no como política ni sociológica, "sino trascendente y de orden moral" (*ibid*.: 39). Brenda indica "me parece importante que existan hombres, aun cuando se zahiera, que guíen a sus semejantes a otras religiones que no sean las de lo temporal. Pero los que sobrellevan la carga de esa tarea, y yo los llamo 'clérigos', no sólo no lo afrontan, sino que cumplen la tarea contraria".

Jean Paul Sartre fue más allá y en 1945 escribió en la revista *Le Temps Modernes*, "considero a Flaubert y a Goncourt responsables de la represión que siguió a la Comuna porque no escribieron una palabra para impedirla". Para el padre del existencialismo, la misión de un intelectual es proporcionar a la sociedad una "conciencia inquieta" de sí misma, "una conciencia que la arranque de la inmediatez y despierte la reflexión" (*ibid*.: 46). Se trata entonces de un intelectual comprometido y crítico pero autónomo respecto a los poderes y los aparatos políticos —ni sujeto al poder político o religioso, ni subordinado al partido revolucionario.

Por último, cabe rescatar al palestino Edward W. Said, quien en *Representaciones del intelectual* (1996) sentencia:

> Básicamente, el intelectual […] no es ni un pacificador ni un fabricante de consenso, sino más bien alguien que ha apostado con todo su ser a favor del sentido crítico, y que por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles, o clisés estereotipados, o las confirmaciones tranquilizadoras o acomodaticias de lo que tiene que decir el poderoso o convencional, así como lo que éstos hacen (Said, 1996: 39).

Altamirano resume el pensamiento de Said identificándolo como "contradictor del poder, perturbador del *statu quo*, su papel es el de francotirador: plantea públicamente cuestiones incómodas para los gobernantes, desafía las ortodoxias religiosas e ideológicas de su sociedad y su espíritu indócil no se deja domesticar por las instituciones" (Altamirano, 2013: 48).

A Marx los intelectuales no le despertaron mayor interés. En el prólogo de *La ideología alemana* —escrito junto a Engels entre 1845 y 1846— hizo alusión a éstos irónicamente, indicando que "un hombre listo dio una vez en pensar que los hombres se hundían en el agua y se ahogaban simplemente porque se dejaban llevar de

la idea de la gravedad". No obstante, marxistas como Karl Kausky y Antonio Gramsci, entre otros, abordaron extensamente el tema. Para Gramsci el concepto de intelectual orgánico –definido por el lugar y la función que ocupa en el seno de una estructura social— es parte de sus conceptos centrales y definitorio de su pensamiento. Es así que el fundador del Partido Comunista Italiano considerará que una nueva cultura emancipatoria no puede formarse sin una contrahegemonía, identificando a los intelectuales en el centro de esta escena política como un grupo social que despliega esa tarea hacia el conjunto.

> Los intelectuales son los 'empleados' del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, a saber: 1) del 'consenso' espontáneo que las masas de la población dan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo social dominante, consenso que históricamente nace del prestigio (y por lo tanto de la confianza) detentado por el grupo dominante, de su posición y de su función en el mundo de la producción; 2) del aparato de coerción estatal que asegura 'legalmente' la disciplina de aquellos grupos que no 'consienten' ni activa ni pasivamente, pero que está preparado por toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis en el comando y en la dirección, casos en que el consenso espontáneo viene a menos (Gramsci, 2004: 127).

Entonces, Gramsci entiende que la labor del intelectual es la justificación ideológica de la superestructura político-ideológica existente, lo cual evidentemente se hace en beneficio del predominio social de la clase dominante. Pero el intelectual puede optar por el compromiso con los más desfavorecidos, aun proviniendo de una clase superior —dice Gramsci—, estableciendo su crítica en beneficio de las clases dominadas y trabajando como "intelectual orgánico" para ellas, lo que incluye su desclasamiento.

De las tres formas históricas de "intelectual orgánico" que reconoce Gramsci (clero en las sociedades feudales medievales, intelectual liberal en el mundo burgués e intelectual al servicio del partido revolucionario como expresión del movimiento obrero), es la de traidor a su clase con la que más le gusta identificarse a la intelectualidad en boga en América Latina. La parte del pensamiento latinoamericano a la que le gusta considerarse *intelligentsia* olvidó

la esencia de esa intelectualidad rebelde, autónoma y crítica que dio origen a espacios de pensamiento construidos desde la racionalidad para cuestionar al poder, pasando a ejercer sus funciones en el ámbito de la legitimación. Estos "intelectuales orgánicos" de hoy abogan en largos y muchas veces tediosos textos compuestos por un mosaico de fragmentos ideológicos —en muchas ocasiones inconexos—por la "revolución", el "socialismo" y la "patria grande", bajo una redoblada fe en presidentes y otros liderazgos institucionales.

Aunque la figura del intelectual orgánico haya perdido su sentido, esta intelectualidad latinoamericana afín a los nuevos gobiernos —bajo un pretendido desarrollo contemporáneo del pensamiento crítico— volvió a entender la política como algo vinculado a la gestión del poder. Así, la dominación, considerada por el filósofo francés Jacques Rancière como mera administración de las partes nominalmente reconocidas, vuelve a quedar asociada al concepto foucaultiano de policía. Para un pensamiento político acotado por lo sistémico, no hay espacio para el sector social que no se siente representado. Desde el pensamiento binario, eso es un factor que desune.

> A partir del siglo XVII, va a comenzarse a llamar "policía" al conjunto de los medios por los cuales se puede hacer crecer las fuerzas del Estado manteniendo al mismo tiempo el buen orden de este Estado. Es decir la policía, va a ser el cálculo y la técnica que va a permitir establecer una relación móvil, pero a pesar de todo estable y controlable, entre el orden interior del Estado y el crecimiento de sus fuerzas (Foucault, 2011: 320).

Ha sido banal, por no decir irrisorio, el pretendido intento por desarrollar un "pensamiento crítico orgánico" latinoamericano, funcional al poder institucional de los gobiernos progresistas de la región. El fracaso de tal intento se relaciona con sus propias contradicciones: a) no puede existir un pensamiento crítico que no tenga anclaje en la célebre propuesta de Pierre Vilar de pensar históricamente (Vega, 2012) y, por lo tanto, cuestionar la impuesta aceptación de que siempre ha existido y existirá el capitalismo, motivo por el cual la cancha de juego queda reducida a tratar de "humanizarlo" (el pensamiento crítico es un pensamiento radicalmente anticapitalista); b) el pensamiento

crítico es un pensamiento radical y abierto, supone profundizar sin concesiones en los mecanismos que mantienen la dominación, lo cual no permite espacios de seducción con el poder, y lo hace desde una reflexión mucho más amplia que la ortodoxia marxista (incorpora al anarquismo, al ecologismo, al feminismo, al indigenismo…); c) el pensamiento crítico es un pensamiento anticolonialista y se pretende como superador del concepto eurocéntrico de progreso y todo su cortejo de muerte y destrucción (*ibid.*); d) el pensamiento crítico es comprometido y no meramente contemplativo, está embarcado en la acción política y por ello es reprimido, perseguido y despreciado por los espacios de poder; e) el pensamiento crítico no se pavonea ante el espejo ni se beneficia materialmente de coyuntura política alguna, lo que implica que consciente de que el *business* académico implica anular el criterio sartreano de que la universidad está hecha para personas capaces de dudar, entiende que el pensamiento crítico se construye mucho más allá de los espacios universitarios y debates entre élites académicas.

Creemos que estamos asistiendo al final de una generación de intelectuales y, probablemente, de la función misma del intelectual. En parte, porque han dejado de ser pensadores críticos, pero también porque se han distanciado de la vida real, de los movimientos, de la gente común a la que deberían servir. En este punto, el ocaso de las intelectuales como profesionales del pensamiento es una buena noticia, ya que libera al pensamiento crítico de dos ataduras que lo han convertido en pensamiento dócil y cansino: la cuestión material y el individualismo, estrechamente ligados al eurocentrismo.

El primero es el tema que plantea Alberto Flores Galindo en su *Testamento* (1989), cuando argumentó que la separación entre ética y política llevó a la incorporación de toda una camada de intelectuales al orden establecido. "Mientras el país se empobrecía de forma dramática, en la izquierda mejorábamos nuestras condiciones de vida", ya que el trabajo en fundaciones y ONG llevó a esa generación a que "terminámaros absorbidos por el más vulgar determinismo económico" (Flores Galindo, 1989). Es un texto crítico y, por lo tanto, autocrítico.

Buena parte de los profesionales del pensamiento de hoy viven en la abundancia material, abusando de los beneficios que otorga

la academia, lo que les permite poseer viviendas lujosas atendidas por empleadas domésticas, practicando formas de vida propias de la burguesía. Hacen lo que sea por mantener ese estatus, lo que en sus escritos se hace visible cuando "olvidan" los protagonismos populares que hicieron posible el ciclo progresista y sólo atienden al papel de los dirigentes que, en sintonía con toda la tradición del pensamiento crítico, debemos considerar que juegan un papel secundario en las luchas por la emancipación.

La segunda cuestión es que ese tipo de intelectuales individualistas y eurocéntricos ya no son necesarios. Más aún, son una rémora, un peso inerte para los movimientos antisistémicos. Podemos coincidir con Arturo Escobar en que "el pensamiento crítico latinoamericano es más vibrante que nunca" (Escobar, 2016), pero a condición de situarlo en otros espacios y tiempos, de la mano de otros actores. Es un pensamiento colectivo que emerge en las mingas, las fiestas comunitarias, las cocinas comunes, los territorios de las periferias urbanas, los mercados populares y durante los levantamientos indígenas, campesinos y negros que salpican el continente. O sea, en todo aquel espacio-territorio donde los de abajo reproducen la vida y resisten la muerte.

Es a esos pensamientos/territorios a los que nos debemos. Muy a menudo ellos vienen formulados por pensadores comunitarios, con apellidos que no se pronuncian en las academias pero pueblan los prontuarios policiales. Hugo Blanco, Luis Macas, Máxima Acuña, Héctor Llaitul, subcomandante insurgente Moisés, Amancay Diana Sacayán, Lorenzo Muelas, Hamilton Borges, Óscar Olivera, son algunos de los referentes del nuevo pensamiento colectivo, rebelde y anticapitalista porque encarnan a sus pueblos. En adelante, será con ellos y ellas, en sus comunidades y palenques; no más con los que hablan lindo pero frecuentan los despachos del arriba. Éste es otro de los aprendizajes que nos deja la década progresista.

# Bibliografía


Actis, Esteban y Julieta Zelicovich (2012), "Crisis de los modelos neodesarrollistas del Mercosur: Argentina y Brasil", ponencia presentada en el X Congreso Nacional – III Congreso Internacional sobre Democracia: *La democracia como proyecto abierto; nuevo orden mundial y desafíos del siglo XXI*, Rosario.

Agamben, Giornio (2005), *Estado de excepción,* Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Altamirano, Carlos (2013), *Intelectuales*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Althusser, Louis (1974), *La Filosofía como arma de la revolución*, Madrid, Siglo XXI.

Amin, Samir (1974), *Elogio del socialismo*, Barcelona, Anagrama.

---------- (1976), *Imperialismo y comercio internacional. El intercambio desigual*, Madrid, Siglo XXI.

---------- (1981), *La ley del valor y el materialismo histórico*, México, FCE.

Araníbar, Antonio y Benjamín Rodríguez (2013), *América Latina, ¿Del neoliberalismo al neodesarrollismo?*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Arze, Carlos y Javier Gómez (2013), "¿El proceso de cambio nos conduce al Buen Vivir?", en Edgardo Lander *et al*., *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*, La Paz, IEE/CEDLA/CIM, pp. 37-137.

Azzellini, Darío (2015), *La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela*, Caracas, El perro y la rana.

---------- (2016), *Comunas y control obrero en Venezuela: construyendo el socialismo del siglo XXI desde abajo*, inédito.

Baudrillard, Jean (2006), *La agonía del poder*, Madrid, Ediciones Pensamiento.
Benjamin, Walter (2010), *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, Bogotá, Desdeabajo.
Bernardo, João (1977), *Lucha de clases en China (1949-1976)*, Madrid, Zero.
---------- (2009), *Economía dos conflitos sociais*, Expressão Popular, São Paulo.
---------- y Luciano Pereira (2008), *Capitalismo sindical*, São Paulo, Xamá.
Bettelheim, Charles (1974), *Revolución cultural y organización industrial en China*, Buenos Aires, Siglo XXI.
---------- (1976), *Las luchas de clases en la URSS. Primer periodo (1917-1923)*, Madrid, Siglo XXI.
---------- (1987), "Lo específico del capitalismo soviético", en *Monthly Review* (Selección de artículos 1985-1986), Madrid, Revolución, junio, pp. 67-92.
Blackburn, Robin (2005), "The Global Pension Crisis: from Gray Capitalism to Responsible Accumulation", en *Politics & Society,* vol. 34, núm. 2, pp. 136-186.
Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (1985), *Diccionario de política*, Madrid, Siglo XXI.
Bottomore, Tom (1995), Élites y sociedad, Madrid, Talasa.
Boudon, Raymond y François Bourricaud (1980), *Dictionnaire critique de la sociologie*, París, PUF.
Bourdieu, Pierre (1998), *La esencia del neoliberalismo*, París, Le Monde Diplomatique.
---------- (2000), *Las estructuras sociales de la economía*, Buenos Aires, Manantial.
Braudel, Fernand (1985), *La dinámica del capitalismo*, Madrid, Alianza.
Bresser Pereira, Luiz Carlos (1998), "La reconstrucción del Estado en América Latina", en *Revista de la CEPAL*.
Bulhões Cecilio, Marco (2012), "Fernand Braudel no mundo contemporáneo e a acumulação acelerada de riquezas: economía de mercado e capitalismo como opostos", tesis de maestría, Rio de Janeiro, Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Brocca, Magdalena, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli (2013), "Policía, seguridad y Código de Faltas", en Secretaría de Extensión Universitaria, *Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba*, Córdoba.
Burdín, Gabriel, Fernando Esponda y Andrea Vigorito (2014), *Desigualdad y altos ingresos en Uruguay*, Montevideo, Instituto de Economía-FCEA.
Caicedo Ortiz, Julián Andrés (2014), "Reconstruir para el futuro. La crisis de la forma-Estado en América Latina", en *Revista de Estudios Latinoamericanos*, vol. 59, pp. 165-191.

Calla Ortega, Ricardo (1990), *El capitalismo de Estado*, La Paz, Flacso.
Capella, Juan Ramón (2007), *Entrada en la barbarie,* Madrid, Trotta.
Carvajal, Rolando (2013), "Descontroles y fraude en la minería aurífera boliviana", en *Rebelión*, 28 de diciembre. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/178741.pdf [consulta: 20 de noviembre de 2015]
Castoriadis, Cornelius (1979), *Poder, política, autonomía*, Barcelona, Kairos.
Castoriadis, Cornelius (1995), *Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto*, Barcelona, Gedisa.
Cecosesola (2009), *Hacia un cerebro colectivo*, Barquisimeto.
CEPAL (2015), "Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China", Santiago.
Chavance, Bernard (1987), *El sistema económico soviético*, Madrid, Revolución.
Composto, Claudia (2012), "Acumulación por despojo y neoextractivismo en América Latina. Una reflexión crítica acerca del Estado y los movimientos socioambientales en el nuevo siglo", en *Astrolabio,* núm. 8.
Coraggio, José Luis y Natalia Quiroga Díaz (2005), "El lugar para el desarrollo local en la agenda global", en *Foro,* núm. 10.
Coutinho, Carlos Nelson (2004), "Gramsci y el 'Sur' del mundo", en *Poder y Hegemonía Hoy*, México, BUAP/Plaza Valdéz.
De Oliveira, Francisco (2009), "O avesso do avesso", en *Revista Piauí*, núm. 37, octubre.
De Sousa Santos, Boaventura (2010), *Refundación del Estado en América Latina*, Perú, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS ILLS)/ Programa Democracia y Transformación Global.
Del Río, Eugenio (1981), *La teoría de la transición al comunismo en Mao Tse Tung (1949-1969)*, Madrid, Revolución.
---------- (1993), *La sombra de Marx*, Madrid, Revolución.
Denis, Roland (2001), *Los fabricantes de la rebelión*, Caracas, Primera Línea.
Deutscher, Isaac (1970), *Raíces de la burocracia*, Madrid, Anagrama.
Dosman, Edgar J. (ed.) (2006), *Raúl Prebisch: El poder, los principios y la ética del desarrollo*, Buenos Aires, BID-INTAL.
Engels, Friedrich (2012), *Anti-Dühring*. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/78ad/78AD.htm
Escobar, Arturo (2016), "Desde abajo, por la izquirda y con la Tierra", 17 de enero. Disponible en: http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2016/01/desde-abajo-por-la-izquierda-y-con-la-tierra.html [Consulta: 2 de febrero de 2016]
Fals Borda, Orlando (2005), *Autonomía territorial y ubicuidad militar*. Disponible en: www.voltairenet.org/article124733.html [Consulta, 20 de enero de 2016]
Félix, David (1987), "Alternative Outcomes of the Latin American Debt Crisis: Lessons from the Past", en *Latin American Research Review* , vol. 22.

Fernández Arrigoitia, Melissa (2015), "Minha Casa, Minha Vida reproduz injusticia social", en *BBC Brasil,* 22 de octubre. Disponible en: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151020_minha_casa_minha_vida_pes quisa_tg [Consulta: 30 de noviembre de 2015]

Ferreira de Souza, Pedro (2015), "Série inédita brasileira mostra salto da desigualdade no comezo da ditadura", en *El País*, 4 de noviembre. Disponible en: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/29/economia/1446146892_377075.html [Consulta: 26 de noviembre de 2015]

Ferrer, Francisco (2009), "Expansión financiera y génesis de la crisis", en *Taifa*, núm. 6, Seminari d´ Economia Critica Taifa Barcelona, junio.

Flores Galindo, Alberto (1989), "Testamento", 14 de diciembre, Lima, Sur.

Foucault, Michel (2011), *Seguridad, territorios, población*, Buenos Aires, FCE.

Francescone, Kirsten y Vladimir Díaz (2013), "Cooperativas mineras. Entre socios, parrones y peones", en *Petropress*, núm. 30, Cochabamba, CEDIB, enero-febrero, pp. 32-41.

Gago, Verónica y Sandro Mezzadra (2015), "Para una crítica de las operaciones extractivas del capital", en *Nueva Sociedad,* núm. 255, enero-febrero. Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/4091_1.pdf [Consulta 16 de enero de 2016]

García Linera, Álvaro (2014), *Democracia, Estado, Nación, Vicepresidencia del Estado Plurinacional*, La Paz.

---------- (2015), "El proceso boliviano en clave regional", Conferencia dictada el 29 de septiembre en II Encuentro Latinoamericano Progresista – ELAP 2015, Quito.

Garretón, Manuel (2003), *Latin America in the Twenty-First Century: Toward a New Sociopolitical Matrix*, Boulder, Lynne Rienner Publishers.

Gorz, André (1972), "Sindicalismo y política", en AAVV, *La sociedad industrial contemporánea*, México, Siglo XXI.

Goussev, Alexei (1998), "La clase imprevista: La burocracia soviética vista por León Trotsky", en *Herramienta*, núm. 7, julio. Disponible en: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-7/la-clase-imprevista-la-burocracia-sovietica-vista-por-leon-trotsky [Consulta: 15 de enero de 2016]

Gramsci, Antonio (2004), *Los intelectuales y la organización de la cultura*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Guevara, Ernesto "Che" (1969), *Escritos económicos*, Córdoba, Pasado y Presente.

---------- (1976), *Obras Escogidas*, t. 2, Madrid, Fundamentos.

Gutiérrez, Raquel (2008), *Los ritmos del Pachakuti*, La Paz, Textos Rebeldes.

Habel, Janette (1994), *Rupturas en Cuba*, México, Universidad Veracruzana.

Harvey, David (2004), *El nuevo imperialismo,* Madrid, Akal.

Horkheimer, Max (1983), *El Estado autoritario*, Bogotá, Argumentos.

Houtart, Francois (2009), *El camino de la utopía desde un mundo de incertidumbre*, Panamá, Rub Sass/ Clacso.

Katz, Claudio (2004), "Au-delà du néolitéralisme", en *Contretemps,* núm. 10, París, Amérique Latine rebelle.

---------- (2014), "¿Qué es el neo-desarrollismo? Una vision crítica". Disponible en: http://katz.lahaine.org/?p=232 [Consulta: 22 de diciembre de 2015]

Keynes, John Maynard (2009), *Ensayos de persuasión*, Madrid, Síntesis.

Klare, Michael T. (2008), *Planeta sediento, recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía*, Barcelona, Urano.

Laclau, Ernesto (1977), *Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo*, México, Siglo XXI.

---------- (1978), *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo y populismo*, México, Siglo XXI.

---------- (1980), *Tres ensayos sobre América Latina*, Buenos Aires, FCE.

Lander, Edgardo (2014), *El neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones*, Berlín, Heinrich Böll Stiftung.

---------- (2015), "El tejido solidario devino en un bachaqueo individualista y competitivo", entrevista en *Contrapunto*, 9 de agosto de 2015. Disponible en: http://contrapunto.com/noticia/edgardolandereltejidosolidariodevinoenun bachaqueoindividualistaycompetitivo/ [Consulta: 12 de noviembre de 2015]

Larrea, Carlos (2004), *Dolarización, crisis y pobreza en Ecuador*, Quito, Abya Yala/ILDIS/IEE/Flacso.

Lavinas, Lena (2015), "A financierizacao da política social", en *Politika,* núm. 2, julio, Rio de Janeiro, Fundação João Mangabeira, pp. 34-51.

Le Bon, Gustave (1986), *Psicología de las masas*, Madrid, Morata.

Leiva, Fernando (2008), *Latin American neostructuralism: the contradiccions of post-neoliberal development*, Mineápolis, University of Minnesota Press.

Lenin, V.I. (1976), "Las tareas inmediatas del poder soviético", en *Obras completas,* t. XXIII, diciembre de 1917-marzo de 1918, Madrid, Akal, pp. 443-484.

---------- (1978), "Una gran iniciativa", en *Obras completas,* t. XXI, marzo-septiembre de 1919, Madrid, Akal, pp. 275-303.

Lerais, Frédéric; Murielle Fiolo, Frédéric Busson, John Buade y otros (1992), *Économie Mondiale 1990-2000*, París, CEPII.

Lessa, Carlos (2015), "Essa Agenda Brasil é uma fraude. A prioridade absoluta deve ser tomar conta da rede urbana", entrevista en *IHU Online*, 18 de agosto de 2015. Disponible en: www.ihu.unisinos.br/entrevistas/545991-qessaagendabrasileumafraudeaprioridadeabsolutadeumaverdadeira-agendabrasiletomarcontadaredeurbana entrevistaespecialcomcarlos-lessa [Consulta: 26 de noviembre de 2015].

López Maya, Margarita (2002), *Protesta y cultura en Venezuela*, Buenos Aires, Clacso.

Luxemburgo, Rosa (1967), *Reforma o revolución*, México, Grijalbo.
Machado, Decio (2013), "Estado autoritario, disciplinamiento ciudadano y control social", en *Correísmo al desnudo*, Quito, Montecristi Vive.
---------- (2013), "En este Monte Sinaí no se ama al prójimo (Parte I)", en *Plan V*. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/este-monte-sinai-no-se-ama-al-projimo-parte-i/pagina/0/1
---------- (2013), "En este Monte Sinaí no se ama al prójimo (Parte II)", en *Plan V*. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/este-monte-sinai-no-se-ama-al-projimo-parte-ii
---------- (2015), "El gatopardismo correísta", en *Viento Sur*, núm. 143, diciembre.
Mandel, Ernest (1969), "El gran debate economic", en Ernesto Che Guevara, *Escritos económicos*, Córdoba, Pasado y Presente.
Mao Tse Tung (1976), "La construcción del socialismo en China", en Mao Tse Tung y José Stalin, *La construcción del socialismo en la URSS y China*, Buenos Aires, Pasado y Presente.
Maricato, Erminia (2013), Cidades Rebeldes. Passe libre e as manifestacoes que tomaram a ruas do Brasil, en *Boitempo*.
Martínez, Alexandra (2013), "Horizontes de transformación del movimiento urbano popular", en *Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI*, Quito, Fundación Rosa Luxemburg.
Marx, Karl (2000), *Crítica del Programa de Gotha*. Disponible en: Elaleph.com. http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Karl%20Marx%20-%20Critica%20del%20programa%20de%20Gotha.pdf
Medeiros, Marcelo *et al.* (2015), "A estabilidade da desigualdade de renda no Brasil, 20062012: estimativa con dados de imposto de renda e pesquisas domiciliares", en *Ciencia & Saúde Coletiva,* vol. 20, núm. 4, Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pp. 971-986.
Michrd, Jocelyn (2008), *Cooperativas mineras en Bolivia*, Cochabamba, CEDIB.
Miliband, Ralph (1988), "Estado, poder y democracia capitalista", en AAVV, *Repensar a Marx*, Madrid, Revolución, pp. 193-206.
Morlino, Leonardo (1995), "Los autoritarismos", en G. Pasquino, S. Bartolini *et al., Manual de Ciencia Política*, Madrid, Alianza.
Munis, Grandizo (1999), *Revolución y contrarrevolución en Rusia*, vol. I, Llerena, Muñoz Moya/Editores Estremeños.
Negri, Antonio (2003), *La forma Estado*, Madrid, Akal.
---------- (2015), "Hegemonía: Gramsci, Togliatti, Laclau". Disponible en: http://anarquiacoronada.blogspot.com/2015/07/hegemonia-gramsci-togliatti-laclau.html?view=classic
---------- y Giuseppe Cocco (2006), *GlobAL: Biopoder y luchas en una América Latina globalizada*, Buenos Aires, Paidós.

---------- y Michael Hard (2009), *Commonwealth*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press.

Novack, George (1979), *La teoría marxista de la alienación*, Barcelona, Fontamara.

Novaro, Marcos (1996), "Los populismos latinoamericanos transfigurados", en *Nueva Sociedad,* núm. 144.

Ocampo, Guillermo (2003), *América Latina y el Consenso de Washington. La fatiga reformista*, Finanzas y Desarrollo, FMI, Washington.

Ospina, Pablo (2013), "Estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo antes que cambiarlo", en Edgardo Lander *et al.*, *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*, La Paz, IEE/CEDLA/CIM, pp. 138-220.

Panzieri, Raniero (1974), "El control obrero dentro de una perspectiva revolucionaria", en Ernest Mandel, *Control obrero. Consejos obreros, autogestión (Antología)*, México, Era.

Pinheiro Gimarães, Samuel (2015), "A ofensiva conservadora e as crises", en *Brasil de Fato*, 18 de agosto. Disponible en: http://www.brasildefato.com.br/node/32702 [Consulta: 23 de noviembre de 2015]

Poveda, Pablo (2014), Formas de producción de las cooperativas mineras en Bolivia, La Paz, CEDLA.

Quijano, Aníbal (2000), "Colonialidad del poder y clasificación social", en *Journal of World-Systems Research*, New York, Binghampton University, vol. XI, núm. 2, verano-otoño, pp. 341-386.

Recarte, Arturo (1980), *Cuba: economía y poder (1959-1980)*, Madrid, Alianza.

Ricci, Rudá (2014), "Valores fascista e oba oba no Brasil", 22 de julio. Disponible en: http://www.rudaricci.com.br/blogruda/valoresfascistaseobaobabrasil/ [Consulta: 30 de noviembre de 2015]

Rivera, Silvia (2006), "La noción de nación como camisa de fuerza de los movimientos indígenas", en Raquel Gutiérrez y Fabiola Escárzaga (coords.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Volumen II, México, Casa Juan Pablos.

Rueda, Luis (2006), *Cooperativistas mineros: una lumpenburguesía en la minería boliviana*, La Paz, CEDLA.

Safatle, Vladimir (2015), "O povo na rua como terrorismo", en *Folha São de Paulo*, 30 de octubre. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2015/10/1700129o povonaruacomoterrorismo.shtml [Consulta, 30 de noviembre de 2015]

Salama, Pierre (2012), "China-Brasil: Industrialización y desindustrialización temprana", en *Cuadernos de Economía*, vol. 31.

Salazar Lohman, Huáscar (2015), *Se han adueñado del proceso de lucha*, Cochabamba, SOCEE/Autodeterminación.

Sevares, Julio (2007), "Volatilidad financiera y vulnerabilidad latinoamericana.

Causas, costos y alternativas", en *Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización,* Buenos Aires, Clacso.

Singer, André (2012), "O lulismo não é um monopólio do PT", en *IG*, São Paulo, 30 de septiembre. Disponible en: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/20120930/andresingero lulismonaoeummonopoliodopt.html [Consulta: 26 de noviembre de 2015]

Stolowicz, Beatriz (coord.) (2007), *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Bogotá, Ediciones Aurora.

Subcomandante Insurgente Moisés (2015a), "Economía Política I. Una mirada desde las comunidades zapatistas", en *El Pensamiento Crítico frente a la Hidra capitalista 1*, EZLN, pp. 77-96.

---------- (2015b), "Economía Política I. Una mirada desde las comunidades zapatistas", en *El Pensamiento Crítico frente a la Hidra capitalista 1*, EZLN, pp. 97-108.

Svampa, Maristella (2012), "Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina", en OSAL, año XIII, núm. 32, México.

Sweezy, Paul y Charles Bettelheim (1973), *Algunos problemas actuales del socialismo*, Madrid, Siglo XXI.

Sweezy, Paul (1983), "El marxismo y la revolución, 100 años después", en AAVV, *Repensar a Marx*, Madrid, Revolución, pp. 7-20.

---------- (1987), "Después del capitalismo, ¿qué?...", en *Monthly Review* (Selección de artículos), Madrid, Revolución, junio, pp. 49-66.

Tapia, Luis (2011), El estado de derecho como tiranía, La Paz, CIDES/UMSA, La Paz.

Thwaites, Mabel (2008), "¿Qué Estado tras el experimento neoliberal?", en *Reforma y Democracia*, núm. 41, pp. 1-12.

Torres Pérez, Miguel (2001), "El neoliberalismo y sus consecuencias para América Latina", en *Ciencia Holguín*, vol. 7, núm. 3.

Toussaint, Eric (1989), "Las crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos XIX y XX", ponencia realizada para el Seminario Internacional "América Latina y el Caribe: salir del *impasse* de la deuda y del ajuste", organizado por el CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) y por el CNCD (Centro Nacional de la Cooperación al Desarrollo) en Bruselas.

Trotsky, León (1997), *Historia de la Revolución Rusa*, Buenos Aires, Antídoto.

Vega, Renán (2012), "Elogio del pensamiento critico", texto leído en el evento *En defense del pensamiento critic*, 9 de mayo, Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=149334

Vera, Juan Manuel (2010), "Castoriadis y la dialéctica entre lo nuevo y lo Viejo", Madrid, Riff Raff.

Vidal, Gregorio y Arturo Guillén (coords.) (2007), *Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización*, Buenos Aires, Clacso.

Villegas, Pablo (2014), "Ley de minería a osta de la democracia", en *Petropress,* núm. 33, Cochabamba, CEDIB, febrero-agosto, pp. 26-29.

Viola, Carolina (2014), "El petróleo y el gas en la geopolítica de la integración energética suramericana", Flacso. Disponible en: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/6945/2/TFLACSO-2014CVR.pdf

Wallerstein, Immanuel (1979), *El moderno sistema mundial. I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economíamundo europea en el siglo XVI*, México, Siglo XXI.

---------- (1998), *Impensar las ciencias sociales*, México, Siglo XXI.

Waiselfisz, Julio Jacobo (2015), *Mapa da Violência: Os Jovens do Brasil*, Secretaría General de la Presidencia de la República, Brasilia.

Wiles, Peter (1998), "Un síndrome, no una doctrina: Algunas tesis elementales sobre el populismo", en Guita Ionescu y Ernest Geller (comps.), *Populismo: Sus significados y características nacionales*, Buenos Aires, Amorrortu.

Zibechi, Raúl (2012), *Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo*, Bogotá, Desde Abajo.

---------- (2013), "Venezuela en movimiento: para quebrar el rentismo petrolero", en *Programa de las Américas*, 23 de julio. Disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/10131 [Consulta: 12 de noviembre de 2015]

---------- (2014), "Desarrollismo y movimientos sociales en Bolivia", en *Programa de las Américas*, 20 de noviembre. Disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/13517 [Consulta: 29 de noviembre de 2015]

**Documentos y prensa:**

Artigo 19 (2015), As ruas sob ataque. Protestos 2014 e 2015, São Paulo.

Asamblea Constituyente del Ecuador (2011), Amnistías a personas involucradas en hechos acaecidos en el Cantón de Chillanes, provincia Bolívar en el paro nacional minero y casos de criminalización por defender la territorialidad, derechos colectivos y de los pueblos, 11 de julio de 2008.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AVN (2010), Ley Orgánica de Comunas, Caracas.

Asamblea Nacional de Venezuela (2006), Ley de los Consejos Comunales, Caracas.

Bolpress (2015), "El atraso de Potosí es una consecuencia del extractivismo", 25 de julio. Disponible en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2015072501 [Consulta: 24 de noviembre de 2015]

Carta Capital (2014), "Perguntas e respostas da Operação Lava Jato", en *Carta Capital*, 17 de noviembre. Disponible en: www.cartacapital.com.br/politica/perguntaserespostadaoperacao lavajato5981.html [Consulta: 22

de noviembre de 2015]

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y Agrario (2014), "Ley Minera del MAS. Privatista y antiindígena", en *Boletín de Seguimiento a Políticas Públicas,* núm. 28, La Paz, CEDLA, abril. Disponible en: http://www.redunitas.org/CEDLA_control_ciudadano_26.pdf

CELS Centro de Estudios Legales y Sociales (2015), "Derechos Humanos en Argentina. Informe Anual 2015", Buenos Aires.

CEPAL (2015), Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China, Santiago de Chile.

Centre d´Etudes Prospectives et d´Informations Internacioationales-CEPII (1992), *Économie mondiale 1990-2000: I´impératif de croissance*, París.

CIDOB-Conamaq (2013), "Manifiesto 01", 18 de enero, Cochabamba. Disponible en: http://somossur.net/documentos/Resol_CIDOB_CONAMAQ_pactoUnidad30130118.p df [Consulta: 29 de noviembre de 2015]

Correpi- Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (2013), "Informe sobre la situación represiva", en *Boletín Informativo,* núm. 705, 26 de noviembre, Buenos Aires.

Defensoría del Pueblo de Ecuador (2011), "Los escenarios de la criminalización a defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado Constitucional de Derechos". Disponibble en: http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf [Consulta: 10 de enero de 2016]

Defesanet (2015), "A geopolítica na Lava Jato", 28 de julio. Disponible en: http://www.defesanet.com.br/editorial/noticia/19892/EditorialDefesaNetAGeopolitcanaLavaJato/ [Consulta: 22 de noviembre de 2015]

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2009), Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, agosto, Bogotá.

El Universo (2012), Entrevista en canal de Televisión Ecuavisa, recogido en Universo. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/11/14/1/1355/mora-cuestiona-ley-divina-separar-poderes.html [Consulta: 17 de enero de 2016).

Federación Internacional de Derechos Humanos, CEDHU e INREDH (2015), "Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador". Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/equateur666espagn2015hd_1_.pdf [Consulta: 16 de enero de 2016]

ISTOÉ (2014), "Duque o milionário", 21 de noviembre. Disponible en: http://www.istoe.com.br/reportagens/393395_DUQUE+O+MILIONARIO [Consulta: 22 de noviembre de 2015]

Lavaca (2015), "La OMS ratificó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer", 22 de marzo. Disponible en: www.lavaca.org/notas/confirmado-la-oms-ratifico-que-el-glifosato-de-las-fumigaciones-puede-provocar-cancer/ [Consulta: 7 de enero de 2016).

Ministério da Defesa (2013), "Garantia da lei e da ordem", Brasilia. Disponible en: http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/listadepublicacoesEMD/md33_m_10_glo_1_ed2013.pdf [Consulta: 1 de febrero de 2016]

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (2012), "11º Reporte Semestral", Lima.

Observatorio FIDH/OMCT (2014), "Informe Anual 2014 del Observatorio de la protección de los defensores de derechos humanos (OBS)", "No tenemos miedo". Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado. Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2014-sp-web.pdf [Consulta: 15 de enero de 2016]

Opera Mundi (2015), 4 de noviembre. Disponible en: http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/42166/projeto+de+lei+que+tipifica+terrorismo+no+b rasil+ameaca+liberdades+fundamentais+alerta+onu.shtml [Consulta: 30 de noviembre de 2015]

PLAN V (2015), "Informe Especial: el espeluznante inventario de la represion", en *Plan V*, 31 de agosto. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/politica/informeespecialelespeluznanteinventariolarepresion [Consulta: 29 de noviembre de 2015]

Poder Naval (2015), "Ministro Jaques Wagner renegocia cronograma de construção do Riachuelo", 14 de mayo. Disponible en: http://www.naval.com.br/blog/2015/05/14/ministrojaqueswagnerrenegociacronogramadeconstrucaodoriachuelo/ [Consulta: 22 de noviembre de 2015]

Provea-Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (1989), Informe anual cctubre 1988-septiembre 1989, Caracas.

Punto Final (2012), "Revolución Ciudadana, el camino del Ecuador", en *Punto Final,* núm. 758, mayo. Disponible en: http://www.puntofinal.cl/758/rafael758.php [Consulta: 1 de febrero de 2016]

Valor (2014), "Executivos ganham aumentos moderados", 12 de febrero. Disponible en: http://goo.gl/8d5UqV [Consulta: 6 de noviembre de 2015]

Valor (2015), "Petrobras cai mais de 300 posicoes em ranking global de Forbes", 6 de mayo. Disponible en: www.valor.com.br/empresas/4038120/petrobrascaimaisde300posicoesemrankingglobaldaforbes [Consulta: 22 de noviembre de 2015]

*Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*
se terminó de imprimir en septiembre de 2017
en Mujica Impresos S.A. de C.V. con domicilio
en Camelia 4, Colonia El Manto, Del. Iztapalapa,
CP 09830, Ciudad de México
El tiraje consta de 500 ejemplares